



T E J I D O
V I V O

Dejusticia

Título: *Tejido vivo*

Primera edición: marzo de 2024

ISBN: 978-628-95367-8-2

Diseño gráfico y diagramación:

Valentina Espinosa Muskus

| Estudio Gráfico Valiente |

Impresión: Taller Artes y Letras S.A.S.

Impreso y hecho en Colombia

Printed in Colombia

Angosta Editores

www.angosta.co

Dejusticia

www.dejusticia.org

© 2024. Licencia de Creative Commons 4.0 internacional

Atribución-No Comercial-Compartir Igual CC BY-NC-SA.

Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio o formato únicamente con fines no comerciales y siempre que se otorgue la atribución al creador. Si remezcla, adapta o construye sobre el material, debe licenciar el material modificado bajo términos idénticos.



T E J I D O
V I V O

Dejusticia

Quien lea este libro se encontrará con 32 historias de organizaciones colombianas de la sociedad civil que, por medio de sus valores colectivos, de solidaridad y empatía, le han aportado inmensamente al avance de la protección jurídica y social de los derechos humanos en el país, y al fortalecimiento de su democracia. Son historias narradas desde un estilo periodístico que cuentan la razón de ser de estas organizaciones, por qué nacieron y qué es lo que le aportan a nuestra sociedad. Este libro también ofrece historias de personas valientes que, lejos del interés en el poder político y del ánimo de lucro empresarial, se han organizado voluntariamente y han logrado grandes conquistas en el terreno de los derechos humanos, a pesar de la constante violencia que azota a los líderes y lideresas sociales del país. Organizaciones, en su mayoría rurales y de base comunitaria, que desde distintos lugares del territorio colombiano han creado formas de resistir a la discriminación, la guerra y la violencia, por medio de nuevas alternativas económicas, políticas y jurídicas, en donde la música, el arte y la cultura son un elemento esencial de su quehacer y activismo.

El proceso de construcción de este libro reunió a periodistas aliados, y a investigadoras e investigadores de Dejusticia, que desde sus distintos quehaceres como parte de la sociedad civil, han dedicado su trabajo a reflexionar sobre la riqueza de este tercer sector y sobre su papel en el mismo.

Palabras clave:

Sociedad Civil, Organizaciones de Base Comunitaria, Defensores de derechos humanos, Democracia, Tejido Vivo, Líderes sociales, Angosta Editores, Dejusticia.

Para citar este libro:

Chaparro González, N. (Ed.), Díaz García, I., Forero Hernández, A., & Barragán González, M. (2024). *Tejido Vivo*. Angosta Editores.

Índice

Agradecimientos	14
Introducción	16
Bibliografía	25
Igualdad en libertad: Mujeres Libres para una política criminal más justa	26
CORPORACIÓN MUJERES LIBRES	
Juan Sebastián Hernández	
La libertad de elegir una vida plena con discapacidad	32
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SÍNDROME DE DOWN-ASDOWN	
Juan Carlos Jaimes	
“Que subsista el monte y también nosotros”: la apuesta de los campesinos en Caquetá	38
ASOCIACIÓN CAMPESINA CORDILLERA DE LOS MUNICIPIOS MONTAÑITA, FLORENCIA, PAUJIL Y DONCELLO - ACOMFLOPAD	
Marcela Madrid Vergara	
“Perdí a mi único hijo, pero gané muchos más”	44
FUNDACIÓN SERGIO DAVID URREGO REYES	
María Mercedes Acosta	
Anzorc: más de veinte años de lucha por la dignidad campesina	50
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA - ANZORC	
Simón Uprimny Añez	
Baruleras Poderosas	56
FUNDACIÓN PODEROSAS COLOMBIA	
Adriana Abramovits	
La lucha por la Justicia Racial desde los datos y el litigio	62
CORPORACIÓN ILEX - ACCIÓN JURÍDICA	
Carolina Rodríguez Mayo	

Una organización que apoya a los avá.	68
CORPORACIÓN CHACANA	
Carolina Mila	
Pintadillo con primitivo: las mujeres que cuidan la tradición negra en el Caquetá	76
FUNDACIÓN RED DE MUJERES AFROAMAZÓNICAS - UBUNTU	
Paloma Cobo	
Ser una organización feminista es todo un reto en Riohacha	82
ASOCIACIÓN EVASYADANES	
María Mercedes Acosta	
“Una persona con autismo no vive en su propio mundo”: trece años derribando estigmas sobre el autismo en Colombia	88
LIGA COLOMBIANA DE AUTISMO - LICA	
Sofía Forero Alba	
El centro es la periferia: un círculo de palabra en la Fundación Caminos de Identidad -FUCAI-	92
FUNDACIÓN CAMINOS DE LIBERTAD - FUCAI	
Paloma Cobo	
La lucha del campesinado colombiano para ser reconocido y contado	98
ASOCIACIÓN CAMPESINA DE INZÁ TIERRADENTRO - ACIT	
José Darío Puentes Ramos	
El espacio que descentraliza la paz desde los Montes de María	106
ESPACIO REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ DE LOS MONTES DE MARÍA	
Ivonne Elena Díaz García	
El corazón de la isla	114
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO RURAL DE LAS ISLAS DEL ROSARIO - ORIKA	
Vivian Newman	

Una apuesta feminista desde el Norte del Cauca	120
CORPORACIÓN ENSAYOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA	
Andrea Forero Hernández	
La lucha de las mujeres afro del norte del Cauca se cuenta en canciones	126
ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DEL NORTE DEL CAUCA - ASOM	
Mariana Escobar Roldán	
La resistencia del pueblo negro de la costa pacífica del Cauca	132
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE BASE DEL PUEBLO NEGRO DE LA COSTA PACÍFICA DEL CAUCA - COCOCAUCA	
Paloma Cobo y Daniel Ospina Celis	
Un laboratorio narrativo para sanar	138
ASOCIACIÓN NARRARTE	
Adriana Abramovits	
Uma Kiwe – Madre Tierra: una apuesta narrativa por el cuidado del agua y la vida en Mocoa	144
CORPORACIÓN UMA KIME - MADRE TIERRA	
Natalia Escobar	
La lucha de ACIMVIP: Sacha Muiu y la protección del Territorio	150
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS INGAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO - ACIMVIP	
Paula Andrea Valencia Cortés	
El pueblo kankuamo como muralla de la Sierra Nevada	156
RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO	
Paulo Ilich Bacca y Dayanna Palmar Uriana	
Providencia: isla chica, Caribe grande.	162
MOVIMIENTO DE VEEDURÍA CÍVICA DE OLD PROVIDENCE	
Santiago Ardila	

Buenaventura: soñar es resistir	170
SECRETARIADO DIOCESANO PASTORAL SOCIAL	
Daniel Ospina Celis	
Montes de María, una despensa de historias	174
EQUIPO DE COMUNICACIÓN RURAL DE LOS MONTES DE MARÍA	
Marcela Madrid Vergara	
Las mujeres kankuamas, el tejido vivo y la justicia ancestral	182
COMITÉS COMUNITARIOS KANKUAMOS	
Omaira Marcela Cárdenas Mendoza, Mariana Camacho Muñoz y Diana Quigua	
Corporación Vínculos, dos décadas apostándole a aliviar el sufrimiento emocional de la guerra	188
CORPORACIÓN VÍNCULOS	
José Darío Puentes Ramos	
El sonido de las “otras” voces del Caribe.	194
ASOCIACIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA VOKARIBE	
Ivonne Arroyo Mercado	
Mercados campesinos: del campo a la ciudad sin intermediarios	198
MUTUAL COMUNAL AGROALIMENTARIA - AGROCOMUNAL	
Nina Chaparro González	
Baudó AP: un río de historias	204
AGENCIA PÚBLICA BAUDÓ	
Adriana Abramovits	
Defender el ambiente y avanzar por los derechos campesinos	210
ASOCIACIÓN CAMPESINA AMBIENTAL DEL LOSADA GUAYABERO - ASCAL-G	
Ana María Malagón Pérez	
Sentiido: el buen periodismo al servicio de la diversidad	216
FUNDACIÓN SENTIIDO	
Marcela Madrid Vergara	

Agradecimientos

La realización de este libro contó con la ayuda invaluable de 32 organizaciones de la sociedad civil con quienes trabajamos en Dejusticia durante el año 2023 y admiramos profundamente. Ellas fueron:

Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca-ASOM, Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, Liga Colombiana Autismo-LICA, Asociación campesina Cordillera de los municipios de Montañita, Florencia, Paujil y Doncello-ACOMFLOPAD, Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence, Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero(ASCAL-G), Fundación Poderosas Colombia, Asociación Colombiana de Síndrome de Down, Fundación Sergio David Urrego Reyes, Asociación Campesina de Inzá Tierradentro-ACIT, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC, Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política, Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca-Cococauca, Fundación Red de Mujeres Afroamazónicas-UBUNTU, Asociación Evas&Adanes, Secretariado Diocesano Pastoral Social, Equipo de Comunicación Rural Montes de María, Corporación Mujeres Libres, Resguardo Indígena Kankuamo, Asociación Narrarte, Corporación Chacana, Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de las Islas del Rosario, Corporación Uma Kiwe-Madre Tierra, Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo-ACIMVIP, Corporación Raizal Development Center, Fundación Caminos de Identidad FUCAI, Mutual Comunal Agroalimentaria Agrocomunal,

Agencia Baudó, Asociación Vokaribe, Corporación Vínculos, Sentiido y Corporación Ilex-Acción Jurídica.

Extendemos este agradecimiento especial a las y los periodistas aliados e investigadores de Dejusticia que entre abril y agosto de 2023 escribieron estos artículos para el especial Tejido Vivo que realizamos en alianza con El Espectador.

Adicionalmente, agradecemos al equipo de Dejusticia, en particular, a Diana Esther Guzmán, Vivian Newman y Rodrigo Uprimny, quienes nos prestaron su enorme apoyo intelectual. También a William Morales, Juan David Cabrera, Jazmín Mejía, Claudia Luque, Luis Daza, Diego Espinel, Elvia Sáenz, Yaneth Vargas, Tania Higuera, Adyluz Ruiz, Sandra Forero, Lucía Albarracín, Diego Álvarez, Alexander Rojas, Natalia González y Andrés Castañeda, ya que fueron fundamentales en las múltiples tareas administrativas y logísticas que están detrás de la publicación de este libro.

Igualmente, agradecemos a El Espectador, por trabajar en la publicación de este especial periodístico, y a Angosta Editores, por poner todo su conocimiento y trabajo en la creación de esta publicación.

Finalmente, agradecemos el apoyo dado por la Fundación Ford en la realización de esta publicación.

Introducción

NINA CHAPARRO GONZÁLEZ*

IVONNE DÍAZ GARCÍA**

ANDREA FORERO HERNÁNDEZ***

MARYLUZ BARRAGÁN GONZÁLEZ****

¿Qué es la sociedad civil? Es una pregunta difícil que ha tenido distintas respuestas. Por un lado, hay quienes afirman que es un grupo de personas que “defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los sujetos, así como la libre asociación y la intervención y mediación con el Estado y la economía en favor de la ciudadanía” (Hernández, 2015). Por otro lado, algunos autores ponen en duda esta faceta benévola y señalan que la sociedad civil es parte de la agenda neoliberal pues cumple con el rol de desplazar al Estado de sus funciones sociales y aliviana, mas no soluciona tensiones de injusticias sociales (Kaldor, 2003; Rieff, 1999). Finalmente, algunos señalan que este concepto es un término vacío sin un significado particular en donde puede caber todo y nada.

Sin bien la *Sociedad Civil* es un concepto difícil de determinar debido a la diversidad de las organizaciones y sus distintas naturalezas, consideramos acertada la definición de varios autores según la cual la sociedad civil es un “tercer sector” pues no representa ni al Estado ni al mercado (Arato y Cohen, 2000; Scholte, 1999). Es decir, por un lado, no se considera estatal pues no tiene interés en llegar al poder político y, por tanto, es independiente de los partidos y del gobierno de turno (Uprimny y Newman, 2023). Y, por el otro, tampoco

***Nina Chaparro González**

Investigadora senior y coordinadora del Hub de Servicios de Fortalecimiento a la Sociedad Civil en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.

****Ivonne Díaz García**

Filósofa y coordinadora del área de regionalización del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.

*****Andrea Forero Hernández**

Politóloga e investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.

******Maryluz Barragán González**

Abogada y Subdirectora Misional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.

representa los intereses del sector privado empresarial con ánimo de lucro. Scholte también resalta que este tercer sector se caracteriza por ser voluntario, es decir, son organizaciones que nacen de la libre voluntad de asociación de las personas que generalmente se orientan hacia un interés común.

En la práctica, existen casos que parecen grises y sobre los que merece la pena reflexionar, por ejemplo, cuando algunas ONGs son financiadas por el Gobierno y son tan cercanas a este que su capacidad de crítica e independencia se ven limitadas, o cuando son ONGs o fundaciones creadas por empresas en donde no existe tal independencia pues sus consejos directivos son los mismos que los de las empresas fundadoras. En ese sentido, si bien existen casos que generan dudas, de forma general es posible afirmar que esta categoría abarca a centros de estudios académicos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, defensores y activistas de derechos humanos, instituciones religiosas, entre otros (Scholte, 1999).

La importancia de la sociedad civil radica principalmente en dos factores. En primer lugar, son asociaciones que le permiten al ciudadano de a pie participar de forma libre en deliberaciones profundas sobre demandas que impactan directa o indirectamente sus vidas. En otras palabras, para que exista una democracia robusta no basta con que haya un mercado sólido e instituciones estatales y partidos políticos fuertes, sino que también se necesitan este tipo de asociaciones para que las personas puedan debatir y formarse una opinión en espacios para discutir propuestas en los que se aspire a influir en la agenda pública pero sin la idea de convertirse en el poder político estatal. Este tipo de organizaciones ha generado enormes contribuciones a las luchas de los movimientos sociales, a alcanzar derechos y, en consecuencia, al fortalecimiento de las democracias (Kumar, 2012).

En segundo lugar, la existencia de la sociedad civil implica la participación de otros actores distintos a las superpotencias estatales y las corporaciones multinacionales en la arena política. Este hecho tiene un efecto democratizador que enriquece los debates, fortalece la transparencia de los procesos públicos y pone sobre la mesa preocupaciones locales y globales que no están mediadas por intereses económicos o de poder político. Así, por ejemplo, fue gracias al trabajo de distintos actores de la sociedad civil que a mediados del siglo XX disminuyeron los crímenes contra los derechos humanos y se crearon instituciones de monitoreo y estándares de los mismos en la ley internacional para la protección de las poblaciones vulnerables (Cruz-Rodríguez, 2012).

Sumado a lo anterior, de forma particular, la sociedad civil latinoamericana ha servido para amplificar la voz de las poblaciones más vulnerables. Así, además de las demandas tradicionales relacionadas con el bienestar colectivo, la redistribución de la riqueza y las garantías sociales y materiales mínimas de subsistencia, la sociedad civil latinoamericana ha posicionado otras problemáticas diversas que están atravesadas por relaciones de dominación y que afectan de manera sustancial el relacionamiento de las personas con su entorno y su espacio político. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con estructuras racistas de opresión, violencias basadas en género, derechos del campesinado, el lugar de las víctimas en las transiciones hacia la paz, derechos de los migrantes, entre otras (Bobes, 2002).

En la intersección de estas ideas, este libro tiene tres objetivos que están profundamente entrelazados. Primero, el lector encontrará 32 historias que cuentan, con un estilo narrativo y periodístico, cuál es la razón de ser de estas organizaciones de la sociedad civil, por qué nacieron y qué es lo que le aportan a nuestra sociedad. Segundo, se encontrará con historias de personas valientes que, lejos del interés en

el poder político y del ánimo de lucro empresarial, se han organizado voluntariamente y han logrado grandes conquistas en el terreno de los derechos humanos. Organizaciones, en su mayoría rurales y de base comunitaria, que desde distintos lugares del territorio colombiano han creado formas de resistir a la discriminación y la violencia por medio de nuevas alternativas económicas, políticas y jurídicas, en donde la música, el arte y la cultura son un elemento esencial de activismo. Y tercero, este libro también ofrece historias de organizaciones que, por medio de sus valores colectivos, de solidaridad y empatía, le han aportado inmensamente al avance de la protección jurídica y social de los derechos humanos en el país, y al fortalecimiento de nuestra democracia.

El proceso de construcción de *Tejido vivo* reunió a periodistas aliados, y a investigadoras e investigadores de Dejusticia, que, desde sus distintos quehaceres como parte de la sociedad civil, han dedicado parte de su trabajo a reflexionar sobre la riqueza de este tercer sector y sobre su papel en el mismo. Estos artículos fueron publicados por primera vez en el especial realizado en alianza con El Espectador entre abril y agosto de 2023.

Los artículos “Mercados campesinos: del campo a la ciudad sin intermediarios” por Nina Chaparro, “Pintadillo con primitivo: las mujeres que cuidan la tradición negra en el Caquetá” y “El centro es la periferia: un círculo de palabra en la Fundación Caminos de Identidad -FUCAI-” por Paloma Cobo, narran las historias de tres organizaciones conformadas por campesinos, mujeres afro amazónicas e indígenas, que por años han trabajado en todo el territorio colombiano por su soberanía alimentaria y la conservación del medio ambiente y de las tradiciones de sus pueblos originarios.

En “Montes de María, una despensa de historias” y “Sentiido: el buen periodismo al servicio de la diversidad” por Marcela Madrid Vergara, “El sonido de las ‘otras’ voces del Caribe” por Ivonne Arroyo y “Baudó AP: un río de historias” por Adriana Abramovits, se cuentan las historias de cuatro medios de comunicación independientes que por medio de la creatividad y las herramientas del buen periodismo han hecho su mejor esfuerzo por contar las historias de resistencia campesina, indígena y afrodescendiente, y reducir los prejuicios hacia las personas LGBTI y comunidades más vulnerables.

Textos como “El espacio que descentraliza la paz desde los Montes de María” por Ivonne Elena Díaz García, “Buenaventura: soñar es resistir” por Daniel Ospina, “Corporación Vínculos, dos décadas apostándole a aliviar el sufrimiento emocional de la guerra” por José Darío Puentes Ramos y “Un laboratorio narrativo para sanar” por Adriana Abramovits relatan las historias de cuatro organizaciones que por medio de distintos espacios de deliberación, formación y atención psicosocial han trabajado de forma admirable en la construcción de paz de nuestro país. Trabajan en la construcción de afecto y confianza comunitaria, en diálogos de reconciliación y de esperanza, en la terapia y el arte como una forma de curar las heridas de la infancia, y en la idea firme de poder soñar un país distinto a pesar de la guerra y la desesperanza.

En “La lucha por la Justicia Racial desde los datos y el litigio” por Carolina Rodríguez Mayo, “El corazón de la Isla” por Vivian Newman, “La lucha de las mujeres afro del norte del Cauca se cuenta en canciones” por Mariana Escobar Roldán y “La resistencia del pueblo negro de la costa pacífica del Cauca” por Paloma Cobo y Daniel Ospina, se relatan las historias de cuatro organizaciones conformadas por personas afro que, por medio del litigio estratégico, la música, el arte y el conocimiento de sus antepasados, luchan por reivindicación de los

derechos del pueblo negro, la prevención de las violencias de género y la protección de sus territorios.

“Una organización que apoya a los awá” por Carolina Mila, “La lucha de ACIMVIP: Sacha Muiu y la protección del Territorio” por Paula Andrea Valencia Cortés, “El pueblo kankuamo como muralla de la Sierra Nevada” por Paulo Ilich Bacca y Dayanna Palmar Uriana y “Las mujeres kankuamas, el tejido vivo y la justicia ancestral” por Omaira Marcela Cárdenas Mendoza, Mariana Camacho Muñoz y Diana Quigua, narran las historias de tres organizaciones que han resistido al conflicto armado colombiano y trabajan en fortalecer sus sistemas justicia propia con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y sus familias para lograr la armonía y el equilibrio de las comunidades y territorios.

Artículos como “‘Que subsista el monte y también nosotros’: la apuesta de los campesinos en Caquetá” Por Marcela Madrid Vergara, “Anzorc: más de veinte años de lucha por la dignidad campesina” por Simón Uprimny Añez, “La lucha del campesinado colombiano para ser reconocido y contado” por José Darío Puentes Ramos y “Defender el ambiente y avanzar por los derechos campesinos” por Ana María Malagón Pérez, exponen las historias de cuatro organizaciones campesinas que, por medio de un trabajo valiente y perseverante, han logrado obtener sus tierras a través de la figura de zonas de reserva campesina, proteger el medio ambiente y ser contados en el censo nacional para que se creen políticas públicas que beneficien al campesinado.

En “La libertad de elegir una vida plena con discapacidad” por Juan Carlos Jaimes, “‘Perdí a mi único hijo, pero gané muchos más’” por María Mercedes Acosta, y “‘Una persona con autismo no vive en su propio mundo’”: trece años derribando estigmas sobre el autismo

en Colombia” por Sofía Forero Alba, se narran las historias de tres organizaciones lideradas por madres que han luchado de forma incansable en contra de la discriminación que han sufrido sus hijos, y por los derechos de las personas LGBTI y con discapacidad.

“Baruleras Poderosas” por Adriana Abramovits, “Ser una organización feminista es todo un reto en Riohacha” por María Mercedes Acosta, “Una apuesta feminista desde el Norte del Cauca” por Andrea Forero Hernández e “Igualdad en libertad: Mujeres Libres para una política criminal más justa” por: Juan Sebastián Hernández, cuentan las historias de cuatro organizaciones lideradas por mujeres que luchan por los derechos de las más vulnerables. Se podrán encontrar historias de mujeres que hablan de educación sexual y reducen el embarazo adolescente; mujeres que han pasado por la cárcel por delitos menores de drogas y luchan por una política criminal más justa; mujeres que le apuestan a la pedagogía y a las comunicaciones estratégicas para transformar territorios, y mujeres que trabajan por medio de la música y el conocimiento ancestral en la equidad de género.

Finalmente, los textos “Uma Kiwe-Madre Tierra: una apuesta narrativa por el cuidado del agua y la vida” en Mocoa por Natalia Escobar y “Providencia: isla chica, Caribe grande” por Santiago Ardila exponen la historia de dos organizaciones que, por medio de distintas herramientas de comunicación, luchan por una justicia ambiental y social resistiendo al despojo, la destrucción de sus territorios y de sus tradiciones.

Esperamos que disfruten la lectura sobre estas 32 organizaciones poderosas que han demostrado que la sociedad civil no es un concepto abstracto ni una frase hecha. Cada una de las personas que trabajan en estas organizaciones, a pesar de los avatares de la

guerra y la inseguridad de este país que azota a los líderes y lideresas sociales, trabaja sin descanso por materializar el respeto por los derechos humanos y la democracia, transformar realidades para las poblaciones más vulnerables, habitar sus territorios de forma digna y pacífica, conservar sus tradiciones y mantener su voz valiente, fuerte y resonante en todo territorio colombiano.

Bibliografía

Arato, A. y Cohen, J. (2000). Sociedad civil y teoría política. Fondo de Cultura Económica.

Bobes, V. (2002). Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada desde América Latina. *Estudios Sociológicos*, XX (2), 371-386. <https://www.redalyc.org/pdf/598/59805904.pdf>

Cruz, E. (2012). Antinomias y paradojas de la sociedad civil global. *Entramado*, 8(2), 154-67. <https://www.redalyc.org/pdf/2654/265425848010.pdf>

Hernández, A. (2015). Construcción de sociedad civil y fortalecimiento del capital social. Alternativas en América Latina. *Quirón*. 1(2), 92-112. <https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/images/revista-quironpdf/edicion-2/6.ArtAlanSalvadorHernandez.pdf>

Kaldor, M. (2003). *Global Civil Society: An Answer to War*. Polity.

Kumar, V. (2012). The Role of Global Civil Society in Global Governance. *Beijing Law Review*, 3(4), 206-12. <http://dx.doi.org/10.4236/blr.2012.34026>

Rieff, D. (4 de febrero de 1999). The False Dawn of Civil Society. *The Nation*. <https://www.thenation.com/article/archive/false-dawn-civil-society/>

Scholte, J. (1999). Global civil society: changing the world?. *Working papers*, 99(31), 1-35. https://wrap.warwick.ac.uk/2094/1/WRAP_Scholte_wp3199.pdf

Uprimny, R. & Newman, V. (2023). La lucha por el derecho y los derechos: Dejusticia y sus más de quince años de trabajo por la justicia socioambiental y el Estado de Derecho. Editorial Dejusticia.

JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

Igualdad en libertad: Mujeres Libres para una política criminal más justa



LAS CÁRCELES SON UN REFLEJO DE LA SOCIEDAD, Y EN UNA SOCIEDAD MACHISTA DONDE LAS MUJERES ENFRENTAN DESIGUALDADES ESTRUCTURALES, ELAS SUFREN AÚN MÁS LOS IMPACTOS DE LA CRISIS CARCELARIA. PERO LAS MUJERES RESISTEN, Y A TRAVÉS DEL TRABAJO DE ORGANIZACIONES COMO MUJERES LIBRES, HAY ESPERANZA DE QUE SUS DERECHOS SEAN UNA REALIDAD.

“¡Ya es ley, ya es ley!” fue la vigorosa consigna de varias mujeres que marcharon el 8 de marzo de 2023 en Colombia. Tras años de trabas, el Presidente Petro finalmente sancionó la Ley de Servicios de Utilidad Pública para mujeres cabeza de hogar, la cual permitirá que mujeres vulnerables que cometieron delitos leves para sostener a sus familias (como hurtos sin violencia o delitos leves de drogas) puedan cumplir su pena con servicio comunitario. Por esto la noticia no era para menos: a casi diez años de que la Corte Constitucional declarara la crisis carcelaria, entre tres y cinco mil mujeres podrán recibir un respiro de un sistema construido para hombres y que, ciego a su situación, simplemente las condenó como “malas mujeres”.

Este es sin duda un paso en la dirección correcta que mejorará no sólo la garantía de derechos en las cárceles de mujeres, sino también la condición de sus familias. Un estudio de la Universidad Javeriana, la Cruz Roja y el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas de México) mostró en 2019 que el 75% de las mujeres en prisión son cabeza de familia, el 73% de ellas vivía con sus hijos antes y, tras su encarcelamiento, el 38% pasaron a vivir en hogares diferentes. El hecho de perder a su cuidadora expone a sus hijos a violencias, aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de que caigan en la criminalidad en el futuro.

Esta ley no habría sido posible sin la tenacidad de las mujeres que han padecido en carne propia la violación de sus derechos en las cárceles. Cuesta mucho imaginar lo que significa ser una mujer encarcelada en nuestro país: además de soportar la violación de derechos que afecta a toda persona privada de la libertad (tales como el hacinamiento, la comida en descomposición y la falta de agua potable), las mujeres también enfrentan la insuficiencia de toallas higiénicas, a no tener atención ginecológica, a malos tratos por parte de la guardia que tiende a verlas como “malas mujeres”, a recibir

menos visitas de sus hijos y familiares que los hombres, a habitar peores cárceles. Son, en su mayoría, mujeres vulnerables que no tuvieron oportunidades de estudio, que tienen a su cargo el cuidado y sostenimiento de familiares, y que además, enfrentan obstáculos para encontrar empleo. Muchas también han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de género.

Claudia Cardona, directora y cofundadora de Mujeres Libres, sí lo sabe bien. Luego de salir de prisión en 2017, Claudia se unió al grupo de organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a la crisis carcelaria para abogar por los derechos de las mujeres y visibilizar las problemáticas que enfrentan mientras están dentro, como después de salir de prisión.

Según Claudia, “las mujeres reciben formación en actividades de trabajo que, como el bordado o el aseo, refuerzan estereotipos de género y no las preparan para encontrar empleo ni para la vida en libertad. También enfrentan discriminación en el sistema de justicia: reciben una mala defensa de sus abogados, se enfrentan a jueces y fiscales que les niegan beneficios o les imponen penas altas, todo por ser ‘malas mujeres’, ‘malas madres’”. Y sus familias también sufren, pues la mayoría cometieron delitos para sostener a sus seres queridos y quedaron sin su apoyo y cuidado: el rendimiento escolar de sus hijos tiende a bajar, sus familias tienen más dificultades para sostenerse y ellas, detrás de las rejas, sólo podrán verlos cuando la guardia lo permita, que durante la pandemia fue casi nunca.

Pero Claudia también sabe que el calvario no termina al recibir la libertad. “Al salir de prisión, las mujeres se enfrentan a una sociedad donde el estigma de sus antecedentes no les permite abrir una cuenta bancaria, les hace casi imposible conseguir empleo. Y si lo encuentran

se exponen a discriminación, explotación y violencias de género porque, como dicen, ‘antes debe agradecer el hecho de tenerlo tras haber estado en prisión’”. Precisamente por esto, en 2019 ella y otras ocho mujeres que estuvieron privadas de la libertad fundaron Mujeres Libres, una organización dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres que están o han pasado por la cárcel.

Desde entonces, Mujeres Libres se ha convertido en una de las organizaciones más activas en la lucha por los derechos de las mujeres privadas de la libertad y cuenta hoy con más de quinientas inscritas. Ellas no solo han intervenido en el Congreso para promover leyes que mejoren las condiciones de vida en prisión (como la ley que garantiza la entrega gratuita de artículos para la salud menstrual en las cárceles), también promueven reformas a la política criminal, que históricamente ha visto de manera errónea a la prisión como la única solución a la criminalidad y todavía se resiste a adoptar un enfoque transversal de género. Así, Mujeres Libres asesoró la elaboración de la Ley de Servicios de Utilidad Pública y la defendió ante la Corte Constitucional de las objeciones infundadas del expresidente Iván Duque.

Mujeres Libres también ha abogado por los derechos de las mujeres privadas de la libertad fuera de Colombia. Ha intervenido en instancias como la Organización de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que inspiró el surgimiento de grupos similares en otros países, como Chile, México y El Salvador. Hoy, Mujeres Libres lidera la red latinoamericana “Mujeres Libertarias Fundiendo Rejas” y hace parte del Comité Organizador de la Red Internacional de Mujeres que han Estado en Prisión, que reúne a mujeres de más de 25 países en la lucha por sus derechos humanos.

Y, sin embargo, quizás la tarea más admirable de Mujeres Libres es no dejar solas a las mujeres que han pasado por prisión, mujeres que son abandonadas por la sociedad. “El primer paso para exigir un derecho es conocerlo”, dice Claudia. Así explica por qué ella y sus compañeras visitan cárceles para enseñarles a las mujeres sus derechos consagrados en las Reglas Bangkok y otros tratados internacionales, y les ofrecen apoyo psicosocial y asesoría cuando salen de prisión. Esto les ha dado un espacio seguro para compartir sus experiencias y enfrentar el reto de regresar a una sociedad que les cierra casi todas las puertas.

La aprobación de esta ley es un primer paso para saldar las desigualdades de la política criminal, pero no resolverá todas las inequidades de género de nuestras cárceles ni de nuestra sociedad. Todavía queda mucho por hacer, desde resolver los obstáculos que enfrentan las mujeres en el mercado laboral hasta adoptar un enfoque de género transversal en nuestra política criminal. Y aunque estos cambios no se lograrán de la noche a la mañana, será gracias a mujeres como Claudia Cardona e iniciativas como la que lidera, que Colombia podrá llegar a ser una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan ser realmente libres.

JUAN CARLOS JAIMES

La libertad de elegir una vida plena con discapacidad



SEGÚN EL DANE HAY MÁS DE 1.4 MILLONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL EN COLOMBIA. ESTE GRUPO SE ENFRENTA A LA ODISEA DE LUCHAR CONTRA LOS PREJUICIOS Y MITOS, QUE DESDIBUJAN A LAS PERSONAS Y HACEN CREER QUE NO APRENDEN. SIN EMBARGO, UNA VISIÓN MODERNA, FIRME Y ESPERANZADORA, ENFOCADA EN DISFRUTAR LA VIDA, HACE QUE MUCHAS FAMILIAS ELIJAN OTRO CAMINO: EL DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA.

A los tres meses de embarazo, Ana Lucía Jiménez supo que su hijo nacería con síndrome de Down. El médico, en ese momento, le comunicó que tenía la opción de dejar su sueño de ser madre si ella y su marido tomaban la decisión de interrumpir el embarazo, porque “estos niños salen muy costosos para el sistema”. Una afirmación que, hasta el día de hoy, Ana no entiende.

Las dudas afloraron para ella y su familia porque no tenían suficiente información sobre la llegada de un hijo con discapacidad intelectual, sus necesidades, ni cómo enfrentar la crianza en el futuro. Buscó ayuda, asesoría, y encontró a Asdown, una asociación de madres y padres que orienta e informa a todas las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, sin excepción, sobre las posibilidades, recursos y herramientas para una vida plena y autónoma en sociedad.

Luego de una charla de más de dos horas con Mónica Cortés, directora de Asdown, Ana Lucía y su esposo, Mauricio Rodríguez, afirmaron aún más su decisión: Pablo nacería como estaba planeado y nada detendría su sueño de ser padres.

“Mi mirada frente a la discapacidad cambió. Entendimos que llegaba un miembro más de la familia, de forma natural, y que podría tener una vida plena”, comenta Ana Lucía. Hoy Pablo José tiene 10 años, es un niño feliz y escolarizado, que vive los retos de cualquier menor con su edad y condición.

La historia de Pablo y su familia ha sido el espejo de miles de historias. Desde un nacimiento complicado (ya que estuvo en riesgo por complicaciones en el parto) hasta el proceso de aceptación de su familia por su situación. Un paso fundamental para mirar hacia adelante enfrentando estigmas, convenciones, retos pedagógicos, que

con el paso del tiempo se vuelven recuerdos que esbozan sonrisas en su madre cuando habla de las anécdotas de su hijo.

Llevar de la mano a un hijo(a) con discapacidad es un camino incierto, y la travesía por diversas etapas implica retos y valiosos aprendizajes. “La experiencia con Pablo ha sido satisfactoria porque pude tener apoyo temprano en un momento álgido, de confusión. Muchas veces la dificultad que veo para la transformación de la sociedad está en una visión medicalizada de la discapacidad, que no tiene en cuenta otras facetas del ser humano en su desarrollo”, asegura Ana Lucía.

Más acción por la inclusión

Asdown es una organización que nació hace 18 años por la motivación de varios padres y madres que vivían historias similares con sus hijos, y que decidieron unirse para luchar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. “Coincidíamos en que el acompañamiento terapéutico para nuestros hijos era importante para su desarrollo físico y cognitivo, pero que eso no era lo único que necesitaban para crecer en sociedad. Las acciones desarrolladas nos han llevado a ver cómo lo que hacemos beneficia en realidad a todas las personas con discapacidad y a sus familias”, comenta Mónica Cortés, también integrante de la Red Regional por la Educación Inclusiva en Latinoamérica, de la Inclusion International y de RIADIS.

De forma totalmente gratuita, Asdown ha asesorado a más de cinco mil familias y a cerca de diecinueve mil maestros en temas de educación inclusiva. “El ser humano es complejo, la sociedad es difícil. Muchas familias sienten que sus hijos están dañados y que hay que componerlos. Esa mirada debemos cambiarla como padres, y es en este contexto en el que Asdown trabaja para convertirse en el socio de

las familias, profesionales, maestros y organizaciones que buscan una transformación social a través de la inclusión”, asegura Ana Lucía.

Como la de Pablo, hay cientos de historias que reivindican la labor diaria de esta Asociación en su lucha por visibilizar los derechos de niñas, niños, jóvenes y familias que conviven con la discapacidad intelectual. David Santiago Narváez es artista plástico en la Academia de Artes Guerrero y está incursionando como líder autogestor. Pablo Castro Iregui es un talentoso chef que, demuestra sus habilidades para la televisión. María Camila Lozano validó bachillerato después de haber estado mucho tiempo en educación especial, cursó la carrera de Administración de Empresas y hoy sueña con su propio emprendimiento para dar empleo a personas que, como ella, han superado adversidades enfocándose en sus habilidades y talentos.

Para cumplir con su propósito, Asdown busca siempre estar a la vanguardia y capacitarse constantemente. Un ejemplo de lo anterior es su *podcast* “ABC de la educación inclusiva”, dirigido a las familias de niños con discapacidad intelectual, que con frecuencia viven una auténtica odisea para lograr que estudien. El *podcast*, con casi cuatro mil descargas y una audiencia del 47% por fuera de Colombia, es un apoyo único en la región que tiene información relevante para las consultas más frecuentes.

Otra muestra de su arrojo es la campaña #ColegioYa (colegioya.com.co), en la cual luchan activamente por el derecho que tienen todos los niños y niñas con discapacidad intelectual a ingresar al colegio a pesar de los obstáculos, mitos y excusas del sistema. Diariamente, una institución educativa cierra sus puertas a un(a) menor con una discapacidad de ese tipo: en el último mes, más de cien familias han solicitado la ayuda de Asdown para escolarizar a sus hijos y apenas

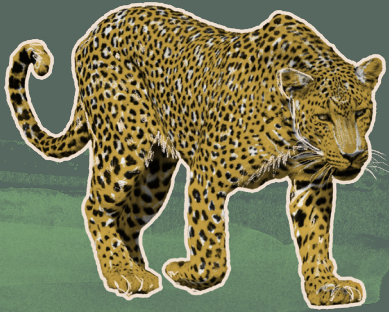
17 de cada 100 personas con discapacidad alcanzan la educación superior, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. “Esa niña, ese niño o ese joven que es rechazado por su condición –cualquiera que esta sea–, tiene también capacidades. Entre ellas, por supuesto, la capacidad de aprender”, comenta Mónica Cortés. Quienes han sufrido la experiencia de conseguir colegio para un hijo con discapacidad la describen como estar en un laberinto que solo conduce a puertas cerradas, como subirse a un carrusel de rechazos, de puertas giratorias. “A mí me permitió fortalecerme, orientarme, ser líder y vocera de los proyectos de vida de mi hijo”, comenta Ana Lucía Jiménez.

Asdown ha sido un actor entusiasta y comprometido para impulsar la plena capacidad legal de las personas con discapacidad, así como un actor fundamental en la aprobación, implementación y pedagogía sobre la Ley 1996 de 2019, que promueve la autodeterminación, haciendo uso de los apoyos que se requieran y con las salvaguardias adecuadas para tener el derecho a decidir.

Sin embargo, el mayor reto es combatir de forma constructiva los estereotipos sobre las personas con discapacidad intelectual, “lo que hace creer que no aprenden, que son dependientes, enfermos y objetos de lástima”, recalca Mónica. Pablo nació gracias a una madre convencida de la vida y al apoyo de un grupo de familias que pasaron por lo mismo y que creen firmemente en la libertad de elegir una vida plena. “Desde los dos años he visto crecer a mi hijo y he recorrido esta experiencia con ilusión, dejando de lado mis temores”, concluye Ana Lucía.

MARCELA MADRID VERGARA

“Que subsista el monte y también nosotros”: la apuesta de los campesinos en Caquetá



LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS DEL PIEDEMONTE CAQUETEÑO SUEÑAN CON CONVERTIR SU TERRITORIO EN LA SEGUNDA ZONA DE RESERVA CAMPESINA MÁS GRANDE DEL PAÍS. ESTO LES AYUDARÍA A PROTEGER SUS MONTAÑAS DEL EXTRACTIVISMO Y A TENER, POR FIN, LA TIERRA QUE LES HA SIDO NEGADA. AL FRENTE DE ESTE PROCESO ESTÁ ACOMFLOPAD, UNA ORGANIZACIÓN QUE HA LOGRADO MOVILIZAR A CAMPESINOS DE CUATRO MUNICIPIOS HACIA ESTA LUCHA COLECTIVA.

Para Genaro Martínez, la vida del campesino sin tierra es como la de un ave pasajera. Este caqueteño de 68 años ha dedicado buena parte de sus días a producir café, maíz, yuca y plátano en la finca que le dejaron sus abuelos y sus padres en la zona rural de Florencia, capital de Caquetá. Pero, como la mayoría de los habitantes de esas tierras, no tiene ningún papel que lo confirme. Por eso, cuando en 2014 escuchó el rumor de que se estaba creando una asociación campesina para luchar por las necesidades de la cordillera caqueteña, decidió sumarse de inmediato.

Por esos días, este territorio -que abarca los municipios de Florencia, Montañita, Paujil y Doncello- estaba amenazado por “los cocos”. Así le llama la lideresa Elda Yaneth Martínez a los proyectos extractivistas que se abrían paso en la zona: dos bloques petroleros y una hidroeléctrica que pretendía privatizar el emblemático río San Pedro. Entonces, miles de campesinos y campesinas que estaban desarticulados como consecuencia de la guerra volvieron a unirse con un objetivo común: frenar la explotación de sus recursos naturales.

Lo primero que hicieron fue impulsar la labor de las 124 juntas de acción comunal de los cuatro municipios. Después de muchas reuniones y de analizar la idea de vereda en vereda, nació en 2015 la Asociación Campesina de Cordillera municipios Montañita, Florencia, Paujil y Doncello (Acomflopad). Pero la preocupación inicial seguía presente: ¿cómo proteger el territorio?

ZRC: empieza el sueño

Por boca de sus vecinos de El Pato-Balsillas, en San Vicente del Caguán, escucharon de una figura legal llamada Zona de Reserva Campesina, que allá habían logrado constituir en los años noventa.

Les aclararon que esta no garantiza el derecho a la consulta previa ni la titulación colectiva de la tierra (figuras ligadas a los pueblos indígenas y afro), pero sí el reconocimiento “a nuestra manera de trabajar, de vivir, a los saberes históricos y a proponer una forma de ordenamiento territorial”, explica Elda, hoy presidenta de Acomflopapad.

Ahí estaba la respuesta. Las Zonas de Reserva Campesina son territorios donde las comunidades definen cómo usar la tierra a través de un Plan de Desarrollo Sostenible y un Plan de Manejo Ambiental en los que recogen su proyecto de vida colectivo, para luego concertarlo con las autoridades públicas. Acomflopapad decidió apostarle a esta figura para lograr varias de sus metas: impulsar la economía campesina, conservar el bosque y ponerle freno a los proyectos minero-energéticos.

A Johana Romero, miembro de la junta directiva de la organización, la idea le sonó desde el principio. “Me gustó el concepto de Zona de Reserva Campesina porque abre muchas posibilidades para este territorio tan abandonado. Aquí no tenemos vías, los campesinos no tienen proyectos productivos; por acá no llega nada, si acaso los políticos a dar tres gallinas en época de elecciones”.

Los amigos de El Pato fueron sinceros: no sería un proceso fácil, a ellos les había costado años de trámites e insistencia ante las autoridades agrarias. Igual aceptaron el reto y, en 2020, Acomflopapad presentó la solicitud formal para crear la Zona de Reserva Campesina Cabeceras Orteguzaza-San Pedro. El camino apenas está empezando, pero si logran llegar a buen puerto, sería la segunda más grande del país: 233 mil hectáreas, un área mayor que la superficie de Luxemburgo.

Mientras ese sueño avanza, los campesinos y campesinas de Acomflop han creado estrategias para defender sus derechos al tiempo que cuidan las montañas, el bosque y los ríos. “Es una tarea de todos en nuestras fincas. Nosotros ya somos viejos pero tenemos hijos y nietos, no queremos que sufran en el futuro”, dice José Elí Collazos, un campesino que llegó hace treinta años a la región.

Los campesinos de esta zona saben que están parados sobre un territorio invaluable para el medio ambiente, un corredor ecológico que es hogar de especies como el jaguar. Su principal herramienta para conservarlo es el Manual de Convivencia de la organización. Este documento, elaborado por las 124 juntas en múltiples jornadas de discusión que se extendieron hasta la madrugada, establece que cada predio debe mantener al menos un 30% del bosque intacto, que está prohibido talar los alrededores de los nacimientos de agua y que no se permiten la cacería y la pesca con fines comerciales. Quien incumpla estas normas tendrá que pagar una multa. Así han logrado controlar la deforestación a través de algo que los expertos llaman cerrar la frontera agropecuaria, o como traduce Elda, “dejar de echar pa'l monte”.

El orgullo de conservar

Gracias a ese cuidado colectivo del bosque, hoy Genaro puede sacar pecho y decir que desde su finca tiene contacto con las especies más bellas de fauna y flora. Por ejemplo, “unas pavas gigantes y bonitas que lo despiertan a uno a las cinco de la mañana con sus chillidos”; o el mico churuco, al que “yo le silbo y él me contesta”; o una orquídea que “parece una novia árabe”.

Genaro es un hombre de ceño fruncido y mirada ruda, que se enternece cuando habla de la naturaleza que lo rodea. Dice que, si logran convertirse en Zona de Reserva Campesina, le gustaría crear una ruta turística para compartir con otros el privilegio que disfruta a diario.

No es casualidad que él y su familia tengan acceso a ese paisaje, pues son vecinos del Parque Regional Miraflores-Picachos, creado en 2018 con el apoyo de Acomflop. Un hito ambiental que se ganaron a pulso. Ese año, Corpoamazonía empezó a delimitar lo que sería el nuevo Parque Regional y, según Elda, “lo iban a crear sobre la habitación campesina, que es histórica”. Tiene razón, pues los primeros campesinos del Caquetá llegaron ahí en los años cincuenta huyendo de la violencia partidista, principalmente del Tolima y el Huila, como lo relata el Instituto Sinchi en el libro *Caquetá: construcción de un territorio amazónico en el siglo XX*.

Entonces la organización campesina lanzó una propuesta novedosa para que la conservación ambiental y los derechos campesinos pudieran convivir en las mismas montañas. “Nos fuimos a Corpoamazonía y les dijimos: necesitamos que miremos el polígono de ustedes y el de nosotros porque parece que hay un traslape”, recuerda Henoc Enciso Mahecha, miembro directivo de Acomflop.

Bajo la premisa “que subsista el monte y también nosotros”, los habitantes de la zona caminaron kilómetros y kilómetros junto a los funcionarios, cerciorándose de que el área del nuevo parque no pasara sobre las casas de los campesinos. Y, como parte del trato, dejaron un área de ocho kilómetros de bosque intocable entre el límite del parque y lo que será la Zona de Reserva Campesina. Es un área de

amortiguación que, según explica Genaro, “no es para irla a destruir por ningún campesino, sino como un emblema que se pueda cuidar”.

La apuesta: conservación con campesinos

Aunque con el Gobierno de Gustavo Petro parecía acercarse el sueño de convertir el piedemonte caqueteño en Zona de Reserva Campesina, persiste un obstáculo enorme: el 75% de esas 233 mil hectáreas fueron catalogadas como zona de reserva forestal en 1959. Es decir, ahí los campesinos no pueden recibir la titulación de sus tierras. Elda, quien siempre encuentra las palabras para traducir los legalismos, lo resume así: “el monte hay que tenerlo pa’ verlo”.

Pero para Acomflopap, el monte es para darle buen uso. Por eso, la apuesta de la organización es pedirle al Gobierno que sustraiga la Zona de Reserva Forestal y permita que la segunda Zona de Reserva Campesina más grande del país se convierta en realidad. Así, están convencidos, podrán ser dueños de sus tierras, seguir saludando a los micos y escuchando el caudal de sus ríos. Así dejarán de ser aves pasajeras.

MARÍA MERCEDES ACOSTA

“Perdí a mi único hijo, pero gané muchos más”



EL SUICIDIO DE SU ÚNICO HIJO, SERGIO URREGO, PRODUCTO DEL BULLYING QUE VIVIÓ POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO DONDE ESTUDIABA, LLEVARON A ALBA LUCÍA REYES A CREAR EN 2015 LA FUNDACIÓN SERGIO URREGO, ENFOCADA EN LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES Y EN LA NO DISCRIMINACIÓN EN LOS COLEGIOS, HECHO QUE LA CONVIRTIÓ EN UNA RECONOCIDA “MAMÁ ACTIVISTA” DE LOS DERECHOS DE DICHO GRUPO POBLACIONAL.

La primera vez se amarró un lazo al cuello y se colgó de una viga. Cuando empezó a sentir asfixia, Andrés Gutiérrez -quien no había cumplido 20 años- se quitó el lazo con desesperación. Nunca imaginó que esta manera de intentar quitarse la vida, le implicaría pasar por esa angustiada sensación, pensaba que rápidamente moriría. Esta, sin embargo, no era la primera vez que intentaba suicidarse. A los 17 años se había tomado un veneno para ratas, tiempo atrás había intentado cortarse las venas y en otra ocasión se había tomado 92 pastillas para el dolor. Milagrosamente siempre sobrevivió.

Fueron en total seis sus intentos de suicidio. Lo que más lo atormentaba de vivir era sentir que le atraían los hombres y percibir que su orientación sexual no era vista como algo “normal”. Cuando le contó, su mamá se puso muy mal de saber que su hijo era homosexual. Su papá le dijo que prefería un hijo muerto que marica. Y como suelen hacer papás y mamás que desconocen que la orientación sexual no se elige ni se cambia a la fuerza, lo enviaron a psicología con la esperanza de que con terapia empezaran a gustarle las mujeres.

En el colegio la situación no era mejor. Le decían “florecita” y lo trataban en femenino. Y cuando Andrés habló en su casa del *bullying* que vivía, el consejo de su papá fue que respondiera con puños como “todo un macho”. En ese contexto, la idea del suicidio era cada vez más clara, pero cansado de que hasta en eso no le fuera bien, decidió que iría a la fija: se lanzaría de un puente de Villavicencio, ciudad en la que nació y creció. Escribió su carta de despedida.

El día elegido, Andrés miraba los carros pasar listo para lanzarse, cuando recibió una llamada inesperada. Su caso había llegado a oídos de Alba Lucía Reyes, fundadora y directora de la Fundación Sergio Urrego, organización que nació en 2015, después de que su único hijo,

Sergio Urrego, se quitara la vida. María Paula Vega, psicóloga de la organización, era quien llamaba a Andrés. Antes de contactarlo, ya le había avisado a la policía y a una ambulancia.

Desde la Fundación, identificaron y contactaron a la mamá de Andrés y a sus amigos más cercanos. Por teléfono, María Paula logró convencerlo de que no saltara diciéndole que ella estaba con él y que no la fuera a dejar sola. Después de unos minutos de conversación, Andrés se bajó del puente y siguió hablando un largo rato con ella. Desde entonces, Andrés no ha vuelto a contemplar el suicidio. Por el contrario, le encanta despertarse y saber que está vivo y sentir el sol y el viento mientras monta en bicicleta.

Historias como la de Andrés llevaron a Alba a crear la línea salvavidas de la Fundación Sergio Urrego, atendida por profesionales en psicología y enfocada en prevención del suicidio de niños, niñas y jóvenes, la única en Colombia dirigida a esta población. Para esto, Alba pasó por una capacitación con el personal de The Trevor Project en Estados Unidos, línea de prevención de crisis y suicidios de jóvenes LGBTI en ese país.

Para marzo de 2023 la línea ha atendido alrededor de diez mil casos. En 2019, cuando empezó, atendieron 541 casos y en 2022 sumaron 3034. Anualmente la cifra aumenta mientras que disminuyen las edades de quienes intentan suicidarse, oscilando entre los 15 y 24 años, aunque han recibido casos de niños y niñas de seis años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo. En Colombia, suceden alrededor de dos mil al año, en promedio siete al día, principalmente por depresión, por rechazo o por penas amorosas.

La idea de crear una fundación tiene su antecedente más determinante el 4 de agosto de 2014 cuando alrededor de las 8 y 30 de la noche Alba regresa a Bogotá desde Cali donde estaba en un viaje de trabajo y le avisan que Sergio, su único hijo, se había lanzado desde la terraza de un centro comercial. Su suicidio estaba motivado en la persecución que había vivido por parte de las directivas del Gimnasio Castillo Campestre, colegio en el que estudiaba.

Sergio se les había convertido en una piedra en el zapato porque reclamó frente al hecho de que las directivas no repusieran las horas que perdían cuando el profesor no asistía a clase. En una reunión de padres de familia, Sergio dijo que Amanda Azucena Castillo, la entonces rectora del colegio, le había encargado las chaquetas de su promoción (2014) a un familiar de ella, a pesar de que resultaban más costosas que otras cotizaciones presentadas. En otra ocasión, cuando Sergio expresó su inconformidad con una decisión, un profesor le dijo que él no tenía derecho a opinar. Sergio le respondió que sí podía y se salió del salón. A esto se sumó el hecho de que el colegio fuera confesional y Sergio se declaraba ateo.

Todo se complicó cuando el profesor de Educación Física decomisó el celular de una estudiante en el que había una foto en donde Sergio y su pareja, Danilo, alumno del mismo curso, aparecían besándose. Las directivas le exigieron a Sergio y a Danilo contarles a sus papás que tenían una relación e instauraron una demanda penal contra Sergio, argumentando un falso acoso sexual hacia Danilo.

¿Crear una fundación?

Lo cierto es que después del suicidio de Sergio, cada día que pasaba Alba sentía con mayor intensidad el dolor de su ausencia.

Desde entonces empezó a contemplar la idea de hacer algo para evitar que casos como el de su hijo se repitieran. En 2015, justo un año después del fallecimiento de Sergio, una persona le dijo: “tú deberías crear una fundación”. A ella la propuesta le sonó.

Para aterrizar la idea, vinieron múltiples reuniones con activistas como Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa, el psicólogo Miguel Rueda y el abogado Mauricio Albarracín. La Fundación Sergio Urrego quedó legalmente constituida el 15 de agosto de 2015, justo para el primer aniversario del fallecimiento de Sergio. Vinieron cuatro años en los que Alba trabajó de manera paralela en una caja de compensación y en la fundación, hasta el día en que una jefe suya le dijo: “ya deberías dedicarte de lleno a tu fundación”. Siguió su consejo.

El propósito estaba claro: que la historia de su único hijo no volviera a suceder, no solo por discriminación por orientación sexual o identidad de género, sino por ser migrante, campesino o afro, entre otros. Así, las líneas de acción de la Fundación quedaron claras: la prevención del suicidio y de la discriminación de niños, niñas y jóvenes, lo que incluye certificar a los colegios que cumplan con prácticas de inclusión. Hasta el momento la Fundación ha certificado a cuatro colegios por sus prácticas de inclusión.

Este 2023 la Fundación incluyó una tercera línea de acción: incidencia política. Sueñan con lograr implementar la legislación existente en Colombia sobre educación de calidad, no discriminación, no desescolarización y prevención de suicidio. Ahora, el reto más grande que tienen es subsistir porque en Colombia no son muchos los recursos destinados a la prevención del suicidio y al cuidado de la salud mental. Otro, lograr que la inclusión y el respeto por la diversidad empiecen

desde la casa porque para Alba fueron muy reveladoras las marchas multitudinarias de 2016 contra la llamada “ideología de género”. No entendía muy bien por qué papás y mamás marchaban contra una educación de calidad para sus hijos e hijas. Desde entonces, aunque ella no se atribuyó el título, es reconocida como “una mamá activista”. Muchos niños, niñas y jóvenes la llaman “mamá” y ella los siente como sus hijos e hijas. “Yo perdí a mi único hijo, pero gané muchos más”.

Para Alba, las voces de las familias que defienden los derechos de sus hijos y sus hijas son muy potentes porque es algo que se hace desde el vientre y desde lo más profundo del corazón. Es algo visceral. Y aunque ella está lejos de ser una cristiana fundamentalista como Mary Griffith, la mamá de la película “Plegarias por Bobby”, es inevitable no asociarlas. Las dos perdieron a sus hijos LGTBIQ+ por discriminación, hecho que las llevó a convertirse en “mamás activistas”. Griffith en la organización PFLAG (Padres, Familiares y Amigos de Lesbianas y Gais) donde logró entender que el Dios en el que cree no tenía nada que curarle a su hijo y Alba Reyes en la Fundación Sergio Urrego donde la mueve el amor por seguir salvando vidas.

SIMÓN UPRIMNY AÑEZ

Anzorc: más de veinte años de lucha por la dignidad campesina



EN EL INTRINCADO PROCESO DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA (ANZORC) HA JUGADO UN PAPEL CLAVE. AQUÍ, UN BREVE REPASO DE SU HISTORIA. UNA DE TENACIDAD Y VALENTÍA.

Un luminoso verde esperanza coloreó el final de 2022 para el campesinado colombiano. El treinta de diciembre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aprobó la creación de las zonas de reserva campesina (ZRC) del Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero y Güejar-Cafre (ambas en Meta). Sólo unos días atrás había sido aprobada una más en la Tuna (Cauca). Con estas, ahora son doce las ZRC existentes en el territorio colombiano.

La historia de las ZRC cuenta ya casi tres agitadas décadas. En 1994, tras años de lucha del movimiento campesino, la ley 160 creó esta figura de ordenamiento territorial que delimita un área geográfica –usualmente ubicada en terrenos baldíos– en la que una comunidad campesina construye un plan de desarrollo sostenible para decidir qué uso darle a la tierra. Para Ana Jimena Bautista, inspectora de tierras de la ANT, este aspecto es clave, pues “el plan se construye de abajo hacia arriba: es armado por la comunidad y luego discutido con las instituciones estatales”. A diferencia de los resguardos indígenas o los territorios colectivos afro, las ZRC no son un título de propiedad colectivo, sino que los dueños de las tierras son las propias familias; pero, a pesar de que existe la propiedad privada, quienes habitan dentro de una ZRC deben ponerse de acuerdo en la gestión que como comunidad le darán al territorio a través del plan de desarrollo sostenible. Además, están estipulados límites legales a la cantidad máxima de tierra que puede poseer un propietario (que varían según la región y la calidad del suelo en donde esté ubicada la ZRC), y así se impide el latifundio. Por todo esto, para Bautista las ZRC son “una invitación de los campesinos al Estado para que llegue. Son los territorios en donde florecen los derechos campesinos”.

En el 2001, en uno de los momentos más turbulentos de la historia reciente colombiana, iniciativas campesinas de diferentes regiones del país se unieron para fundar la Asociación Nacional de Zonas de

Reserva Campesina (Anzorc) con el objetivo de defender las siete ZRC existentes hasta ese momento e impulsar otras más. Para Anzorc, dichas zonas de reserva son el logro jurídico más importante de la historia del campesinado, juicio que no parece descabellado si se piensa que, a pesar de todas sus bondades, la Constitución de 1991 no reconoció al campesinado como un sujeto especial de derechos, lo cual sí ocurrió con las poblaciones indígenas y afro. Para Elda Yaneth Martínez, actual presidenta de Anzorc, “las ZRC nos dan a los campesinos la capacidad de poder revisar lo que somos, de trabajar sobre las realidades que conocemos porque somos quienes habitamos y conocemos los territorios. Pero también son la posibilidad de proponer nuevas cosas, porque al campesino no le interesa quedarse en el discurso de las carencias y las desigualdades, sino buscar alternativas de cambios verdaderamente realizables”. En la ZRC de Cabrera (Cundinamarca), por ejemplo, los campesinos decidieron organizarse para producir café orgánico y, en la del valle del río Cimitarra, carne de búfalo. Estos alimentos son luego exportados a las ciudades, que, además de apoyar la economía campesina, reciben comida saludable y producida de una manera responsable con el medio ambiente.

En definitiva, las ZRC les permiten a los campesinos decidir cómo vivir pues el clamor campesino no es solo por la tierra, sino por la territorialidad: los campesinos no sólo reclaman más tierras, sino el derecho a vivir en esas tierras de acuerdo con sus tradiciones y prácticas culturales, algo apenas justo teniendo en cuenta el pasado teñido de sangre y despojo que han padecido. En efecto, dicha población ha sido la primera víctima colectiva del conflicto armado: de acuerdo con el informe Guerra contra el campesinado, entre 1958 y 2018, más del 58 % de las víctimas de violencia sociopolítica fueron campesinos. Y esto es aún más grave si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a la distribución de la

tierra: según Oxfam, el 1 % de las fincas de mayor tamaño concentran el 81 % de la tierra. Las ZRC son entonces muy saludables para la democracia colombiana: permiten, al mismo tiempo proteger el medio ambiente, detener el acaparamiento de tierras, promover la economía campesina y frenar la expansión de la frontera agrícola. En la valiente defensa de las ZRC radica la importancia de Anzorc, una asociación que se diferencia de otras porque es de tipo “sombrilla” (o de segundo nivel), es decir, que agrupa a otras organizaciones: para ser precisos, a 79 organizaciones campesinas activas de 22 departamentos del país. De ahí que, en su interior, reine la diversidad, pues contrario a lo que creen muchos habitantes de las ciudades, el campesinado no es un todo homogéneo. Dentro de Anzorc hay espacio para la discusión, el disenso. Y en esto, reflexiona Martínez, reside su fuerza: “Unidad mas no uniformidad: ese es uno de nuestros lemas”.

Gracias a esa unidad han podido resistir. Porque el camino recorrido por Anzorc ha sido muy espinoso. Menos de un año después de haber visto la luz, tuvo que entrar, en 2002, en un periodo de inactividad debido a que bajo el Gobierno de Álvaro Uribe fue intensamente estigmatizada como aliada de las Farc. El expresidente incluso tildó a las ZRC de “repúblicas independientes” y “emporios del terrorismo”. Pero Anzorc, con paciencia y tenacidad, resistió y, en octubre de 2010, se reactivó durante el mandato de Juan Manuel Santos. Entonces, con el Paro Nacional Agrario de 2013 y el proceso de paz, en el que Anzorc presionó para poner de nuevo sobre la mesa la discusión sobre las ZRC, la organización recuperó una visibilidad importante.

La llegada de Iván Duque al poder detuvo significativamente las políticas agrarias. En palabras de Bautista, en el gobierno pasado “no hubo voluntad política de avanzar en la constitución de nuevas ZRC”. Anzorc y otras organizaciones campesinas, apoyadas por Dejusticia, se

vieron entonces obligadas a interponer una tutela para la aprobación de tres de las cuatro zonas decretadas a finales de 2022, pues los requerimientos necesarios para ello estaban listos desde hace años, pero habían sido ignorados por la Agencia Nacional de Tierras.

Ahora el panorama ha cambiado: la constitución de esas nuevas ZRC en los primeros meses del Gobierno Petro ilusiona al campesino. El contexto se muestra favorable para intentar aprovechar al máximo toda la potencialidad de la figura, algo que, según Bautista, recién empieza: hasta el momento la lucha se ha centrado en la declaración de las ZRC, pero aún no se ha logrado realmente mejorar las condiciones de existencia de los campesinos dentro de ellas. Anzorc, mientras tanto, no se rendirá en su misión. Al fin y al cabo, como dice Martínez: “Las ZRC son un reconocimiento a los saberes campesinos, una forma de ordenamiento territorial pensada por el campesinado para el campesinado”. Esa es la verde realidad.

ADRIANA ABRAMOVITS

Baruleras Poderosas



A LAS LUCHAS DE RESISTENCIA DEL PUEBLO DE BARÚ (BOLÍVAR) AHORA SE LE SUMA EL LIDERAZGO DE UN GRUPO DE MUJERES QUE SE ORGANIZAN PARA HABLAR DE EDUCACIÓN SEXUAL. SU ACTIVISMO CONTRIBUYÓ A LA REDUCCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE DE 18 A 4 CASOS ENTRE 2018 Y 2019.

Entre los pasillos del colegio Luis Felipe Cabrera, la única escuela pública de Barú, se corrió la voz: “veámonos después de clase para hablar de lo que nadie habla”. Desde hace una década, de los 820 estudiantes en promedio que ha tenido la institución, entre 15 y 20 niñas y adolescentes quedaban embarazadas por año, lo cual representaba al 20% de su población en edad reproductiva. Sin programas pedagógicos que rompieran estas trampas de pobreza, lo normal era que las adolescentes abandonaran el colegio para siempre.

Ese primer encuentro se dio en la Casa Rosada, una locación disponible para actividades culturales en el centro de Barú, a pocos pasos de La Bonga, un imponente árbol que funciona como uno de los principales sitios de encuentro. Ese día llegaron veinte mujeres: se sentaron en círculo para poder oírse y verse a las caras; la profesora de inglés y sociales, Mariana Sanz de Santamaría, lideró el espacio, y afloraron debates muy importantes sobre el cuerpo, la menstruación, la maternidad y qué hacer frente a situaciones de violencia.

Lo que empezó como un encuentro casual, desencadenó otros espacios de diálogo íntimos, extracurriculares y voluntarios a los que nombraron “Círculos de mujeres”. En cada sesión, iban surgiendo nuevas inquietudes sobre lo que significaba ser mujer en Barú, y se reforzaban prácticas de autocuidado y consentimiento. Entonces pasó: ante el fervor de las mujeres haciendo comunidad, organización y resistencia, decidieron nombrarse Baruleras Poderosas.

De la dominación de la tierra a la dominación del cuerpo

Uno de los espacios que más frecuentan las Poderosas es Playa de los Muertos, un antiguo cementerio indígena del siglo XVI, época en la que Barú dejó de ser península y se convirtió en isla.

La isla de Barú que conocemos hoy en día ha estado marcada por las luchas de autodeterminación y reconocimiento de las comunidades afrodescendientes. Las tensiones frente al control del territorio por nuevos colonos adinerados se evidencia en las distintas formas de propiedad y en cómo Cartagena, una de las ciudades que genera mayores ganancias económicas por cuenta del turismo, tiene corregimientos insulares y rurales como Barú, donde se destruyen amplios ecosistemas de manglar para construir hoteles y lujosas casas de descanso, mientras sus pobladores carecen de servicios básicos, como acueducto, alcantarillado y un sistema básico de recolección de basuras.

La dominación de la tierra también implicó otra forma de sometimiento: la del cuerpo. Las dinámicas de la colonia instalaron en Barú estereotipos de género que aún permanecen vigentes. En una isla que depende absolutamente de la economía del turismo; los hombres como fuerza de trabajo, se vinculan principalmente a labores relacionadas con la construcción, la pesca y las plantaciones, mientras que las mujeres se dedican al trabajo doméstico de limpieza y atención a los turistas, así como al trabajo no pago en sus familias, donde por muchos años fueron normalizados los embarazos en adolescentes y las maternidades no deseadas.

En este último punto, Barú no se aleja de la realidad nacional. El informe más reciente de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 2022, reveló que Colombia es el segundo país con la tasa más alta de embarazo adolescente en América Latina y, según el DANE, en niñas menores de 14 años incrementó un 43% entre 2020 y 2021. Por eso, implementar contenidos de género en la formación básica se vuelve una necesidad que debe estar cubierta en todo el país, adoptando las singularidades de cada territorio.

Para el 2018, momento en el que Poderosas se empezó a tejer como una red de apoyo, la institución Luis Felipe Cabrera negaba a las profesoras incluir estos temas dentro del currículum académico. Esta situación está también representada en toda Colombia, pues según el informe del Índice Welbin de 2022 sobre bienestar escolar, 7 de cada 10 docentes no están capacitados en sexualidad humana y derechos sexuales/reproductivos. Lo que indica que hablar de embarazo adolescente en Barú remite a un pasado de racismo, machismo y colonialismo, pero hace parte de una realidad mucho más amplia que está presente en todo el país.

El quiebre del tabú barulero

Tres de las primeras Poderosas, Marimar Bamo, Deyageorgina Rodríguez y Johandris Medrano, cuentan que el pueblo estaba lleno de mitos alrededor de la menstruación. Algunos de los que recuerdan: “si estamos sangrando, no podemos estar descalzas; que ni se nos ocurra cocinar dulces de papaya, porque se dañan; si visitas una cosecha de flores, las rosas se mueren; si entras a una gallera, se emboban los gallos; si te montas en una moto, se espicha la llanta”. En otras palabras, el ciclo menstrual permitía justificar cualquier tragedia o conducta machista.

“Nos hicieron creer que nuestra sangre es mala, sucia y que no es poderosa. Pero ahora me siento poderosa cada vez que llega la menstruación porque conozco sus propiedades curativas y me recuerda que estoy sana”, cuenta Marimar Bamo, que, como indica su nombre, vino al mundo en medio del mar; es estudiante de cocina, activista barulera y mentora de Poderosas. Hoy Marimar lidera también círculos de lectura con niñas y niños para hablar del cuerpo y las emociones.

La creación de Poderosas activó las alertas de algunos padres y directivos del colegio que sentían que esta iniciativa era una “incitación a tener relaciones sexuales”, sin embargo, en muy poco tiempo, los resultados de este despertar hablaron por sí solos: el embarazo adolescente se redujo de 18 a 4 casos entre el 2018 y el 2019.

Susana de la Rosa Hernández, mamá de Gabriela Martínez, de 9 años, cuenta que su hija ya no se deja llevar por el “tabú barulero” y ahora sabe de prevención y de métodos anticonceptivos. “El otro día me dijo: necesito una copa menstrual, y me pareció impresionante, porque estamos cortando con las raíces machistas que todavía nos corretean”, dice Susana.

A los círculos de Poderosas también se han sumado hermanas, madres, abuelas y otras mujeres de comunidades vecinas. Cristina Hernández, abuela de Gabriela, participó por primera vez a sus 75 años: “¡Nos dijeron que habíamos nacido por la axila!”, bromea, mientras recuerda que sus padres nunca les hablaron abiertamente sobre estos temas, y que ahora ella lo hace sin tapujos con sus nietas.

Mariana Sanz de Santamaría, directora de Poderosas, conocida por sus estudiantes como “la seño”, cuenta que, cuando llegó a Barú, su bandera no era el feminismo, sino la educación. Pero rápidamente entendió que el feminismo lo permeaba todo: “si no partíamos por fortalecer el poder de decisión, el autoconocimiento y el pensamiento crítico, era imposible luchar contra las violencias basadas en género que perpetúan las desigualdades. Yo vine a conocer qué es el feminismo con las baruleras”.

“La seño” llegó a Barú con el programa de docentes de Enseña por Colombia. Muy rápidamente la falta de asistencia a clases de las niñas

y adolescentes a causa de la menstruación y la normalización de los embarazos adolescentes la llevaron a convocar estos encuentros extracurriculares, que hoy siguen siendo el corazón de Poderosas. Estos círculos de formación, liderazgo y educación sexual, están condensados en módulos entre 10 y 15 sesiones, con la posibilidad de adaptarse a las necesidades de cada territorio.

Esta semilla que plantea una nueva forma de educación sobre derechos sexuales y reproductivos se extendió por el territorio colombiano y ahora da sus frutos en el Urabá antioqueño, La Guajira, Cundinamarca, Arauca, Bolívar, Chocó y el Valle del Cauca, donde se han creado nuevos grupos de Poderosas, impactando a más de dos mil niñas y jóvenes. En el 2023 se pusieron una meta colectiva: que los hombres también participen en los círculos de palabra, y ya algunos se empezaron a acercar.

En Barú, las mujeres han sido y son más que nunca Poderosas: hablan de sororidad, buscan relaciones donde se valora el cuidado mutuo y la responsabilidad afectiva. Se conversa abiertamente de deseo, placer y derechos. Las niñas y jóvenes identifican las distintas manifestaciones de violencia y conocen las alternativas para responder asertivamente. También comparten las ideas que tienen sobre lo que representa una familia y reflexionan sobre sus planes a futuro, mientras en el colegio no se dejan intimidar si alguien les dice que su sangre es “sucía”.

Y entonces, el gallo no se embobó, la moto no se quedó varada, el dulce de papaya no se dañó, la flor abrió directo al sol. Las niñas asistieron a clase, las mujeres expandieron su liderazgo al ritmo de la champeta, los hombres se sumaron con respeto y entusiasmo y las poderosas salieron a celebrar la vida en Playa de los Muertos.

CAROLINA RODRÍGUEZ MAYO

La lucha por la Justicia Racial desde los datos y el litigio



ILEX - ACCIÓN JURÍDICA ES UNA ORGANIZACIÓN LIDERADA POR ABOGADAS AFROCOLOMBIANAS QUE TRABAJA POR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES NEGRAS Y AFRO DEL PAÍS.

Ser una persona afro en Colombia es la suma de muchos retos y obstáculos sistemáticos y crónicos. Encarar el racismo es una batalla que no termina, en especial cuando no se cuenta con los datos estadísticos que soporten que el racismo de nuestro país está ligado a la estructura en que nuestra sociedad está construida. Imagínense la gravísima omisión que cometió el DANE en el año 2018 cuando en su censo no contó de forma correcta a la población afro. Sin embargo, esta falta no pasó desapercibida ni por movimientos ni por organizaciones que trabajan por la garantía de Derechos de las comunidades negras.

En esta lucha hubo una organización que en su quehacer y con perseverancia, logró que la Corte Constitucional declarará que en efecto sí hubo invisibilización estadística de la población afro en el censo de 2018. Gracias al apoyo de ILEX-Acción Jurídica, en 2022 se entendió la trascendencia que puede tener el conteo del censo entre comunidades marginalizadas.

ILEX es una organización liderada por abogadas afrocolombianas que se proponen crear y ejecutar diferentes mecanismos de acción para proteger y fortalecer a las comunidades afro del país. Esta organización está incidiendo en el derecho desde un lugar excepcional, puesto que con su trabajo pretende hacer gestión pedagógica sobre racismo y reparar el tejido social dentro de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras; en otras palabras, ejercer el derecho como instrumento de cambio.

Quienes somos parte de la diáspora africana y vivimos la racialización de primera mano, sabemos que es fundamental contar con políticas públicas que tengan un enfoque étnico/racial. La organización ILEX explica en sus redes sociales que la justicia racial debe estar también ligada a políticas con ese mismo enfoque: “la política fiscal es un

instrumento para la distribución del ingreso y la riqueza, la forma de recolección y, en general, la capacidad para la inversión en iniciativas públicas y planes de desarrollo que tienen como fin la garantía de los derechos de todas las personas”. Ahora imaginémonos que esa política fiscal está desprovista de la información completa y, que por eso, millares de personas afro se quedarán por fuera de oportunidades que se relacionen con su crecimiento académico, social o económico.

El reconocimiento de la negritud como parte de una conversación más amplia y urgente mantiene a ILEX en el filo de la navaja. Sin lugar a dudas, esta organización lucha contra el racismo tan presente en las diferentes esferas sociales. La invisibilidad estadística, además, contribuye a una idea de mestizaje errónea, una idea de mestizaje que ignora que sí existen diferencias en nuestro país que se originan por la idea de raza y la manera en que se han dado los procesos de racialización en Colombia. Para empezar, el instrumento que mide en el censo quién es afro ya tiene muchos vacíos que impidieron el autorreconocimiento y la movilidad adecuada para el conteo de la población afro. Dayana Blanco, abogada fundadora de ILEX, asegura: “en Colombia las narrativas del mestizaje y las narrativas que niegan la existencia de la discriminación racial y el racismo son muy extendidas. Eso permea de manera importante las instituciones judiciales”.

La invisibilidad estadística es un tachón a la memoria nacional, en especial a la magnitud de los aportes, las necesidades y la riqueza de las comunidades afrocolombianas. ILEX, por medio de acciones pedagógicas, insiste en la importancia que tiene la información estadística veraz y confiable: “si no hay datos confiables sobre el tamaño, ubicación y condiciones de vida de la población afrodescendiente, el Estado no podrá contar con información suficiente para atender las situaciones de exclusión sistemática que afectan a esta población”.

ILEX busca mostrarle a Colombia las realidades de las personas negras usando como puente el reconocimiento de sus diferentes intersecciones, si bien su aporte fue muy significativo en lo que terminó por aceptar la Corte Constitucional con respecto a la invisibilidad estadística de 2018, este no es el único aporte que han realizado a la contabilidad estadística de las poblaciones negras.

ILEX cuenta entre sus diferentes líneas temáticas con una específicamente dedicada a la justicia de datos y representación, coordinada por Daniel Gómez, quien nos contó: “muchas personas no consideran que existan brechas sociales significativas o patrones de discriminación que afecten a poblaciones históricamente excluidas como la afrocolombiana. Las cifras en ese sentido son la prueba que permite acreditar la existencia de la discriminación. Si no tenemos cifras, no solamente no podemos diagnosticar el problema, sino que probablemente no habrá sustento jurídico suficiente frente a cualquier tipo de política pública que hagamos para remediar esas brechas”. Si no hay cifras, no hay acceso a derechos, las personas afrodescendientes deben estar clara y contundentemente entre las estadísticas poblacionales del país, de lo contrario, como lo subraya ILEX, no existimos para el Estado. Esta organización busca visibilizar los diversos desafíos que atraviesa la vida de las personas afrocolombianas en la lucha por la garantía de sus derechos, como sucede, por ejemplo, con el anexo de las parteras al sistema de salud que se hace efectivo a través de la sentencia T-128 de 2022 “con la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhorta al Congreso a legislar sobre el tema”.

La organización ha publicado catorce textos entre informes, recomendaciones y estudios que robustecen el estudio del derecho

bajo el lente de la raza, una investigación que lleva muy poco tiempo en Colombia, en especial desde la orilla de lo jurídico. Una perspectiva de justicia racial es una oportunidad para cambiar la política pública, como el ejemplo que nos da ILEX con la política fiscal que con un enfoque étnico/racial podría entenderse como un instrumento para adoptar decisiones relacionadas con el gasto, el impuesto y el endeudamiento.

Es un logro para las personas negras, dado que la Corte Constitucional le hizo la exigencia al DANE de realizar un estudio que “evalúe de manera sistemática y comprensiva” las razones detrás de la invisibilización y disminución de la población afrodescendiente en los últimos tres censos. ILEX se comprometió a hacerle seguimiento al fallo y continuará trabajando para garantizar los derechos de la población afro en nuestro país.

CAROLINA MILA

Una organización que apoya a los awá



A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS, LA ORGANIZACIÓN NARIÑENSE CORPORACIÓN CHACANA HA PROCURADO TRABAJAR A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA, ESPECIALMENTE DE LOS AWÁ, UNA ETNIA EN PELIGRO DE EXTERMINIO POR LA VIOLENCIA DEL CONFLICTO ARMADO. AUNQUE LA SITUACIÓN PARA LOS INDÍGENAS ES DIFÍCIL, EL APORTE DE CHACANA HA DEJADO SU HUELLA Y EN EL PROCESO, AMBAS PARTES HAN PODIDO APRENDER MUCHO LA UNA DE LA OTRA.

Una etnia en peligro de exterminio

Edisson Canticus es un joven awá de 30 años del resguardo Nulpe Medio Alto Río San Juan. La suya ha sido una de las comunidades étnicas más afectadas por el conflicto armado.

Por la época en que Edisson nació, en los noventa, el territorio awá, ubicado en Nariño y una parte del Putumayo, empezó a ser asediado por grupos guerrilleros en busca del control de la zona, atraídos por su cercanía con el océano Pacífico (ideal para el tráfico directo) y la concentración de cultivos ilícitos.

Al menos tres fallos de la Corte Constitucional reconocen la vulnerabilidad de los awá y exigen su salvaguarda, incluyendo el Auto 174 de 2011 que decreta medidas cautelares para su protección. Pero la situación es compleja. “No ha sido fácil vivir aquí”, cuenta Edisson. “Hay que cuidarse, no meterse con nadie, tratar de ser neutral para no tener enemigos”. A lo largo de los últimos treinta años los awá han sido víctimas de homicidios, masacres, desplazamientos y confinamientos, así como la integración a la fuerza de miembros de su comunidad a los grupos armados.

En el 2013, mientras Edisson terminaba su bachillerato en el municipio de Ricaurte, su resguardo vivió un confinamiento por los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. Toda la comunidad se concentró en un solo punto por varias semanas. El gobierno llevaba alimentos y los entregaba. “La gente corría, se escondía, era complicado”, recuerda.

En medio del conflicto, sin embargo, los awá siguen resistiendo. Edisson no ha querido dejar de estudiar; además de graduarse del

colegio hoy cursa un pregrado en administración financiera y una especialización en formulación de proyectos. “Hay mucho trabajo por hacer aquí”, explica. Dentro de sus proyectos, Edison tiene en mente revivir el colectivo de comunicaciones y la emisora de la que fue director en el colegio, bajo la directriz de la organización social Chacana, que se ha dedicado a apoyar a la comunidad awá desde el 2011.

“Esa fue una iniciativa muy útil”, recuerda Edison “Salíamos a los resguardos a investigar y a hablar con nuestros mayores sobre nuestros saberes, para hacer piezas para la emisora”. Varios jóvenes que hicieron parte del proyecto siguieron formándose en temas de comunicación, incluido Edison, quien luego realizó un diplomado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

“En el territorio, cuando la gente va a cazar o a trabajar la tierra, conversa y habla de sus historias”, explica Iván Rodríguez, abogado de la Universidad de Nariño y miembro de la organización Chacana. “Y el desplazamiento rompe ese intercambio intergeneracional. La idea del programa radial era devolverles a ellos su rol de protectores de sus tradiciones”.

Para Lina Rondón, directora de la organización Las Paces, una de las dificultades para la atención de las vulneraciones a los awá es la distancia con la capital y el difícil acceso al territorio. “Al final, estas terminan siendo más compensadas por organizaciones locales como Chacana, que por el mismo gobierno nacional”, añade.

La importancia de empoderar a la comunidad

El origen de la organización Chacana se encuentra en el seno de un grupo de ocho amigos de distintas carreras de la universidad pública, que compartía el mismo interés por la protección de las comunidades indígenas y sus saberes, y una afinidad especial con el arte y la naturaleza. “Teníamos el sueño de una sociedad diferente”, recuerda Ximena Ordóñez, ingeniera industrial de la Universidad Nacional y una de las fundadoras del grupo, “con menos conflicto y menos afectación por la guerra”.

El grupo decidió llamar a su organización “Chacana”, en honor a uno de los símbolos quechuas más importantes: una cruz cuadrada que también es una constelación y para los indígenas de los Andes representa el equilibrio entre los opuestos, lo femenino y lo masculino, lo divino y lo terrenal.

El primer proyecto que Chacana desarrolló con los awá fue financiado por la cooperación internacional en 2011, y buscaba ayudar a fortalecer las coordinaciones de mujer y familia de la organización Unipa (Unidad Indígena del Pueblo Awá) y Camawari (el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte). “La idea era que las mujeres aprendieran sobre sus derechos y fortalecieran sus capacidades para el liderazgo y el trabajo comunitario”, cuenta Mercedes Villota, socióloga de la Universidad de Nariño y actual representante legal de la organización.

Pero entrar en contacto con la comunidad fue más complejo de lo que imaginaron. Visitar los resguardos les implicó a menudo varias horas de caminata por el piedemonte costero —a veces hasta nueve horas a pie— así como repensar sus estrategias una vez entraron en el territorio. “Ellos estaban pensando en sus cultivos, sus animales, si iba a

llover o no” recuerda Iván, “entonces era muy complicado llegarles con clases magistrales sobre los derechos”. También notaron que los awá vivían en un estado constante de miedo y era esencial construir lazos de confianza con ellos. “Nos dimos cuenta de que era importante conocerlos en sus espacios cotidianos, como la cocina, y el trabajo en el campo”, cuenta Mercedes. “Así como en sus recorridos por el territorio, una actividad que resulta central en su vida y su cultura”.

Los integrantes de Chacana indagaron en la cosmogonía y los mitos awá; echaron mano de herramientas que conocían de las artes y el teatro para realizar sus talleres: con técnicas como el *clown* y los títeres, para explicar asuntos como la consulta previa y enseñarles a hablar en público y sostener la mirada. Poco a poco se fueron ganando la confianza de esta comunidad, con la que siguieron trabajando en distintos proyectos hasta el día de hoy, y con la que continuaron explorando y aprendiendo distintas formas de hacerlo.

Líderes que replican el trabajo

Cuando Chacana llegó al territorio, Doris Gamez* aún se encontraba haciendo el duelo de su esposo asesinado por las Farc nueve años atrás. En ese momento, y después de haberse aislado a raíz de la tragedia, a sus 42 años, decidió empezar a asistir a los talleres de la organización. “Me gustó la idea de enfocarme más en la comunidad porque había estado muy metida en el hogar”, cuenta.

Doris recuerda especialmente la cartilla del “Gran Canasto”. Un manual que Chacana realizó junto con la comunidad y que usaba la

*Nombres cambiados por la seguridad de los entrevistados.

analogía del tejido de un canasto para explicar los derechos de la mujer así como la violencia de género. Las asistentes al taller también aprendían cómo explicarles la cartilla a mujeres de otros resguardos.

Doris estuvo con Chacana un par de años y luego siguió trabajando por su cuenta. Sin saberlo, su compromiso ha inspirado a otras mujeres awá incluidas sus propias hijas; ella dice que no olvidará el día que al regresar de una visita a otro resguardo su hija menor le comunicó que quería seguir estudiando. “Había quedado impresionada con el taller que yo había dado y cómo la gente se había expresado y me dijo que quería ser sicóloga para ayudarlos”, y hoy se encuentra en camino a lograrlo.

A los 54 años, Doris acaba de terminar su bachillerato y ahora se encuentra haciendo un estudio técnico en primera infancia. Últimamente se ha dedicado a hacer incidencia ante un problema con el tubo trasandino que produjo un derrame de crudo en el río. La comunidad está trabajando en una demanda con la ayuda de una organización de abogados, aunque esto les ha valido varias llamadas de amenaza.

Por su parte, Isabel Linares*, quien era la consejera de mujer y familia de la Unipa cuando Chacana llegó al territorio, afirma que el acompañamiento que la organización les hizo en el tema de género fue muy bueno. “Antes no se hablaba de violencia de género, la mujer se callaba. No sabíamos diferenciar las distintas clases de violencia y ellos nos fueron explicando”.

Con el apoyo de Chacana además, la exconsejera realizó en ese momento la gestión de un lugar especial para las mujeres que aún sigue en pie: “La casa de la mujer awá”, para las víctimas de abuso

sexual y el maltrato en el marco del conflicto y la vida familiar. La casa también es un espacio para que las mujeres se reúnan en confianza, así como un hogar de paso para todas las que deben viajar de un resguardo a otro para realizar actividades de fortalecimiento organizativo como las realizadas con Chacana.

Tanto Edison, como Doris e Isabel, saben que la situación es difícil pero que no pueden quedarse con los brazos cruzados pues las condiciones en el territorio no han mejorado, sino que incluso empeoraron después del Acuerdo de Paz. "Ahora las disidencias presentan varios nombres y ni se entiende bien lo que está pasando", asegura Isabel. Ellos saben que deben seguir adelante y agradecen el trabajo y apoyo de organizaciones como Chacana, sin el cual, seguramente, tendrían historias muy distintas para contar.

PALOMA COBO

Pintadillo con primitivo: las mujeres que cuidan la tradición negra en el Caquetá



CAQUETÁ SE IMAGINA COMO UN DEPARTAMENTO INDÍGENA, PERO TIENE TAMBIÉN POBLACIÓN NEGRA. MUCHOS LLEGARON A TRABAJAR COMO MAESTROS EN LOS OCHENTA, CUANDO LA COCA ERA TAN BUEN NEGOCIO QUE POCOS QUERÍAN HACER ALGO DISTINTO Y LAS PLAZAS PARA MAESTRO DE ESCUELA QUEDABAN VACÍAS. HOY LA FUNDACIÓN RED DE MUJERES AFROAMAZÓNICAS UBUNTU, HECHA EN BUENA PARTE POR ESAS MAESTRAS O SUS HIJAS, BUSCA RESISTIR DESDE SU TRADICIÓN A LAS NUEVAS AMENAZAS.

Las manos de las profesoras Mireya Emperatriz, Eyda y María Hilda desmenuzan un pintadillo para hacer un plato de bacalao desmechado. En el Chocó, de donde es originaria, la receta se hace con atún. Aquí, en Florencia, Caquetá, usan el pintadillo, un pescado manchado de río, porque el mar y los atunes están lejos. Del pintadillo hay que sacar más espinas, pero su sabor tiene algo terrenal, casi dulzón, que le va bien a la receta. Alrededor de las ollas se habla del mejor achiote, del plátano primitivo que llaman también píldoro en el Pacífico y de las mujeres que les enseñaron a ellas cómo hacer arroz con coco. Las jóvenes están aprendiendo y hacen preguntas. En las mesas, afuera, esperan sentadas las mayores. Todas pertenecen a la Fundación Red de Mujeres Afroamazónicas - Ubuntu, una organización de afrocolombianas habitantes del departamento de Caquetá. Vienen de San José, San Vicente del Caguán, Curillo, Puerto Rico y El Paujil y se han reunido aquí, en esta ciudad rodeada por la selva, para hablar de huertas caseras y comida negra.

Los orígenes

Yohaysa me cuenta que la población afro llegó en varias olas al departamento. La primera a finales de los años cincuenta buscando tierras para trabajar. La segunda ola, en los setenta, fue la de la colonización auspiciada por el Instituto de la Reforma Agraria, INCORA. En los ochenta comenzó la tercera ola, que llaman la académica. En esa época en Caquetá, la coca y en menor medida el caucho y la ganadería, eran tan buen negocio que pocos querían dedicar su vida a otras artes y oficios. Un campesino que trabajó cultivando coca cuenta para Diario de Paz que, durante el *boom*, pagaban unos \$15.000 pesos por el kilo de hoja de coca; mucho más una vez que aprendieron a transformarla en pasta base y comenzaron a participar en algunas secciones de su transporte. Un profesor ganaba al mes \$11.250. Lo mismo podía

hacerse con la coca en días. Por eso, faltaban maestros de escuela en el departamento. El rumor se regó a través de familias y conocidos y llegó a la Costa Pacífica y a las normales del Chocó. De allí vinieron los maestros y maestras. Yohaysa es la hija de una de ellas.

Con ayuda de la Asociación Provivienda de Educadores de Caquetá, los maestros construyeron el barrio Yapurá de Florencia. Ahora es un tejido tranquilo de calles calientes, interrumpido por un parque o un caño de vegetación exuberante. Las bromelias encaramadas en los árboles recuerdan que la ciudad era antes la selva amazónica y que la selva es como un animal agazapado que amenaza siempre con retomar su dominio. En la mitad de una de esas cuadras que llega al parque, está la casa de la Fundación Red de Mujeres Afroamazónicas-Ubuntu, con un mural colorido de una mujer negra pintado en la fachada.

El primer piso tiene un restaurante de comida étnica, primorosamente decorado en rosas y verdes, y una exhibición de bebidas ancestrales del Pacífico. El segundo es el espacio de encuentro para las actividades que hace la Fundación. FREMA, cuenta Yohaysa, es un hijo que parieron en el 2019. En el momento, había organizaciones afros en el departamento, pero la mayoría eran lideradas por hombres. No había una organización femenina para mujeres negras. Hablaban en sus primeros encuentros de autorreconocimiento, salvaguarda e intercambio de saberes, medicina tradicional y partería. Después se sumaría el trabajo en torno a la lectura y la biblioteca Harambee, especializada en literatura negra, y otros espacios de formación en política, cocina, estética negra y comunicación popular. La historia de creación de la Fundación se interrumpe en la grabación por los saludos cariñosos y las risas de las compañeras de Yohaysa. Acababa de llegar a Florencia después de un viaje por su otro trabajo, en una organización humanitaria, y hacía días no la veían. Es fácil saber que

la quieren y pienso que parte de lo que han recuperado es esto: la casa para encontrarse con las vecinas y sus hijas, el lugar para quererse.

Las recetas

Primero el pescado, sea pintadillo o atún, se cocina en poca agua con hierbas de la azotea: tomillo, laurel y cilantro cimarrón sembrado en huertas caseras, más fuerte y de hojas más gruesas que las del cilantro común. Mientras tanto, en otra olla, se va armando un guiso de tomate, pimentón, con cebolla, ajo y achiote. Una vez que el pescado está hervido se desmecha y se une con el guiso. Se acompaña con primitivos, esos pequeños plátanos verdes. Leo en una noticia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que es la variedad de banano que más se produce en el Caquetá, que es propio de la dieta tradicional campesina del piedemonte amazónico y que han intentado propiciar su cultivo para sustituir los de coca. Las profesoras echaron los primitivos completos al agua hirviendo, sin pelar, y después de unos minutos la cáscara se fue abriendo como una flor.

Llegamos al taller invitadas por la profe Mireya, como todos la llaman, el pilar sobre el que se sostiene la Fundación. Quisiera contar toda su historia: el robo de su padre que la llevó a Caquetá y la dejó ahí sin avisar a nadie, las familias de acogida, las clases del bachillerato nocturno después de trabajar en el día limpiando casas y cuidando niños, el curso para entrar al magisterio, las alumnas que le pedían ayuda cuando llegaban jefes paramilitares a buscarlas. Lo más importante, en todo caso, es que fue maestra por 35 años en la vereda Campolejano de Solita, Caquetá. Siempre le gustó, me cuenta, el trabajo comunitario. “Río arriba y río abajo, eso es lo que me gusta”. Al pensionarse, acompañó escuelas de Putumayo y descubrió que en

algunas solo había letrinas. Logró que la Asociación de Exportadores de Flores de Colombia le donara lo suficiente para hacer los baños. Cuando los fueron a construir, se dieron cuenta de que era preciso correr el aula porque se la iba a llevar el río, así que lo hicieron. Ella dice que siempre tuvo ángel y que es por eso que las cosas le salen, pero es también por su audacia y por su persistencia alegre. Ahora trabaja en FREMA. Quiere que las tradiciones de sus ancestros no sigan perdiéndose. No se trata de un ejercicio de la nostalgia, o no solo, sino de aguante. Desde allí resisten a la injusticia contra las mujeres y los afros, que parece siempre reinventarse.

Una de las participantes más jóvenes en el taller de cocina es Mercy Ivonne Ararad. Nos cuenta que, a pesar de ser la hija de un hombre negro, no conocía, hasta ahora, sus tradiciones. Nadie se las había contado. Esto ocurre con frecuencia en el Caquetá. En parte se debe al racismo oculto, en parte a la migración y al paso del tiempo. “Hay un vacío en las familias, pero las organizaciones venimos a complementar”, dice Mireya. En FREMA, por ejemplo, enseñan también a querer y cuidar el pelo crespo. Cuando regrese a Puerto Rico, su vereda, Mercy va a intentar otra vez montar un grupo de danza afro. Bailar es lo que más le gusta, junto con la pasta y la cazuela de mariscos.

Elda María Quiñones Angulo, a quien todas llaman la Tía, es una partera de 82 años de las riberas del río Caquetá. Ha traído decenas de niños al mundo y conoce los secretos de la chilangua y el pronto alivio, el escancel, la moringa y la cargadita. Sabe cómo curar el mal aire y el espanto, cómo hacer crecer las plantas, cómo rendir la comida, cómo anudar el cordón umbilical para que no sangre. Dice que la peor destrucción del campo es la coca, porque la gente se acostumbró a tener dinero en el bolsillo y ya no siembra. Ahora, compran el

plátano en el supermercado. Las fumigaciones dejaron a la tierra sin sangre, dijo alguien más, “y si no tiene sangre, no tiene vida para dar”. Olvidaron también, dicen, la red de apoyo mutuo que trajeron consigo del Pacífico al llegar. Antes “si alguien cazaba, a todas las casas llegaba una presa”.

En el camino del centro a Yapurá nos contaron los taxistas que la coca no se está vendiendo y que los negocios estuvieron vacíos en Navidad. Leí hace poco que, ante la crisis, se esperaba una remontada de otros negocios ilegales. Pensé en lo que nos dijeron, “hay algo esencial que muchos han olvidado”, y pensé en las mujeres que todavía lo recuerdan.

MARÍA MERCEDES ACOSTA

Ser una organización feminista es todo un reto en Riohacha



EL TRABAJO POR LA NO VIOLENCIA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO EN RIOHACHA (LA GUAJIRA), LIDERADO POR UN GRUPO DE MUJERES DE ESTA CIUDAD, PASÓ DE SER UNA CAMPAÑA CIUDADANA A SER LA ASOCIACIÓN EVAS Y ADANES, UNA ORGANIZACIÓN QUE LE APUESTA A LA PEDAGOGÍA Y A LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PARA TRANSFORMAR EL MACHISMO PROPIO DE LA GUAJIRA EN INCLUSIÓN E IGUALDAD.

La economista Ana Teresa Puente nació y creció en Riohacha, la capital de La Guajira. Uno de los recuerdos que más se le viene a la mente cuando piensa en esta ciudad, ahora que vive en Barranquilla, es la incomodidad que sentía a los 13 años al salir de su casa. Sabía que sin falta los vecinos le dirían: “adiós, mi amor”, “chao, bonita” y otra serie de frases propias del acoso callejero. Ella se sentía intimidada, nerviosa, casi sin poder caminar.

Al crecer, entendió que esta era una práctica habitual en muchos hombres y en diferentes cuadras de su ciudad. En el sector donde vivía y en otros, también era común que algunos hombres tocaran a las mujeres sin que nada pasara, tal cual como sucede en tantas otras ciudades de Colombia. Quienes veían la situación, solo decían: “fulanito le tocó las nalgas a fulanita”. Y se reían. “Yo crecí en una ciudad en donde muchos hombres se sienten dueños de los cuerpos de las mujeres, y se indignan si uno les dice que no es así”, señala Ana Teresa, quien también recuerda ver a amigas, vecinas y familiares suyas diciendo: “al hombre hay que atenderlo y tenerle la comida lista para evitar problemas”.

Riohacha, la misma ciudad en donde buena parte de las autoridades no hablan de “violencia de género” sino de “violencia intrafamiliar” e intentan hacer conciliaciones con la denunciante porque son compadres del victimario. Según cifras de ONU Mujeres, en 2021 se registraron 472 casos de violencia de género en esta ciudad, 151 corresponden a mujeres extranjeras, venezolanas en su mayoría, debido a prejuicios y a las dificultades de acceso a servicios. La violencia que predomina es la física, seguida por la sexual.

De acuerdo con el observatorio de igualdad de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2019 y

2022 se documentaron 325 delitos sexuales en La Guajira que incluyen desde acoso verbal hasta penetración forzada, violencias en su mayoría ejercidas por personas cercanas a la víctima como parejas, ex parejas, familiares, amigos y conocidos.

A esto se suma que, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en La Guajira, desde 2019, se han atendido al menos 250 casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: 45 % migrantes, 14 % indígenas y 88 % niñas. Una de las causas asociadas a la explotación sexual en esta zona es la alta migración, aprovechada por grupos ilegales que controlan actividades delictivas como la trata de personas.

De acuerdo con Ana Teresa, el tema no es que en Riohacha haya más o menos machismo, violencia de género o explotación sexual que en otras ciudades de Colombia (de hecho no es una de las ciudades que encabece estos listados) pero sí existen unas particularidades, además de los procesos migratorios, que dificultan la cotidianidad de mujeres, infancias y personas LGTBIQ+. Por ejemplo, en esta ciudad todavía circulan los llamados “pasquines”, contenidos que años atrás eran impresos y fotocopiados, y se difundían en colegios y otros espacios cerrados, pero que ahora son virales a través de WhatsApp. Se trata de documentos que describen, con nombres y apellidos, la supuesta vida sexual de las mujeres de la ciudad.

Desde su adolescencia, Ana Teresa estuvo vinculada a voluntariados y trabajos relacionados con educación sexual y derechos humanos. Por eso, apenas conoció una iniciativa ciudadana liderada por Fabrina Acosta, psicóloga, con quien había trabajado en la Secretaría de la Mujer del Atlántico, no dudó en sumarse. Fabrina, al igual que Ana Teresa, sentía una profunda incomodidad con muchas desigualdades

de La Guajira, así que un día de 2012 le apostó a liderar campañas como “piensa tu voto” y “hablando miércoles”, coordinando los contenidos de infancias y género.

Con el tiempo, Fabrina decidió escribir sobre las “recetas” o las “fórmulas de vida” que, supuestamente, las mujeres deben cumplir. De ahí nació su primer libro: “Mujeres sin receta”. Después vino el segundo: “Evas culpables, Adanes inocentes”, con el que buscaba expresar que ni Eva es culpable ni Adán inocente, a propósito de la creencia de que Adán fue manipulado por Eva.

Para Ana Teresa Puente, lo mejor de esas iniciativas ciudadanas que incluían foros y reflexiones alrededor de los libros de Fabrina, fue encontrarse con personas profesionales de La Guajira, interesadas en trabajar por el departamento. “Suele pasar que al no haber mucha oferta de formación profesional en La Guajira, quienes cuentan con los recursos, estudian por fuera y no regresan a trabajar por el territorio”.

Al ver que las iniciativas y campañas tomaban fuerza y que no había muchas relacionadas con feminismo en la región, en 2015, Fabrina, Ana Teresa y otras personas, decidieron formalizar su trabajo por la equidad de género y la no violencia contra las mujeres, bajo el nombre de Asociación Evas y Adanes. Con el paso del tiempo, han empezado a definirse como una organización que aporta al cambio social a través de la pedagogía y las comunicaciones.

El nombre de la organización está inspirado en un libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano que parafraseando sería: si Eva hubiera escrito el Génesis, la primera noche no habría sido como Adán la cuenta y tampoco pariría con dolor. “Esas serían mentiras que Adán le

contó a la prensa”, dice Galeano. “Evas y Adanes”, además, les parecía un nombre polémico para una organización feminista.

Uno de sus primeros logros fue tener un espacio en vivo en la emisora de la Universidad de La Guajira para hablar de género. Posteriormente, el programa empezó a salir a manera de *podcast*. Desde entonces, entidades como la Fiscalía, Medicina Legal y distintos medios de comunicación empezaron a consultarlas con frecuencia.

Entre sus eventos más concurridos está el foro “Tejiendo Esperanzas por La Guajira”, en Bogotá, que reunió a personas influyentes de este departamento. Para mucha gente, los eventos de Evas y Adanes son transformadores. Para la muestra, el caso de la acordeonera María Silena Ovalle, quien a pesar de sus múltiples compromisos y de su más de un millón de seguidores en Instagram, dice: “para mí ir a un foro de Evas y Adanes es prioritario en mi agenda”.

En una oportunidad, mientras que en Valledupar tenía lugar el Festival de la Leyenda Vallenata, Evas y Adanes organizó una agenda paralela en el Centro Comercial Guatapurí con mujeres acordeoneras. Al final, un hombre conmovido tomó el micrófono y dijo: “voy a comprarle un acordeón a mi hija porque yo era de los que decía que ella no se iba a volver un marimacho”. Hoy su hija es uno de los talentos de la ciudad. Un día, un señor les dijo a las integrantes de Evas y Adanes que él tenía por costumbre disparar al aire cada vez que se emborrachaba pero que desde que asistía a sus foros, había dejado las dos prácticas.

Fabrina, incluso, se considera un indicador de éxito de la organización porque le permitió reconciliarse con sus derechos sexuales, tener la firmeza para decir: “no quiero ser mamá”, poder hablar abiertamente con su familia de temas que antes no se tocaban y dejar de sentir

presión por ser heterosexual sino poder reconocerse como queer o pansexual. En buena medida, aseguran sus fundadoras, el crecimiento de Evas y Adanes radica en que ha ido permeando espacios y personas con sutileza, evitando los discursos polarizantes. “Si el tono inicial de la organización hubiera sido más fuerte e impositivo, no habiéramos logrado lo que hemos conseguido. Esa sutileza ha sido la puerta de entrada para ir conquistando escenarios. Pero ya es necesario ser más atrevidas, no solo compartir conocimiento, sino nuestra visión de mundo y fijar más nuestra posición. Dejar claro que los derechos humanos no son temas de opiniones ni de estar o no de acuerdo sino algo propio de todos los seres humanos”, señala Ana Teresa Puente.

Actualmente la organización tiene tres líneas de acción: una académica en la que han participado en eventos y en la investigación y formulación de políticas públicas y de cartillas con Naciones Unidas. También han trabajado con las facultades de Etno-Educación, Administración Turística y Hotelera y de Trabajo Social de la Universidad de La Guajira en las que no era fácil hablar de género.

La segunda línea es la pedagógica que incluye el *podcast*, jornadas educativas sobre género y derechos en escuelas y comunidades indígenas, y la organización de eventos como TED X Riohacha y de foros como “Tejiendo nuevas realidades para la Guajira”.

Que una organización feminista como Evas y Adanes lleve desde 2015 en Riohacha ha sido una prueba de persistencia y resistencia. Sin embargo, entre los retos de la organización está ser sostenible económicamente para seguir siendo ese oasis de esperanza y de transformación en La Guajira.

SOFÍA FORERO ALBA

“Una persona con autismo no vive en su propio mundo”: trece años derribando estigmas sobre el autismo en Colombia



SEBASTIÁN ES COFUNDADOR DE LICA-LIGA COLOMBIANA DE AUTISMO Y, AL TIEMPO, UNA PERSONA CON AUTISMO O EN EL ESPECTRO AUTISTA. HACER PARTE DE LA ORGANIZACIÓN LE HA PERMITIDO ROMPER PREJUICIOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS CON AUTISMO Y, EN CAMBIO, POTENCIAR SU AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN. COMO ÉL, MUCHOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON AUTISMO, ASÍ COMO SUS FAMILIAS, RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO DE LICA DESDE 2009, QUIENES TRABAJAN POR LA GARANTÍA PLENA DE SUS DERECHOS.

Sebastián Villarraga se describe como una persona tranquila y amable, siempre dispuesto a apoyar a los demás. Estudió gestión de empresas agropecuarias en el SENA. Le gusta la música, los animales, la literatura, los videojuegos y la naturaleza. Además, es una persona con autismo o en el espectro autista y cofundador de la Liga Colombiana de Autismo-LICA. Ha participado en talleres y actividades de la organización desde sus inicios. Esto le ha ayudado a mejorar su interacción social, “a convivir muy bien con otras personas y a ser un poco más abierto, expresivo y también a ser más comprensivo con los demás, a reconocer más las expresiones de las personas, reconocer algunas situaciones y la forma correcta de reaccionar”. El acompañamiento que ha recibido le ha permitido romper prejuicios asociados a las personas con autismo y, en cambio, potenciar su autonomía y autodeterminación.

“Nada sobre nosotros sin nosotros” es la consigna del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Con esto buscan que ninguna decisión que les afecte o tenga un impacto sobre su vida pueda tomarse sin tenerles en cuenta, sin garantizarles una participación activa. Las personas con discapacidad son un grupo heterogéneo y, dentro de ellas, están las personas con autismo. Esta condición hace que se comuniquen e interactúen con su entorno de una manera distinta a como lo hace la mayoría, lo que muchas veces implica enfrentarse a barreras para acceder a la educación, a una atención integral en salud, a un trabajo, para establecer vínculos interpersonales y para participar en comunidad.

Al ser un espectro, el autismo es diverso y amplio. Esto implica que cada persona presenta características únicas y requiere un acompañamiento diferenciado para desempeñarse en la vida cotidiana. “El autismo es tan diverso que es un reto para la persona

que lo vive, para su familia, para las políticas públicas y para la comunidad”, menciona Betty Roncancio, directora de LICA. Esta organización surgió con el propósito de visibilizar qué es el autismo, enfrentar la exclusión que la sociedad les impone a las personas con esta condición y trabajar por la garantía plena de sus derechos. Betty y su familia decidieron fundar LICA años después de recibir el diagnóstico de su hijo Juan José y enfrentar diferentes barreras para acceder a servicios de salud y educación. A Juan José, al igual que a muchos niños y niñas con su condición, le cerraron las puertas de muchos jardines infantiles por considerar que no estaban preparados para recibir a una persona con autismo, o que recibiría un mejor acompañamiento en instituciones especializadas, a pesar de que esto implica negar su derecho a la educación, excluirles de un entorno escolar regular e impedirles aprender en igualdad de condiciones.

Aunque en Colombia no hay estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2023, 1 de cada 100 niños tiene autismo. Que no existan datos oficiales en el país es una muestra del desconocimiento que hay sobre el tema. En 2009, cuando inició el trabajo de LICA, la información era escasa y confusa. Por eso, a sus fundadores les pareció relevante comenzar por hacer pedagogía. En 2010, a un año de su creación, hicieron el Primer Congreso Internacional de Autismo. También han organizado caminatas con motivo del Día mundial de la concientización sobre el autismo, que se conmemora el 2 de abril. El primer año se reunieron alrededor de 200 familias.

Para la organización también es fundamental el acompañamiento a las familias de las personas con autismo, brindarles información y herramientas para el proceso de diagnóstico, la aceptación, la capacitación y el empoderamiento para lograr afrontar las situaciones con asertividad. Por eso LICA lidera la Red Colombiana Espectro

Autista-RCEA, en la que se articulan familias y organizaciones de 15 ciudades de Colombia para buscar la garantía de los derechos de las personas con autismo.

Luego de trece años de trabajo, LICA ha logrado un gran impacto en la vida de las personas con autismo a través de actividades como caminatas, murales, conferencias sobre inclusión en bibliotecas y universidades, talleres de habilidades sociales, entre otras. Han participado en la formulación de diferentes leyes sobre discapacidad, salud mental, también en resoluciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. En estos espacios han logrado darles un lugar a las necesidades de las personas con autismo. Fueron invitados por el Ministerio de Salud para la construcción del protocolo de autismo, que establece una ruta para el diagnóstico, el tratamiento y la atención integral de las personas con autismo en el sistema de salud.

Es necesario cambiar la manera como la sociedad ve a las personas con discapacidad, en este caso con autismo. “Se mantiene el imaginario de que siempre son niños, que deben estar siempre bajo la supervisión y el cuidado de su familia, que no puede tomar decisiones, que no puede tener hijos”, indica Betty. Una persona con autismo no vive en su propio mundo. Al contrario, ve, oye, siente, piensa y se relaciona en comunidad, “puede llegar a tener cualquier tarea, función o trabajo, desde desarrollar *software*, tallar madera o ser muy bueno cultivando algo, como cualquier persona”. La sociedad debe entender que el autismo (y la discapacidad en general) no es una enfermedad, sino una condición que implica que las personas necesitan apoyo para participar de la vida en sociedad en condiciones de igualdad. También es importante contar con estadísticas oficiales y con una política pública nacional que permita atender integralmente a las personas con autismo, y, sobre todo, que nadie debe sustituir su voz ni dudar de que pueden tomar decisiones, brindándoles los apoyos que puedan necesitar para fomentar y reconocer su autonomía.

PALOMA COBO

El centro es la periferia: un círculo de palabra en la Fundación Caminos de Identidad -FUCAI-



LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN CAMINOS DE IDENTIDAD -FUCAI- HAN APRENDIDO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE LOS PROBLEMAS CONTIENEN LAS SOLUCIONES, QUE ENTRE MÁS NOS ACERCAMOS A NUESTROS ANCESTROS MÁS INNOVADORES SOMOS Y QUE HAY ABUNDANCIA DONDE ALGUNOS SOLO VEN ESCASEZ. TRABAJAN EN NUTRICIÓN, AGUA, SOBERANÍA ALIMENTARIA, INFRAESTRUCTURA, GOBIERNO COMUNITARIO, CUIDADO DE LA INFANCIA, CONTROL CIUDADANO Y REFORESTACIÓN, SIEMPRE CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SIEMPRE DESDE SU CENTRO, QUE ES LA PERIFERIA.

Ruth Chaparro, a quien llaman madre, abuela o maestra, es quien abre la palabra. Tiene una mirada serena y el pelo entrecano. Estoy junto a una quincena de miembros de la Fundación Caminos de Identidad-FUCAI en la sala principal de la sede en Bogotá. Sentados formamos un círculo imperfecto. La voz de Ruth suena ronca, casi partida. Dice que FUCAI, la organización por la defensa de los derechos indígenas que dirige, camina muchos días entre el trabajo y el duelo, entre la risa y el llanto. Este es uno de esos días.

Jaime Manuel Redondo Uriana era wayuu. Había nacido en Manaure. Tenía 18 años y prestaba servicio militar en el Catatumbo. Fue asesinado en marzo de 2023 por el ELN, junto a sus compañeros. Jaime Manuel era también el hermano menor de Luis José, quien trabaja en FUCAI como técnico bilingüe. Luis José dijo después que FUCAI era “la palabarrera, quien lleva la voz a la capital” desde los lugares alejados donde trabajan. La voz que llega esa noche a Bogotá es una voz que se duele. Denuncia la violencia siempre inútil de la guerrilla y la crueldad del Estado que dejó solos a soldados jóvenes, ninguno profesional, a pesar de que el ataque hubiera sido anunciado. Señala, yo así lo siento, las injusticias y necesidades que persisten en la Guajira. Esa “estructura que hace presión para que desaparezcan los pueblos indígenas”, en palabras de Ruth. Y, sin embargo, la voz que llega esa noche es también una de consuelo y de ánimo. Una exhortación a seguir. Eso dice el poema que leemos entre todos. Eso, creo, es lo que nos decimos al encender las velas en los pebeteros de metal en nombre de Jaime Manuel.

El comienzo del camino

La Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) nació hace 32 años. Eran un grupo de amigos que trabajaban con comunidades indígenas. Ruth me cuenta que se descubrían con frecuencia incumpliendo y diciendo

mentiras. Las personas les pedían ayuda y ellos, que eran entonces funcionarios públicos, tenían que decir que no podían, que faltaba un trámite o una firma, que esa decisión no estaba en sus manos. La frustración y la vergüenza los llevaron a crear una organización para cumplir lo que prometían.

El método de FUCAI parece sencillo: observar la realidad, entender los problemas, estudiar cómo han sido solucionados antes, diseñar soluciones con las comunidades, implementarlas y celebrar los éxitos. Hacerlo no es fácil. Requiere, primero, de una disposición permanente a la escucha. Esta es una de las cosas que han aprendido de los pueblos indígenas. Tener paciencia y dejar que la palabra se desenrolle, que amanezca y se convierta en obra.

Escuchar es entender, obedecer y actuar. Así han entendido que “los problemas contienen las soluciones” y que “entre más nos acercamos a los ancestros más innovadores somos”. La aparente contradicción se disuelve. Han recuperado métodos de bioconstrucción tradicionales para hacer casas y escuelas adecuadas al clima, la naturaleza y la vida de las poblaciones con las que trabajan. De los mayores indígenas aprendieron también sistemas de cultivo sin huella de carbono, que permiten llevar mayor variedad de alimentos al plato. Ahora, en el bosque amazónico, hay más de cinco mil hectáreas con especies nativas que ayudaron a sembrar.

Su lema mismo, “el centro es la periferia”, es una contradicción ilusoria: el centro de FUCAI es la periferia. Están en la Guajira, en la Orinoquía y la Amazonía, cruzando fronteras que imaginaron los presidentes y los generales pero que no dividen la selva, ni el desierto, ni a los pueblos indígenas.

Los objetos

En la mesa, al centro del círculo de la palabra, hay una corona de plumas, seis pequeñas mochilas, bastones de mando, estatuillas, figurines, un sombrero wayuu, algunas flores blancas, un cesto con maíces secos, libros.

También hay una bolsa de un suplemento nutricional llamado Vita Meal. Daniela Ballesteros, profesional de campo, mestiza, la toma y la apoya sobre sus piernas. Cuenta que las bolsas llegan a Manaure. Ella, con los técnicos wayuu, ayuda a repartirlas. Leo ahora que una bolsa como la que ella sostiene es suficiente para alimentar un niño durante 30 días. FUCAI las entrega a más de 850 familias. Esa es una solución a corto plazo para La Guajira. A mediano plazo, agrega Camila Sanint, otra profesional de campo de la organización, acompañan a las mujeres wayuu a vender sus tejidos. En las familias de las mujeres tejedoras con las que trabajan ya no hay desnutrición. Pero eso, igual, no es suficiente. La crisis humanitaria es profunda y generalizada. Como afirma la periodista del equipo, Zulma Rodríguez, “para lograr cambios sostenibles en el largo plazo FUCAI lidera también la veeduría de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que declara el Estado de Cosas Inconstitucional. Esto es, la violación masiva, estructural y desproporcionada de los derechos al agua, salud y alimentación de los niños wayuu y las comunidades de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao”. Comenta Zulma que después de seis años los avances en el cumplimiento de la Sentencia han sido incipientes. Los niños wayuu siguen muriendo por causas asociadas a la desnutrición, en buena parte por la falta de coordinación entre entidades y las fallas de las entidades de control y de justicia.

Al comienzo, la especialidad de los miembros de FUCAI no era la alimentación, ni la salud, ni el agua. Sus fundadores eran especialistas en educación intercultural bilingüe. Formaron ochocientos docentes y directivos, escribieron textos y programas. Pero en Asamblea de autoridades indígenas se los exigieron. Así que “volvieron al machete, el palín y el hacha”, me cuenta Ruth. Saben que tienen que conocer de suelos, de semillas, de cultivos, de peso y talla, de nutrición y de cocina nativa para poder hablar de hambre cero y soberanía alimentaria. “Vamos donde nos llaman. Nos dicen qué quieren y para qué lo quieren. Establecemos acuerdos y compartimos responsabilidades. Siempre siguiendo los principios de la pedagogía del amor y con un alto nivel técnico”, apunta orgulloso Adán Martínez, uno de los fundadores de FUCAI.

Más adelante les pidieron contribuir con el fortalecimiento del gobierno comunitario de los pueblos indígenas. Acompañaron la construcción de planes de vida y planes de manejo ambiental. Han formado a más de 500 líderes, autoridades y guardias indígenas y han ayudado a legalizar territorios y organizaciones. Sergio Martínez, coordinador de proyectos, dice que “los equipos de FUCAI hacen lo que no saben hacer, con la convicción de que se puede hacer”. Lo que no dice es que además lo hacen bien. Han ganado el premio Bartolomé de las Casas entregado por Casa de las Américas y han sido reconocidos por Telefónica España como una de las 10 mejores prácticas de transparencia. Ruth, además, fue reconocida con el premio Mujer Cafam en el 2011.

La abundancia

De la mesa, Luz Dary Mojica toma el cesto. Viene de Nazareth, un resguardo indígena tikuna en la margen del río Amazonas, a una hora

de Leticia. Es gestora ambiental en la Fundación y técnica bilingüe. Trabaja con niños reforestando la selva quemada. El cesto tejido que tiene en sus manos habla de la abundancia, dice. Recuerda lo que enseña a los niños con los que trabaja: “todos somos ricos aunque digan que somos pobres”.

Antes de irnos, nos regalan bolsas de frijoles nativos, cultivados en La Guajira. Eran los excedentes de una cosecha que la Fundación había promovido. Todavía me quedan algunos en casa: pequeños, marrones, con un puntito blanco en la punta. Me sorprende saber que vienen de una tierra árida. Ruth, hablando de la posibilidad que tiene la gente de resolver sus problemas, dijo “todos tenemos las semillas”. Dijo también que es preciso retomar la fuerza y la dignidad y trabajar con gozo y disfrute para que las semillas crezcan.

FUCAI, desde el respeto y la acción amorosa, ha ayudado a mostrar esa profusión y esa potencia de ideas, de comida, de saberes, de plantas y de soluciones que están en los pueblos y las tierras indígenas. Con su mirada generosa y sensible, ha sabido reconocer la abundancia que siempre duerme en las cosas.

JOSÉ DARÍO PUENTES RAMOS

La lucha del campesinado colombiano para ser reconocido y contado



A TRAVÉS DE UNA HISTÓRICA TUTELA, LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DE INZÁ-TIERRADENTRO (ACIT) JUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PAÍS LOGRARON UN HITO PARA LA LUCHA CAMPESINA EN COLOMBIA: OBLIGAR AL ESTADO A CENSAR A LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS PARA CARACTERIZARLOS Y RECONOCERLOS, Y ASÍ RECOGER INFORMACIÓN QUE AYUDE A CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LOS BENEFICIE. ESTE ES EL RESULTADO DE LA UNIÓN, LA AUTOGESTIÓN Y LA PERSISTENCIA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO.

La foto final de quienes elaboraron la Constitución de 1991, uno de los hitos en la política colombiana, quedó incompleta. Si bien hubo participación de diversas comunidades y distintos movimientos sociales en la Asamblea Nacional Constituyente, hizo falta una histórica población que lleva décadas luchando, incluso desde la época de la Colonia, por sus derechos: el campesinado. De eso están convencidos en Inzá, un pueblo incrustado en las montañas del oriente del Cauca.

“Ese nuevo acuerdo, la Constitución del 91, invisibiliza y excluye al campesinado de ese pacto político y lo rezaga frente a las otras comunidades rurales, sean indígenas o afrocolombianos. Esto dejó huérfano al campesinado. Ahí es cuando nosotros decimos: existimos y estamos aquí”, dice Eliécer Morales, un campesino inzaeño que le ha dedicado buena parte de su vida a la reivindicación de los derechos del campesinado colombiano.

Inzá hace parte de la región de Tierradentro —cuenta Eliécer como si estuviese dando una clase de historia—, un territorio que desde la época de la Conquista empezó a poblarse de indígenas, mestizos, blancos y comunidades negras. “La migración se dio porque la región era paso obligado entre Bogotá y Quito; y porque gente de otras tierras se asentó acá huyendo de las violencias que hemos vivido en el campo, en las zonas planas”. Además, agrega Eliécer, las bonanzas de la quinua, el café y la madera que se registraron en la región también atrajeron a nuevos pobladores. “Eso hace que seamos una región con diversidad cultural, étnica e identitaria”.

Pero esa diversidad también ha provocado tensiones entre el campesinado y las otras poblaciones que habitan Inzá y Tierradentro, puntualmente por la diversidad en la gobernanza territorial y la titularidad sobre la tierra. Los campesinos y las campesinas sienten

que la Constitución del 91 los excluyó de nuevo, desconociendo las luchas que empezaron en los años 30 del siglo XX, y a la par, brindó herramientas políticas a la población indígena y afrocolombiana, pero lamentablemente no sucedió así con el campesinado.

Un momento importante en la lucha por el reconocimiento campesino fue cuando un puñado de jóvenes de Tierradentro decidió irse hacia Bogotá en los años noventa para estudiar y formarse con el propósito de retornar al territorio y aportar con sus conocimientos a la lucha campesina que lideraron por décadas sus padres y madres. Entre esos jóvenes está Eliécer, quien primero ingresó al SENA y después estudió derecho en la Universidad de los Andes.

Eliécer dice que la educación que recibieron él y los demás jóvenes de su pueblo les abrió la mente. Les hizo entender que la lucha campesina debía ir más allá de reclamos o reivindicaciones locales, como exigir la construcción de una vía o el acceso a un servicio público. Y si bien son necesidades, los problemas del campo obedecen más a causas estructurales e históricas, como la falta de participación del campesinado en la toma de decisiones. “Cuando nosotros regresamos, hubo una oxigenación porque aplicamos lo que aprendimos. Hicimos espacios de formación y recorrimos muchas veredas para ampliar la lucha”.

Fue así como en 1997 nació la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro (ACIT) con 200 familias de la región que se organizaron para promover el desarrollo socioeconómico del campesinado, la participación comunitaria en distintos escenarios políticos, la autogestión, el acceso a tierras y la creación de una Zona de Reserva Campesina que les garantice la subsistencia y la autonomía. A la fecha, según cuentas de Eliécer, hay al menos 4.000 familias de la región vinculadas o representadas por la ACIT.

Un censo que no los contó

El 19 de agosto de 2013 es una fecha importante para la lucha campesina en Colombia. Ese día comenzó un histórico Paro Agrario que es recordado porque miles de campesinos y campesinas de todo el país protestaron para exigir mejores condiciones de vida y por una frase del entonces presidente Juan Manuel Santos: “¡Ese tal Paro no existe!”. Quienes lideraron el Paro presentaron al Gobierno Nacional un pliego de peticiones con puntos como un mayor acceso a tierras y el reconocimiento del campesinado como sujeto político, lo que significa participar en la construcción de políticas públicas y garantizar el derecho a la dignidad.

Las peticiones fueron negociadas con el Gobierno de Santos y así se puso fin al Paro, en septiembre de ese año. Sin embargo, compromisos como el reconocimiento del campesinado no se cumplieron y eso quedó evidenciado en la preparación y la convocatoria del tercer Censo Nacional Agropecuario, que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2014 con la intención de identificar el estado del campo colombiano.

Para la ACIT y otras organizaciones que protestaron en 2013, el Gobierno no escuchó los reclamos del movimiento campesino porque el censo no incluyó la categoría ‘Campesino’, ni hizo preguntas para identificar cómo vive esta población. “Es decir, para el Estado solo somos un trabajador del campo mas no un sujeto que tiene una identidad, una cultura, unos derechos y una voz”, explica Eliécer.

Por ese motivo, la ACIT presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Popayán para que se incluyera la pregunta de auto reconocimiento

campesino en dicho censo, recurso que fue negado y confirmado en la impugnación por la Corte Suprema de Justicia.

“Para que el campesinado cuente, primero tiene que ser contado”

Alix Morales es una campesina y pedagoga de Inzá que hace parte del Comité de Mujeres de la ACIT. En 2017, cuenta, los integrantes de la asociación se juntaron con el propósito de presentar una tutela para que en el Censo Nacional Poblacional de 2018 se incluyeran preguntas que permitieran identificar a la población campesina.

No solamente hicieron la tutela a nombre de la ACIT sino de los campesinos y campesinas de distintas zonas de Cauca, Boyacá, Tolima y Cundinamarca. Para ello se necesitaba recoger las firmas o poderes de la gente. “Ahí fue importante el trabajo de las mujeres de la asociación porque apoyamos las visitas a la veredas para explicar la importancia de que nos contaran en el censo”, recuerda Alix. Y es que sin información de quién es y cómo vive el campesinado colombiano es casi imposible que existan políticas públicas adecuadas para que mejore la calidad de vida de esta población y así, de paso, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad.

“Incluso, en algunos momentos nos tocó dar dinero para que los campesinos y las campesinas pudiesen ir hasta donde el notario que nos ayudó con la autenticación de las firmas”. En la memoria de Alix y de Eliécer quedaron las filas que la gente hacía en las veredas de Inzá para sumarse a la tutela y unirse a la lucha.

En total se recogieron 1.758 poderes o firmas de campesinos y campesinas, de los cuales al menos 1.400 eran de habitantes de Inzá.

Con la ayuda de Dejusticia presentaron la tutela el 23 de noviembre de 2017. Y como reconocimiento a la persistencia del movimiento campesino, la Corte Suprema de Justicia falló a favor: el 13 de febrero de 2018 esta alta corte le ordenó al DANE, a los ministerios del Interior y de Agricultura y a otras entidades estatales elaborar estudios que identifiquen al campesinado colombiano, es decir, una radiografía para definir qué es ser campesino en Colombia y cómo se vive en el campo.

Alix considera que es un gran primer paso en la reivindicación de los derechos del campesinado en Colombia porque “como dice el lema de la campaña que hicimos: para que el campesinado cuente, primero tiene que ser contado”.

Tras el fallo, el DANE cumplió la sentencia y comenzó a generar herramientas estadísticas con enfoque campesino como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para la población campesina 2021 o una serie de notas estadísticas sobre la propiedad rural en el país con distinción de género. Además, se incluyó la definición de la categoría ‘Campesino’ que hizo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Gracias a estos estudios sabemos, por ejemplo, que el 31,8 % de la población del campo se reconoce como campesina y que el 32 % de quienes dicen sentirse parte del campesinado colombiano considera que en el país sí se respetan sus derechos. Además, la Encuesta de Calidad de Vida permitió identificar carencias o brechas, como que la mayoría de los adultos de esta población que se encuentran entre los 41 y 65 años solo terminó la básica primaria.

Como lo evidencian los estudios, las necesidades que tiene el campesinado colombiano son bastantes, pero organizaciones como la ACIT se las han sabido arreglar con autogestión y trabajo comunitario para mejorar la calidad de vida de sus territorios. Por ejemplo, en Inzá existe un sistema de créditos entre campesinos para que emprendan en proyectos productivos, inspirado en el Banco Grameen (también conocido como el Banco de los pobres) del economista bengalí Muhammad Yunus, Premio Nobel de Paz en 2006.

Además, en el municipio se creó una asociación estudiantil para ayudar a jóvenes que quieran estudiar fuera de la región, la emisora comunitaria Radio Campesina 88.9 FM y la biblioteca pública La casa del Pueblo de Guanacas, reconocida como el mejor proyecto en la Bienal Colombiana de Arquitectura de 2004 y con el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega en 2017 en la categoría Mejor biblioteca pública.

Frente a los avances de lo ordenado por el fallo, Eliécer y Alix consideran que aún falta que esas estadísticas se incorporen a políticas públicas para mejorar el acceso a la tierra y la calidad de vida del campesinado. Es decir, que como ya fueron contados, ahora sí el país los reconozca y los tenga en cuenta como sujetos políticos y con derechos. Ya se han dado algunos pasos: en 2019, tras más de treinta días de movilización, las organizaciones campesinas del Cauca lograron incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el artículo 253, que ordena la construcción de la política pública campesina. Sin embargo, el Gobierno de Iván Duque no cumplió.

IVONNE ELENA DÍAZ GARCÍA

El espacio que descentraliza la paz desde los Montes de María



EL ESPACIO REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ DE LOS MONTES DE MARÍA POR MÁS DE DIEZ AÑOS HA LOGRADO TEJER LAZOS DE AFECTO Y CONFIANZA COMUNITARIA. A TRAVÉS DEL TRABAJO SOSTENIDO DE SUS REUNIONES MENSUALES Y DEL FESTIVAL DE LA RECONCILIACIÓN HAN POSICIONADO EL DIÁLOGO Y LA IDENTIDAD TERRITORIAL COMO CONDICIÓN DE POSIBILIDAD PARA LA PAZ, CONVIRTIÉNDOSE EN AGENTES DE ESPERANZA PARA TODA LA REGIÓN.

En las reuniones mensuales del Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, realizadas sagradamente el primer sábado de cada mes, se respira una sensación de frescura emanada del amanecer que nace entre las montañas. Al fondo se escuchan los pájaros y, de repente, llega ese olor a café con canela recién bajado de la leña. Al cabo de unos minutos veo llegar paulatinamente pequeños grupos de personas, otras llegan solas, pero todas prestas a saludar con un apretón de manos y una sonrisa cálida de complicidad, como de aquellos que se saben tener una historia en común.

Hilvanando un tejido de confianza y afectos

En la subregión de los Montes de María, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, han confluído diversos procesos de desmovilización guerrillera y paramilitar; la cooperación internacional ha inyectado millonarios recursos y el Estado, bajo la sombrilla de la justicia transicional, ha implementado múltiples políticas públicas. Intervenciones que, si bien promovieron espacios de fortalecimiento al movimiento social montemariano, no lograron reconstruir la confianza ni transformar las relaciones comunitarias que el conflicto dañó, pues trajeron una dinámica de participación vertical, anclada al centralismo, donde las propuestas y la identidad del territorio no fueron tenidas en cuenta.

En el año 2013, a partir de algunas reuniones entre liderazgos regionales, surgió la idea de iniciar un proceso que revirtiera esa desconfianza y contribuyera a la reconstrucción de relaciones comunitarias afectadas, para que unidas, organizaciones y comunidades, trabajaran en la construcción de la paz y la reconciliación territorial. Así nació el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María.

Ricardo Esquivia, uno de los líderes fundadores del Espacio Regional, con voz fuerte y reposada, cargada de esa sabiduría tranquilizadora que dan los años, me cuenta que el Espacio inicialmente se había pensado para un pequeño grupo de liderazgos territoriales, pero al poco tiempo notaron la necesidad de ampliarlo y hacer un llamado a todas las organizaciones y comunidades de la región, pues “queríamos solventar la falta de confianza que no permite que se coopere y trabaje juntos. Uno de los puntos clave es que haya un reencuentro entre los mismos, un espacio que genere confianza entre iguales, una red de afectos”.

Las más de cien organizaciones y comunidades montemarianas que conforman el Espacio Regional, tomando como referente la propuesta de paz de John Paul Lederach, de centrarse en la transformación de las relaciones humanas porque es en esa interrelación donde ocurre la imaginación moral para la construcción de la paz, han hilvanado un fino tejido de confianzas y afectos. Con dedicación, creatividad y constancia elaboraron las acciones que son el corazón de esta plataforma: las reuniones mensuales y el Festival de la Reconciliación.

En las reuniones mensuales, las comunidades analizan el contexto regional, deliberan sobre sus visiones del cuidado del medio ambiente, la tierra, la incidencia política, la reconciliación y la convivencia territorial. Pero más allá de una simple reunión “es el lugar donde nos damos la mano entre los procesos y damos aliento en que es posible avanzar”, me explica Ricardo. A este círculo de confianza se suman aliados: algunas ONG, la academia, organismos internacionales como Naciones Unidas e instituciones públicas como la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero lo que hace la diferencia es que muchas de esas personas han trabajado en el territorio, y a partir de esa confianza tejida con el Espacio Regional han logrado incidir

en las políticas públicas, consiguiendo en ocasiones esquivar el implacable centralismo.

Cuando se trata de organizar el Festival de la Reconciliación se forma un entusiasta debate colectivo. Algunas comunidades ofrecen su municipio y organizan comitivas prestas a recibir con muestras artísticas y culturales a los más de 500 invitados de esta fiesta por la paz.

En el Festival se desarrollan encuentros entre las comunidades, pero también se encuentran actores entre los que parece improbable que pueda existir un diálogo, como víctimas y excombatientes. Durante el festival de 2019, realizado en San Onofre, en medio de las presentaciones de gaitas y obras de teatro alusivas al conflicto armado, se realizó uno de los primeros encuentros entre víctimas de la región y excombatientes de las antiguas AUC y FARC-EP que habían operado en el territorio. Se sentaron en público a hablar sobre verdad y reconocimiento de responsabilidades con algunas víctimas.

José Moguea, líder sanonofrino e integrante del Espacio Regional, con su vista fijada en el horizonte del patio de su casa, ambientado por el cacareo de las gallinas, recuerda ese momento como un “encuentro que nos ayuda a resarcir daños causados, pues nos ayuda a reestablecer una relación resquebrajada y nos ayuda a superar el temor, el miedo y la desconfianza entre partes”. Pero también es crítico frente a estos encuentros, ya que algunos actores no parecen muy convincentes en responder quiénes dieron la orden y en ocasiones parece haber justificación de los excombatientes sobre las violaciones que cometieron. Frente a esa desconfianza y manteniendo los pies en la tierra, Ricardo Esquivia reflexiona: “cuando nos encontramos con gente diferente no sabemos el resultado, lo importante es la apertura al diálogo porque la palabra no regresa vacía”.

El conflicto armado como pedagogía para enseñar la paz

Aracelis Rodríguez, o ‘Profe Ara’, como la llaman en el Espacio Regional, enseña investigación, pedagogía y castellano en la Normal Superior de los Montes de María. Se hizo profesora normalista y magíster en Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena con enorme arraigo territorial por su dolorosa experiencia como desplazada del conflicto armado en esta subregión.

La profe Ara ha experimentado de primera mano la transformación de su entorno a partir del diálogo, la extensión del afecto y los cambios en el relacionamiento con los demás, promovido por el Espacio Regional. Ella señala, con una voz marcada por la cadencia del acento de los pueblos del Caribe, que la educación es política, humana y transformadora. Especialmente, el Festival de la Reconciliación “ha sido un canal que nos ha permitido sensibilizar a la comunidad que sí se puede negociar, se pueden hacer diálogos entre probables e improbables”. Pero la profe no se ha quedado sólo con lo que experimenta en cada festival, ella ha llevado a su escuela algunos testimonios de víctimas que lograron una invaluable transformación personal a partir del perdón. Emocionada relata: “en mi salón hay tantas víctimas y no lo sabía, cuando ellos escuchan las historias quieren hablar lo que vivieron. Hubo un salón donde hay primos víctimas y primos victimarios (...)”

En la Normal Superior de San Juan, la profe Ara ha logrado institucionalizar un programa de lectura crítica, cine y teatro, mediante el cual divulga a la comunidad educativa lo que padecieron las distintas escuelas Normal Superior durante el conflicto armado, pues sus maestros fueron estigmatizados por la pedagogía pacifista que

enseñaban. Por ello se conmemoran dos días donde recuerdan a dos rectores víctimas de desaparición forzada.

Por si fuera poco, la profe Ara con su proyecto Escuela Territorio fue escogida en un selecto grupo de profesores departamentales para viajar a Tokio, Japón, a una experiencia de inmersión para conocer el proceso de paz y reconciliación de ese país. De allá vino muy sobrecogida por la deconstrucción que han hecho del concepto amigo-enemigo y por la visita a un museo de maestros que se encuentra al alcance de muchos. Por eso, con una mezcla de crítica y añoranza, concluye: “los museos de la memoria no deben estar en Bogotá, deben estar en el territorio. Mira el caso de El Salado, deberían tener un museo vivo porque fue aquí donde se vivió el horror de la guerra”.

Descentralizar la paz

El panorama actual de los Montes de María es de inseguridad. Las comunidades, organizaciones y líderes sociales viven en una permanente zozobra. El Clan del Golfo cada vez profundiza más sus raíces violentas en el territorio y esto parece ocurrir a la vista del Estado, pues no existe una política de seguridad territorial que mitigue la situación.

Este es uno de los temas densos que dialogué con Angela Lederach en una videollamada, mientras hacía una pausa en medio de una extenuante mudanza en los Estados Unidos. Ella es PhD en Antropología y Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame, pero además conoce bien al Espacio Regional y al movimiento social montemariano, pues ha recorrido por más de 8 años los campos de esta subregión. Angie, como le dicen en el Espacio Regional, me cuenta que el Espacio ha trabajado una propuesta de seguridad colectiva que pone la lupa

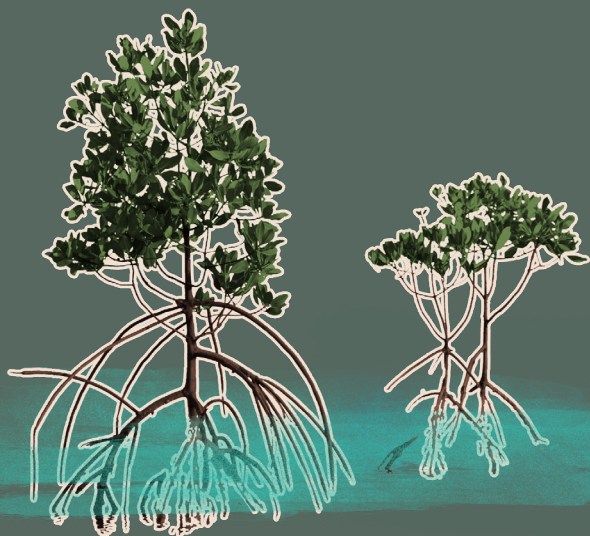
en la forma en que las comunidades sobrevivieron al conflicto, señalando que es allí donde están las semillas para reforzar la seguridad territorial.

A pesar de que el ciclo de violencia se rehúsa a cerrar, el Espacio Regional persiste en tender puentes de diálogo con el Estado, y allí Ricardo es enfático en plantear: “Hoy el Estado no cuenta con una estrategia concreta con pasos a seguir, están haciendo ensayos y eso no ayuda mucho. Sin embargo, hay que tener fe. Es clave que el gobierno se concrete y nos diga cómo trabajamos juntos desde Montes de María”.

Aunque el Estado no ha tenido en cuenta a las comunidades, el Espacio Regional continúa en su tarea de construir paz. Ricardo, con confianza en el trabajo realizado, concluye: “Hemos permanecido durante diez años reuniéndonos todos los sábados de cada mes, la asistencia siempre es nutrida. Por cinco años hemos mantenido el Festival de la Reconciliación, hemos abierto espacios para reen- cuentros entre iguales en desencuentro, entre diferentes y hemos generado esperanza”.

VIVIAN NEWMAN

El corazón de la isla



SIN ALCALDE NI POLICÍA, A PUNTA DE ALIANZAS, DEDICACIÓN Y PASIÓN, EL CONSEJO COMUNITARIO DE ORIKA CONSIGUIÓ UNA DIFICILÍSIMA PRIMERA TITULACIÓN COLECTIVA DE TIERRAS AFROCARIBES. HOY, UNA NUEVA GENERACIÓN SIGUE BUSCANDO SOLUCIONES PARA LOS LÍOS DE PREDIOS Y ZONAS DE BAJAMAR, MIENTRAS PROTEGE DEL CALENTAMIENTO Y DEL DESGASTE EL ECOSISTEMA DE ISLA GRANDE EN LAS ISLAS DEL ROSARIO.

Son puros pelaítos “atrevidos”, como les dijo una vez el personero, reconociendo su gran empuje a una corta edad. Cinco jóvenes de veintitantos años y un par que apenas superan la treintena componen la junta directiva del Consejo Comunitario de Orika (aunque el verdadero nombre es Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de las Islas del Rosario-Caserío de Orika). Fueron elegidos para representar a 300 familias. Se ríen, se burlan de sí mismos y bailan champeta. Pero cuando se trata de sacar adelante a la comunidad, se vuelven serios y no paran. Sin alcalde ni policía, a punta de alianzas, dedicación y pasión, Orika y su junta han conseguido un trascendental primer título colectivo de tierras del Caribe, agua corriente y paneles solares, y siguen buscando soluciones para los líos de predios y zonas de bajamar.

Eco-guardianes de la isla

A Isla Grande —parte del archipiélago Islas del Rosario, en el Caribe, donde se encuentra Orika—, se llega saliendo de Cartagena, por Pasacaballos y el Canal del Dique, hasta llegar al muelle de Barú. No al principal, sino al muelle Alberto Elías, que es más chiquito. Atraviesas en lancha un camino acuático rodeado de mangles bobos y después de quince minutos ya estás en la isla (que forma parte del enorme Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo). Precisamente, por ser parte de un parque natural, la protección ambiental del maritorio (para no separar lo inseparable: mar y territorio) es una de las tareas más valiosas de la comunidad de Orika. Además, lo hacen mejor que cualquier guardián estatal porque son muchos y están al pie del cañón. Han sembrado más de 4.000 plántulas de mangle rojo en solo seis meses, como alimento de los peces que viven en los corales. Hicieron un mapa interactivo en el que ordenaron la isla y ya tienen todo mapeado con más detalle que nadie.

Falta el plan de manejo ambiental que es muy costoso, pero que debe hacerse con quien administra el resto de la isla. Porque como el maritorio es compartido, lo que hagas de un lado afecta el otro y toca hacer las cosas en conjunto. Así, podrán controlar el turismo para que no lleguen cientos de personas con un vale de pasa-día sin respeto al mar, como le sucedió a Playa Blanca. No es fácil, pero lo logran: armonizan sus formas de vida con la protección del ambiente a través de un turismo de eco-hoteles nativos que disfruta del *snorkel* educativo y se beneficia de las guarderías de corales, un turismo donde la algarabía de los pájaros hace concierto con las champetas del radio en la distancia.

La historia antigua y la reciente

Al tiempo que se abolía la esclavitud en la Nueva Granada en 1851, cinco antiguos esclavos le compraron siete caballerías de tierras baruleras de mangle y con plagas a Manuel González Brieva. Pero no quisieron volverse dueños individuales de lo que equivale a unas tres mil hectáreas de hoy. Dejaron constancia de que la compra era colectiva para todas las familias. Y así ha sido a lo largo de más de ciento setenta años en este espacio donde la comunidad vive, siembra, pesca y baila.

Con el tiempo, la tierra y la comunidad han sufrido muchos embates. A la producción de coco de la que vivían le cayó la plaga que se conoce como porroca. Luego la pesca disminuyó por la dinamita y la extracción de peces muy pequeños, al tiempo que se deterioró el arrecife coralino debido al calentamiento, al agua contaminada del Canal del Dique y a las pozas sépticas de hoteles. Finalmente, y por pura necesidad, algunos miembros de la comunidad vendieron lo que no podían vender y se convirtieron en cuidanderos y cocineras de sus compradores.

Así fue como llegamos a la historia reciente en la que dos miembros de una generación previa lideraron la recuperación de lo que parecían estar perdiendo. Por un lado, Ever de la Rosa, antiguo representante del Consejo de Orika, promovió a principios de 2000 la limpieza del monte para crear un asentamiento que permitió el rescate no solo del territorio sino de la cultura que los une como grupo y que se encontraba adormilada sobre las escrituras que protegían la propiedad colectiva. Por otro lado, Lavinia Fiori, nativa adoptada por la comunidad, ha navegado en este asentamiento, empujando y apoyando la sostenibilidad y restauración ambiental a través de la maraña institucional. Ambos, con apoyo de Dejusticia y la Universidad de los Andes, impulsaron un tortuoso y trascendental proceso legal ante la Corte Constitucional que en 2012 reconoció, por primera vez en Colombia, la titulación colectiva de una comunidad afro en las islas del Caribe colombiano. Junto con el territorio que colectivamente les pertenecía desde la esclavitud, se protegió su cultura y el vínculo ancestral de estas familias que siempre tienen almuerzo para el que se aparece al mediodía. Lograron que la Ley 70 sobre títulos colectivos ancestrales no fuera un papel sino que se instalara en la isla. También lograron, dice Lavinia, que Parques no solo protegiera los arrecifes y manglares sino las prácticas ancestrales de las comunidades negras, como la pesca y el turismo. Lograron, en fin, ser dueños de sus tierras y de su destino. Frase que además de sonar bonito, se materializa por la cantidad de negocios que ahora son de los nativos y en los que trabajan como dueños, no como peones. Y así, van abriendo la puerta a otros consejos comunitarios afros del país.

La historia de hoy

Volvamos a nuestro grupo de jóvenes nativos champeteros que actúan como voceros de la comunidad. Sus contribuciones, al igual que sus

preocupaciones, se centran en la ampliación de la titulación colectiva y la organización del maritorio. Hay varias amenazas derivadas no sólo del calentamiento global, sino de la desidia de la institucionalidad, que cuando no hace proyectos turísticos y de arrendamiento de predios que afectan al vecindario, simplemente ignora a la isla. En consecuencia, este grupo ha tenido que jugar un rol de liderazgo para promover la convivencia y el ordenamiento del territorio. Convocan a los operadores turísticos y conocen a todo el que vive y arrienda en la isla. Son los mejores cuidadores de este bien común. Y no piden que las empresas de turismo que se encuentran en la zona sean retiradas, pero sí que la titulación colectiva sea una herramienta para evitar el desplazamiento forzado hacia Cartagena, la pérdida de su propiedad y de su identidad colectiva. Dayana Medrano, nacida en Caño Ratón de una madre que tuvo otros ocho hijos, asumió el reto vital de alejarse del embarazo temprano y el parto permanente que había visto en su casa, para postularse como representante del Consejo de Orika. Estudió derecho becada. Hizo una tutela que acompañó de un revuelo de periódicos, radio y redes sociales por dos meses, para lograr un puesto de salud que hoy brilla en Orika. Y ahora, con gran dosis de orgullo, embolsillada en un par de chores y una melena exuberante, me mira de frente y me dice que ama la isla y que hará todo por ella. Todos los logros son pocos al lado de los planes de esta comunidad.

¿Cómo estás, mi corazón?... interrumpe Dayana nuestra conversación para saludar a un joven que pasa... Yo respondo que el corazón de esta isla, gracias a la comunidad de Orika, ha dado un vuelco de 180 grados, y suena tan sano e indispensable como el pum pum en la champeta del palenquero Charles King.

ANDREA FORERO HERNÁNDEZ

Una apuesta feminista desde el Norte del Cauca



DESDE EL 2009, LA CORPORACIÓN ENSAYOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA HA LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE CAMBIAR EL MUNDO TIENE COMO HACERSE, Y NO SE HACE CON ACCIONES EXTRAORDINARIAS, SINO CON LA GRANDEZA QUE RESIDE EN QUE QUIENES HABITAN EL TERRITORIO, PUEDAN SENTIRSE BIEN, HABLAR EN VOZ ALTA Y HACERLO SIN MIEDO.

"A las ancestras creativas
que en la memoria llevo yo,
a las que perdieron su vida
por querer alzar su voz.
A las mujeres nos dicen que no podemos,
no podemos amar, no podemos estudiar,
no podemos gobernar,
mucho menos liderar, ¡eh!"

Este es el coro de una canción que todavía se escribe, y que suena al son de la charrasca, la tambora y la guitarra. A través de estos versos liberadores, diez mujeres se reúnen en Santander de Quilichao para reconocer lo que ha significado para ellas ser negras, indígenas, campesinas, mestizas, firmantes del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla de las FARC y personas LGBTIQ+. Para que la composición de esta letra fuera posible, las mujeres han tenido un espacio previo de conversación e intercambio. Allí compartieron los sentimientos, malestares y prejuicios que han enfrentado y que quisieran contar sin rodeos. Al hacerlo, encuentran más cosas en común que diferencias, también reciben contención y consuelo. Desde esa vivencia compartida y desde ese espacio de diálogo surge la escritura, donde la canción se convierte en un medio para inmortalizar el relato colectivo.

Este encuentro musical que crea cercanías, que se construye en medio de un espíritu dialógico y que les pertenece a todas, hace del canto una herramienta sanadora para martillar las paredes que han obstaculizado los pasos de estas mujeres. Y es un espacio de catarsis creativa que se ha impulsado desde la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política.

En 2020, Marcela Amador Ospina, antropóloga feminista, docente e investigadora y, en ese entonces, directora de Ensayos, decidió poner sobre la mesa su sueño de hacer música feminista. Un sueño que, aunque no se encontraba dentro de la experticia de la organización, sí hacía parte del objetivo que se han trazado como organización social desde su creación en 2009: trabajar por la construcción de una sociedad en la que mujeres, hombres y personas disidentes del sexo y el género puedan resignificar su territorio y sus vidas desde sus diversidades, con la plena garantía de que sus voces puedan ser escuchadas.

Resignificar el territorio para habitarlo en libertad tiene diversas formas de hacerse. Por medio de la investigación comunitaria, la incidencia, la formación política y la amplificación de la voz de las mujeres, Ensayos ha acompañado a otras organizaciones del Norte del Cauca en el proceso de visibilizar las violencias que se han posado sobre sus vidas y territorios y que deben ser puestas como objeto de cuidado comunitario. Para hacerlo, se ha convencido de la importancia de escuchar, narrar y debatir en voz alta, pues es solo a través del diálogo popular que se puede comenzar el camino para sanar y revertir el silenciamiento que impone la violencia y sus sistemas de opresión.

Esto es precisamente lo que hace I-Radia, la radio independiente hecha por mujeres del Norte del Cauca que visibiliza las historias, opiniones y análisis políticos de las mujeres y personas LGBTIQ+ de la región. Trabajando por la “democratización de la palabra”, I-Radia realiza programas radiales gracias al trabajo conjunto de personas que se toman los micrófonos para derrumbar el cliché de que la voz de la mujer en la radio solo puede escucharse en las franjas de entretenimiento. Por el contrario, I-Radia concibe una comunicación alternativa en donde las mujeres sean valoradas en su experiencia vital por medio del relato mismo de sus luchas organizativas. Tal y como es

relatado por Diana Figueroa, una de las integrantes de Ensayos, en la acción de hablar ante un micrófono, de escuchar la voz propia en alto, de ser escuchada por otras personas, reside un gran poder. Es gracias a esto que mujeres que en algún momento fueron acalladas, se animan a soltar su palabra, y a hacerlo sin miedo, lo que fortalece su confianza y liderazgo comunitario.

Pero la radio no es la única forma en que estas mujeres contribuyen al fortalecimiento de los liderazgos. Angélica Chantre, es una de las mujeres que participó en el diplomado de economías feministas propuesto por Ensayos y la Universidad Javeriana. Allí se entregaron herramientas para fomentar la autonomía económica de las mujeres y población LGBTIQ+ del Norte del Cauca. Para ella, “dejar de depender económicamente de terceros, rompe los ciclos de violencias, desigualdades y discriminaciones”. Además de formarse, Angélica encontró en el espacio de intercambio creado por el diplomado, un lugar de cuidado que le permitía hablar sobre su proyecto de vida y escuchar los de sus compañeras. Conversar y hacer evidentes los esfuerzos comunitarios que han hecho estas mujeres para consolidar la autosostenibilidad de sus organizaciones y comunidades es, en sí mismo, un modo de alcanzar el sueño de una sociedad de mujeres autónomas e independientes. Y es un sueño que continúa materializándose con Ensayos, pues al finalizar el diplomado, diez de estas mujeres viajarán al País Vasco, llenándose de valentía para relatar sus proyectos económico-productivos desde una perspectiva de feminismos territoriales, interétnicos e interculturales.

De acuerdo con Ana Mile Bermúdez, quien pertenece a la Asociación de Mujeres del Norte del Cauca (ASOM) y ha participado en los procesos de formación impulsados por Ensayos, “uno de los méritos de la Corporación es que ha logrado cohesionar a las organizaciones de

la región que también somos feministas”. A partir de la construcción de redes de mujeres que cuestionan las asimetrías económicas y de poder, sus integrantes han sido enfáticos en la importancia de hablar sobre las violencias que producen las desigualdades, en crear espacios de apoyo y otorgarle un carácter de responsabilidad comunitaria a las injusticias que suceden en el territorio. Este cuidado comunitario se hace particularmente relevante en el suroccidente del país. Entre enclaves de cultivos de coca y marihuana, minería ilegal y disputas por la tierra, la guerra ha dejado marcas imborrables en el territorio y las personas que lo habitan. Las estructuras armadas de grupos al margen de la ley han encontrado en el departamento una zona estratégica para el mantenimiento de sus luchas armadas. En medio de la guerra, Ensayos se erige como una organización que no solamente acompaña procesos de mujeres con cantos liberadores, sino que también lleva más de trece años aportando a la construcción de paz en el territorio. Esto lo hace por medio de procesos de formación política, investigación comunitaria e incidencia política para que las personas conozcan sus derechos y puedan organizarse para exigir cambios y transformar sus vidas.

Sus caminos son diversos. Es una lucha que, como cuenta su actual directora, Clara Ávila, una mujer indígena nasa, resalta la importancia de que la organización sea un espacio de aprendizaje que posibilite la “capacidad de decir y decidir”, de “poner la palabra”, de “permitirse vivir”, de acompañarnos entre mujeres para que lleguemos a lugares “donde no podemos llegar solas”. Las integrantes de Ensayos crean en su día a día nuevas formas de imaginar la libertad. Trabajando por hacer realidad sus sueños, nos demuestran que, contrario a lo que dice la canción, las mujeres y personas diversas sí pueden llegar a espacios políticos y comunitarios en los que históricamente han encontrado cerrada la puerta de entrada. Basta con el poder popular y feminista para abrir la puerta y entrar al cuarto a sentar la palabra.

MARIANA ESCOBAR ROLDÁN

La lucha de las mujeres afro del norte del Cauca se cuenta en canciones



EL CANTO Y LA MÚSICA SON ALGUNOS DE LOS TANTOS VEHÍCULOS CON LOS QUE ASOM, UNA ORGANIZACIÓN QUE EXISTE DESDE 1997, BUSCA PREVENIR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y DOTAR DE HABILIDADES Y AUTONOMÍA A UN GRUPO DE 230 ASOCIADAS.

Si Eunice y Nancy Vergara pudieran contar su historia en canciones, lo harían. Afinarían las guitarras, marcarían el ritmo con las palmas y entonarían, la primera como contralto y la segunda como soprano, que ser mujer en Buenos Aires, Cauca, es un acto de supervivencia.

El repertorio incluiría sus días de niñas trabajadoras, cuando Eunice llevaba a cuestas a su pequeña hermana Nancy para cortar paja y venderla en pueblos cercanos. “Dos arrobas por 20 centavos para poder comer algo”, recuerdan. O cuando su papá, Azahel, iba a matar a su mamá, Leopoldina, y ambas se colgaron de la escopeta y le imploraron que no lo hiciera, o se lanzaban al río. Cantarían que cuando los adultos se ausentaban para trabajar selva adentro, ellas apagaban el fogón y se subían calladitas a un zarzo “por si pasaban los cazadores violadores”, y que cuando eran un poco mayores, los jóvenes y los señores las invitaban a “mingar”, como se referían a tener relaciones sexuales, a cambio de darles granos de café para vender por unos pesos.

Pero las hermanas Vergara aún no componen estos cantos. El talento que heredaron de Azahel, violinista indígena, y de Leopoldina, cantaora negra, lo han entregado al servicio colectivo. Ambas hacen parte de ASOM, Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, una organización donde la música está en el centro del quehacer: es la forma, es el tono y es el color con el que las mujeres prefieren contar sus dolores, sus anhelos, sus formas de resistir y hasta su historia:

“En la balsa el veinte de abril,
del año noventa y siete,
doscientas veinte mujeres,
nos reunimos sin machete;

desde Honduras a la Alsacia,
todas puntual acudimos,
dejando nuestras parcelas
y nuestras mentes unimos”.

Así comienza el himno de ASOM, con un fragmento que describe la génesis de esta organización. En Buenos Aires, la violencia de género se vivía en la cotidianidad de muchas formas y sin que nadie lo reprochara. Nancy se refiere por ejemplo a las dificultades que tenían las mujeres para tener autonomía económica, pues a muchos esposos les incomodaba que ellas trabajaran para conseguir recursos que garantizaran, por ejemplo, una mejor alimentación para sus hijas e hijos o la posibilidad de comenzar un negocio o un proyecto productivo. En ese contexto, llegó al corregimiento de Honduras, donde todavía hoy viven las hermanas Vergara, una lideresa fuerte llamada Clemencia Carabalí, que preocupada por este y otros derechos de las mujeres, estaba buscando a las futuras integrantes de ASOM.

Nancy, una de las primeras en sumarse, recuerda que comenzaron elaborando colchones de paja, con cuya venta buscaban mejorar la calidad de vida de sus familias y asegurar su independencia económica. En el intermedio, Clemencia y algunos aliados que se fueron uniendo al proceso impartían capacitaciones que les dieron a las integrantes de ASOM las primeras nociones sobre derechos humanos, equidad, participación y protección de los recursos naturales de sus territorios. Estas ideas calaron muy rápido en las mujeres, al punto en que en pocos meses Nancy se convirtió en la primera dinamizadora de la organización: iba de región en región replicando lo que aprendía y animando a otras mujeres a unirse a la organización.

Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, las veredas y corregimientos de Buenos Aires pasaron de ser pueblos pacíficos, de gente que cultivaba alimentos y trabajaba la minería ancestral de batea, a ser territorios disputados por actores armados. La confluencia de grupos guerrilleros, paramilitares y de fuerzas del Estado puso en alto riesgo a la población civil y dejó miles de víctimas de homicidio, secuestro, desplazamiento, amenazas, desaparición, tortura y otros vejámenes: 23.666, según el Registro Único.

El recuerdo de esa parte de la historia también se hizo canción:

“Las mujeres afrodescendientes de Buenos Aires y
nuestras comunidades,
fuimos desplazadas, forzadamente, desde el 86, hasta el día de hoy.
Nos insultaban, nos humillaban,
con el acoso sexual por nuestro color de piel (...)

Se perdieron las cosechas, se murieron los animales,
las mujeres aguantando hambre, por esta situación.
¡Ay, Dios Mío! Qué dolor al ver la desolación,
cuando las mujeres del campo partieron para la ciudad
a trabajar en casas de familia para sus hijos levantar”.

El conflicto armado por poco sepultó a ASOM. En Honduras, por ejemplo, las mujeres de la organización tuvieron que cerrar una tienda de abarrotes que habían construido en colectivo. En La Balsa, un corregimiento de Buenos Aires donde está la sede de ASOM, las mujeres tenían que encontrarse en pequeños grupos y a espaldas

de los grupos armados que merodeaban la zona, pues las reuniones habían quedado prohibidas. De hecho, fue tanta la zozobra, que Clemencia Carabalí tomó la decisión de no continuar con el trabajo de la organización. Lo que no esperaba era que las compañeras a las que movilizó e inspiró lo impedirían. “Nosotras nos paramos y dijimos ¡no!, tenemos que seguir, aquí estamos juntas, y juntas nos levantamos. Ya no le podemos hacer más caso al miedo”, recuerda Nancy.

Y entonces, pese a las intimidaciones y obstáculos que ponía la violencia, la historia de este colectivo continuó con más fuerza. ASOM ya no solo movía a sus agremiadas, sino a las hijas de ellas, a las hijas de sus hijas y a mujeres en otros municipios del norte del Cauca y de la costa pacífica de ese departamento. Mónica Solís, hija de Nancy y sobrina de Eunice, fue una de ellas. De niña, compartía tareas del hogar con su mamá para que ella pudiera ir a las reuniones de la organización, participaba en la elaboración de los colchones de paja que comercializaban y apoyaba con intervenciones artísticas en las asambleas. Pero el liderazgo se afinó cuando ingresó a una escuela de formación para mujeres en temas políticos, técnicos y socioeconómicos. Al ver su vocación, la misma Clemencia la convocó a ella y a otras jóvenes para que se unieran de forma oficial a ASOM.

“Y todo esto ha significado mucho, siento que he crecido mucho. En cualquier espacio uno ya puede dar un debate sobre temas étnicos, y muchas personas se acercan a preguntar cosas de violencias basadas en género para que uno pueda darles pistas sobre una ruta”, cuenta Mónica, cuyos dos hijos hacen parte de la tercera generación de integrantes de ASOM como músicos de ritmos tradicionales y dinamizadores de las plataformas juveniles de la organización.

El relevo generacional de los liderazgos es una de las prioridades de este colectivo, que con 230 asociadas y 10 grupos de trabajo en el Cauca, se mantiene firme en su propósito de mejorar las condiciones de vida de mujeres afrocolombianas para que ellas mismas protejan y defiendan sus derechos, los de sus compañeras y los de los territorios que habitan. Lo hacen con procesos de aprendizaje, emprendimientos, proyectos productivos, comunicación alternativa y mucha música. Es a través de los cantos, de las tamboras, la guitarra, el violín y la marimba que a las mujeres de ASOM se les ha hecho más fácil “hablar, limpiar, zafar dolores, buscar esperanza”, dice con orgullo Mónica. No en vano, en 2022 crearon un cancionero sobre paz y reconciliación, y con las voces de Eunice, Nancy y Mónica, y la interpretación instrumental de sus hijos y nietos, le cantaron su versión del conflicto armado a la Comisión de la Verdad:

“Sí, sí busquemos la paz hermanas.

Sí, sí busquemos la paz hermanas.

Tenemos derecho a ser negras

y a vivir en libertad

Sí, sí, a vivir en libertad.

Por eso es que yo le pido a toda la juventud,

no olvidarse de la paz

y la verdad vamo'a contar”.

Fragmento de la canción “Busquemos la paz”.

PALOMA COBO

DANIEL OSPINA CELIS

La resistencia del pueblo negro de la costa pacífica del Cauca



ENTRE LOS RÍOS Y LAS SELVAS DEL PACÍFICO CAUCANO, LA FUERZA DE LA IDENTIDAD NEGRA ACOMPAÑA A LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE GUAPI, TIMBIQUÍ Y LÓPEZ DE MICAY. SU LUCHA POR ALCANZAR UNA VIDA DIGNA Y CONSTRUIR HERRAMIENTAS DE DESARROLLO LOCAL SE NUTRE DE LAS ENSEÑANZAS DE SUS ANTEPASADOS. COCOCAUCA PROMUEVE LA REINVIDICACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO NEGRO, FORTALECIENDO A CONSEJOS COMUNITARIOS Y OTRAS COMUNIDADES NEGRAS DEL PACÍFICO.

Quedamos de vernos temprano en el embarcadero. Altos postes de madera resaltan sobre la superficie del agua, donde descansan cientos de lanchas destartadas. El muelle se llena de vida mientras esperamos. Alguien vacía un bidón de gasolina, mientras otro descarga un bulto y los demás esperan. Tienen la mirada fija en el agua, sin apuro aparente. En Guapi, como en otras ciudades de la costa pacífica, se aprende a navegar desde niño. No hay carreteras que conecten las veredas. Para hacer el mercado, las personas de la zona rural deben embarcarse en una lancha o en una canoa angosta que llaman potrillo. Tampoco hay carreteras que conecten el municipio con el resto del país. Para salir es preciso ir en lancha a Buenaventura o en avión hasta Cali. El río da vida y permite el encuentro con los otros.

La gallada de Cococauca, como ellos mismos se llaman, nos recogió finalmente. Entre risas, nos explicaron el retraso; algo sobre un pistón o un torno faltante en uno de los motores de la lancha. Navegamos río arriba más de dos horas. El trayecto suele ser más corto, pero el rebelde motor todavía se negaba a cooperar. Alguien ofrecía cada tanto un viche curao, un destilado de caña que se produce en la región desde hace siglos y que sirve para alegrar el día y las fiestas, para dar la bienvenida a la casa; también para curar los males y acompañar los rezos.

En las orillas se veía una vegetación incansable y abundante, de selva no intervenida. En algún momento, Caíto señaló entre las plantas unos pedazos de madera clavados en el suelo. Eran pilotes de casas, nos dijo, que habían sido abandonados en la época dura de la violencia paramilitar. Antes, todo esto estaba poblado. Llegamos por fin a un lugar donde se erigía una decena de casas en palafitos. Atracamos frente a la de Berenice, la recién nombrada representante legal del Consejo Comunitario de esa zona y bajamos a saludar. Eso vinimos a hacer: saludar.

Nos lo explicó, después, Orlando Pantoja, el palenquero mayor de la Coordinación de Consejos Comunitarios de la Costa Pacífica del Cauca-Cococauca. La organización agrupa a ocho consejos comunitarios y nueve organizaciones de base de Guapi, Timbiquí y López de Micay. Estas visitas sirven para recordarles a sus miembros que cuentan con el apoyo de Cococauca y que la lucha por la reafirmación étnica del pueblo negro de la costa pacífica es colectiva. Es lo que llevan haciendo desde que tienen memoria: compartir un almuerzo, charlar, reírse, confirmar que están juntos en esto.

Todo empezó hace cerca de cuarenta años. En las décadas de los ochenta, algunos jóvenes de Guapi se empezaron a preguntar si por ser negros estaban condenados a la pobreza y a ser víctimas de la violencia. “No entendíamos por qué nuestra vida era así. No entendíamos si nuestra condición social y económica era algo natural. Queríamos entender”. Así, cuenta Dionisio, empezó la rebeldía.

Querían estudiar en la universidad, pero la mayoría no pudo. Habían nacido en Guapi, esa ciudad fundada por esclavos que habían trabajado en los reales de minas, donde no había universidades. Sus familias, muchas de ellas campesinas, no tenían cómo enviarlos a otra parte. Eran negros en un país racista. El que sí pudo, contra todo pronóstico, fue Orlando. Su hazaña fue un referente para los jóvenes de Guapi, que se empezaron a juntar para promover la vida digna en la región. Crearon una primera asociación de jóvenes por el agro. Mientras tanto, desde la sede de la Universidad Nacional en Palmira, Orlando escribía largas cartas “tirando línea”. También recogía textos que llevaba en las vacaciones o enviaba por correo. Antes de nacer, Cococauca ya era una escuela política. Fue en 1991, cuando en el país se hablaba de la nueva Constitución, que apareció la misión de lo que después sería Cococauca. Los mismos jóvenes que se habían empezado

a reunir algunos años antes fueron los encargados de movilizar a la población de la costa pacífica del Cauca e influir para que se incluyeran las demandas de la población negra en la Constitución. Gracias al trabajo en red con otras organizaciones lograron lo impensable: incluir en la Constitución un artículo que obligara al Congreso a expedir una ley para reconocer a las comunidades negras de la Cuenca del Pacífico. Dos años después, el Congreso expidió la Ley 70 de 1993.

La ley permite a las comunidades negras titular las tierras que habitan como propiedad colectiva, para lo cual deben crear su propio Consejo Comunitario (un órgano que dirija y administre los asuntos de cada comunidad). Cococauca nació como respuesta directa a la Ley 70; se pensó como una organización dedicada a acompañar la titulación colectiva y la creación de consejos comunitarios en los municipios de la costa pacífica del Cauca: Guapi, Timbiquí y López de Micay. Después vendría el acompañamiento a la creación de sus planes de etnodesarrollo. Para eso, tuvieron que enseñar de política y leyes. Pero aprender nunca fue tan importante como recordar. En sus ancestros esclavizados estaba ya la valentía y la lucha por la libertad y la autonomía, en la cultura negra latinoamericana estaban las formas de organización propias (como los consejos, los convites y la propiedad comunitaria). Las canciones, los rezos y los poemas hablaban de cómo vivir bien con otros y con la tierra. Al terminar el almuerzo —pargo y plátano fritos en aceite hirviendo sobre la leña, arroz con coco— Berenice contó que tenía algunas dificultades en el Consejo Comunitario. Orlando rememoró la historia de Tío Tigre y Tío Conejo, un cuento infantil de la tradición afropacífica. Allí se hablaba ya, nos dijo, de la esclavitud, de los falsos aliados, de aquellos que ponen en riesgo la libertad del pueblo negro. La respuesta al problema de Berenice estaba en el cuento que le contaba su abuela de niña.

Hoy en día, Cococauca es una organización que a través de la formación, las comunicaciones y el diálogo incide en la reivindicación de la identidad negra y en la defensa de los derechos étnicos y territoriales de la población afrocaucana. Ese objetivo toma muchas formas: procesos de formación, denuncias en redes sociales, encuentros de sabios. La gallada, ahora, tiene a los maestros del proceso Constituyente, como Dionisio y Orlando, y a los jóvenes entusiastas y comprometidos que decidieron quedarse y trabajar por Guapi, como Felipe, Silvio, Caíto y Freddy.

En las calles y en los ríos los conocen y los saludan. Dan ganas de quedarse con ellos, de hacer parte de esa pandilla cómplice y alegre que está siempre a punto de armar una fiesta. Eso, que parece poco, esconde quizás la clave de uno de sus grandes logros: evitar que jóvenes de la región vayan a las filas de los actores armados. Desde que nació, Cococauca se ha propuesto mostrar que en el Pacífico caucano hay otra opción: la resistencia pacífica. Ese camino exigente requiere de toda la valentía, la sabiduría y la dignidad altiva que tuvieron sus ancestros y que tienen, ahora, cada uno de los miembros de la Coordinación Regional.

ADRIANA ABRAMOVITS

Un laboratorio narrativo para sanar



SEGURAMENTE HAS NOTADO QUE LA MANERA EN LA QUE TE CUENTAN UNA HISTORIA INFLUYE EN LA FORMA EN LA QUE PERCIBES EL PROBLEMA, ESTABLECES HÉROES Y APARECEN ANTAGONISTAS. LA FORMA DE NARRAR AFECTA EL CONTENIDO DE LO QUE SE ESTÁ CONTANDO. LA TERAPIA AL SERVICIO DE LA EXPRESIÓN, POR MEDIO DE CARTAS Y PRODUCTOS AUDIOVISUALES, ESTÁ CURANDO LAS HERIDAS DE LA INFANCIA EN LOS BARRIOS DE CARTAGENA.

En las faldas del cerro de La Popa ser niño es difícil. Los barrios Pablo VI, Los Comuneros y La María, con sus callejones estrechos y casas apiñadas, albergan cientos de historias de niños y niñas que se exponen a diario a situaciones de violencia, abuso y abandono. Niños que desde muy pequeños, a las orillas del caño Juan Angola (el cuerpo de agua más contaminado de Cartagena) deben aprender a convivir con la sensación de inseguridad dentro y fuera de sus hogares. Según Medicina Legal, en 2022, 417 niñas fueron víctimas de presuntos delitos sexuales en la ciudad de Cartagena.

Con pocos parques y canchas, la infancia se desarrolla en medio de la rivalidad entre pandillas, el tráfico de drogas, la llegada de personas desplazadas por el conflicto armado y la migración entre países vecinos. Pero entre las tensiones territoriales, existe una puerta que abre a un lugar seguro. Donde hay libros, micrófonos, cámaras y libretos. Hay pinturas, disfraces, proyectores y teatrinos. Detrás de esa puerta, la expresión creativa hace de las suyas para que los niños y las niñas puedan recuperar el juego que siempre les ha pertenecido.

Esa puerta también lleva al consultorio donde se sientan Yenifer y Tatiana Patrón, dos hermanas afrocartageneras y psicólogas de Narrarte. Esta organización utiliza la narrativa para sanar las heridas del maltrato en la comunidad. Este tipo de terapia se popularizó en 1990 y se dice que es una herencia de la posmodernidad, ya que explora las diferentes maneras de explicar una misma cosa para generar relatos alternativos donde el problema pierde protagonismo en favor de otras narraciones posibles.

Esta manera de externalizar las vivencias permite que el problema en sí mismo no defina la identidad de la persona. Se parte de que la niña o el niño es el máximo experto en sus vivencias, ya que tiene acceso

directo a sus experiencias. Junto a la terapeuta, trabajan en equipo para empezar a tejer la narración: dónde ocurrieron los acontecimientos, en qué lapso de tiempo, quiénes son los actores, cuál es el problema, qué habilidades se tienen para superar el obstáculo y qué caminos se pueden tomar. Lo que le permite al paciente encontrar diversas salidas a las situaciones que le angustian, echando mano de sus talentos.

Yenifer Patrón es la directora de Narrarte y la terapeuta que acompaña este viaje del héroe. Diez años atrás empezó a prestar sus servicios de manera gratuita a los niños y las niñas del cerro de La Popa. “En el campo de la salud hay unos imaginarios de que la terapia no se necesita, de que eso se resuelve solito o que es una cosa pa’ ricos. En los colegios públicos, hay un psicólogo para más de mil estudiantes”, expresa Patrón.

Bajo esa premisa, las infancias crecen sin enfrentar los problemas, en ocasiones sintiendo que ellas mismas los causaron, afectando profundamente el bienestar y la autoestima. Por eso la misión de Narrarte es tan básica como poderosa: ayudar a vivir la niñez con alegría.

Vivir la niñez con alegría

Lo que permite que el dolor se convierta en poesía pasa por las manos de Carlos Díaz Acevedo, un hombre afrocartagenero, lingüista, comunicador para el desarrollo y escritor audiovisual. Carlos creció en la zona nororiental de Cartagena y fue un joven que participaba en procesos organizativos. En Funsarep, organización aliada de Narrarte, forjó su liderazgo comunitario. Carlos echa mano de sus habilidades en gestión cultural y se involucra en los relatos, proponiendo formatos como la radio y el video para encontrar el mejor ritmo al momento de contar la historia.

Este laboratorio narrativo que une lo psicológico con lo comunicativo se convierte en un escenario de ayuda, con unos profesionales que acompañan y unos grupos de apoyo que sostienen. Estos grupos están conformados por otros niños y niñas que están viviendo situaciones similares. Es así como todos se vuelven un equipo contra esos problemas, se alían para responder ante “los villanos” y encuentran en el juego la manera de transformar los finales.

Ese mundo que mezcla la realidad y la fantasía, empezó en 2013 con un club de lectura infantil en el barrio Los Comuneros. Se daban cita los sábados en la mañana. “Lo que no cabe en mi mundo” fue el primer libro que leyeron. Con esa lectura, los niños empezaron a contar lo que vivían en la casa, la violencia comunitaria y el *bullying*. Identificaban los problemas como monstruos, confiaban en que para atacarlos había que conocerlos. Respondieron: cómo se llaman, qué los alimenta, dónde viven, quiénes son sus amigos. Y los personificaron, los volvieron sátira, teatro, títere y pantomima. Ese fue el inicio de Narrarte.

Las historias que surgieron después mantuvieron ese enfoque sistémico de reconocer las tensiones en el entorno social y familiar, e involucraron a los padres, acompañantes y cuidadores. Eso dio pie a que se creara la campaña: “Por una Cartagena a un metro diez. Una ciudad a la altura de los niños, las niñas y nuestros derechos”. Esta iniciativa reunió todas esas denuncias y peticiones de los niños para llevarlas a las instituciones educativas, medios de comunicación y espacios políticos. En las elecciones a concejales y ediles, Narrarte, junto a otras organizaciones de la Mesa Local de infancia Cartagena Mía, presentó su pliego de solicitudes y los niños y las niñas también se comprometieron a estar a la altura del cuidado de La Popa, que les da oxígeno, les da sombra y los reconoce como actores ciudadanos.

Así que pedir espacios de juego en el barrio Santa Rita o un sistema de alcantarillado decente en Ponzuelo, solo podía acompañarse con el compromiso a doble vía de cuidar el barrio y seguir construyendo comunidad.

Otro de los proyectos insignia de Narrarte es el corto audiovisual “En regla”, producido por el Colectivo Alas, conformado por mujeres jóvenes entre los 16 y los 29 años que hacen parte de Narrarte. En el video humorístico de diez minutos hablan públicamente sobre uno de los grandes temas tabú: la menstruación. Para Johana Herrera, líder del Colectivo Alas, si algo espantoso como los feminicidios han sido naturalizados, hablar sobre algo realmente natural, como la menstruación, no debería ser un problema. La puesta en escena simula un juzgado, con un público escandalizado, que señala la menstruación como un delito.

Narrarte aparece como un rescate, como un cambio de narrativa que acerca al juego y aleja la imposición del mundo adulto. Crean un mundo propio que es muy divertido, lleno de risa, donde incluso los grandes maestros se comportan como niños. En medio de una crisis global de salud mental, que tiene como principal víctima a personas jóvenes, la terapia narrativa se vuelve una herramienta para liberar a la gente de culpa, para encontrar puntos comunes en las vivencias individuales, para abrirle espacio a la escritura y las artes como lenguaje universal. Para contarnos diferente y ser capaces de encontrar caminos alternativos. Y aplicar, como dice Carlos, “la comunicación para ser felices. Y la narración para que la gente no muera”.

NATALIA ESCOBAR

Uma Kiwe-Madre Tierra: una apuesta narrativa por el cuidado del agua y la vida en Mocoa



EN EL PIEDEMONTE AMAZÓNICO COLOMBIANO, TRES MUJERES SE HAN UNIDO EN TORNO A UN SUEÑO: RESISTIR AL DESTINO EXTRACTIVISTA QUE HA CONTRIBUIDO A LA DESTRUCCIÓN DE LA SELVA, LOS RÍOS Y SUS COMUNIDADES USANDO LA COMUNICACIÓN COMO FORMA DE DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE SU TERRITORIO.

Para llegar a Mocoa, salí desde Bogotá al aeropuerto Tres de Mayo en Puerto Asís. Estoy lista para un recorrido por carretera de dos horas. Es temprano, pero ya empieza a sentirse esa humedad abrasante que me dice que la selva está cerca. Como lo imaginé, a tan solo pocas calles del casco urbano, me encuentro con el verde del bosque y el bullicio de los pájaros en las copas de los árboles. Más adelante, donde la cordillera central se rinde para dar paso a la planicie amazónica, la lluvia de la noche anterior nos regala un espectáculo de cascadas que caen entre las montañas.

Sin embargo, el Putumayo no es sólo bosque y cantos. Un corredor interminable de oleoductos, campamentos militares y la enorme base antinarcóticos que comparte el aeropuerto con el municipio de Villagarzón, son otros de los elementos que componen este paisaje selvático. Un retrato de las relaciones históricas que el centro político y económico del país ha establecido con estos territorios.

Incluso hoy, cuando la región amazónica se presenta como “potencia mundial de la vida”, la llegada a Mocoa me confronta con una enorme construcción que convierte los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco en autopistas de cemento. Esto hace parte de la ejecución del llamado “Plan de Acción por la reconstrucción de Mocoa”, una megaobra de infraestructura que adelanta el gobierno nacional tras la avalancha de 2017 que cobró la vida de más de 335 personas y dejó otros 17.000 damnificados. Esta intervención reemplazó los árboles por jarillones, y cemento como estrategia de mitigación del riesgo de una nueva creciente y un posible desbordamiento de estos afluentes. Seis años después de la tragedia, la Procuraduría ha denunciado retrasos en el cumplimiento de las obras y el 31 de marzo de 2023 se realizó una audiencia pública citada por el Congreso de la República para solicitar explicaciones frente a estas problemáticas.

Llegamos sobre las nueve de la mañana a Mocoa, una ciudad abrazada por montañas y ríos. En un café del parque principal nos encontramos con Olga Yaneth Trujillo, Zulma Yulieth Ulcué, y Paola Jinneth Silva, fundadoras de Uma Kiwe-Madre Tierra. Corporación que se constituye formalmente en el año 2020 con el sueño de transformar a través de iniciativas comunicativas, la forma como nos relacionamos con la vida, la naturaleza y los cuerpos violentados por los intereses extractivistas.

Ellas hacen un esfuerzo por traducir conceptos técnicos y jurídicos sobre temas que preocupan en su territorio a un lenguaje más cotidiano, con el fin de alimentar el debate público con cuestionamientos de los que poco se habla. Por ejemplo: ¿Qué significa vivir en la Amazonía?, ¿qué efectos tienen estas intervenciones sobre los ecosistemas de los ríos y las otras formas ancestrales de habitar el territorio?, ¿cómo informar sobre las desarmonías del territorio uniendo los conocimientos técnicos y ancestrales?, ¿qué alternativas de gestión comunitaria distintas al cemento podrían desarrollarse para mitigar el riesgo?

Ninguna de ellas es experta en ingeniería hidráulica o ecología. Olga y Paola son comunicadoras sociales/periodistas y Zulma licenciada en etnoeducación, antropóloga y psicóloga. Sin embargo, guiadas por la convicción de que intervenciones como estas no son armónicas con las necesidades de la naturaleza y los pobladores, hicieron lo que han aprendido a lo largo de su experiencia: tocar puertas y preguntar a diferentes voces. Hicieron círculos de la palabra entre jóvenes y colectivos ambientales que también estaban preocupados por esta situación. Conversaron con académicos, sabedores indígenas y profesionales de diferentes áreas para responder algunas de sus dudas e indagar sobre alternativas para abordar la problemática.

Los materiales de estas conversaciones las difunden mediante sus redes sociales, grupos de WhatsApp y talleres comunitarios con las y los pobladores del municipio con el propósito es ofrecer insumos que fortalezcan su participación en el debate público y veeduría ciudadana en este y otros proyectos.

La juntaza y la palabra como forma de sanación

Reconociendo la interculturalidad como principio, Uma Kiwe-Madre Tierra encuentra en el diálogo abierto y la juntanza de mujeres indígenas, campesinas y urbanas, un camino para avanzar en su propósito de reparar la fragmentación del tejido social y espiritual que las narrativas y políticas extractivistas han traído a este territorio. Para ello, la corporación crea a “La Minga Kiwe”, una apuesta periodística en donde, haciendo “mingas”, registran la memoria que habitantes tienen del territorio, y visibilizan las tensiones sociales y ambientales que los proyectos minero-energéticos y de infraestructura imponen sobre el municipio.

En el idioma nasa yuwe, uma kiwe significa madre tierra, que es a su vez, el segundo nombre de la organización. Esta cosmovisión llegó a través de Zulma, quien hace parte de este pueblo y dio a conocer el pensamiento indígena a sus compañeras, irradiando en ellas un reconocimiento del saber ancestral y espiritual como base de su actuación.

Zulma es de Putumayo, Olga nació en el Huila y Paola en Cundinamarca. Todas provienen del campo, y a pesar de haber estudiado en ciudades principales, la búsqueda por recuperar esa conexión más directa con la naturaleza y el trabajo que realizaban con otras organizaciones sociales alrededor de los derechos de la amazonía las lleva a encontrarse en Mocoa. Este sentimiento común las junta a través de Uma Kiwe

para caminar sus ríos, escuchar sus historias y conocer su medicina ancestral. En sus propias palabras, esto les permitió “reconectar con el territorio y sentir su poder de sanación”. Desde ese encuentro, las tres decidieron que Mocoa sería su hogar y la defensa de este territorio una forma de devolver a la Madre Tierra los recursos y protección que provee desde sus entrañas.

Como resultado de este esfuerzo, durante estos tres años la Corporación ha publicado varios especiales en redes: Uno de ellos es “Pasos de Mujer”, en el que recuperaron relatos de mujeres indígenas y su relación con la Madre Tierra; “Memorias del agua”, por otro lado, es un trabajo que pone la mirada en los cambios y afectaciones que han sufrido los ríos y paisaje andinoamazónico de Mocoa, como consecuencia de la extracción ilegal de oro y la ejecución de intervenciones estatales como las obras de mitigación; y “Hablemos de las Montañas”, proyecto mediante el cual se ha visibilizado el conflicto entre la empresa minera Libero Cobre y las comunidades de Mocoa por los intereses en la explotación de cobre al interior del municipio.

La Apuesta

Su sueño es poder aportar a la construcción colectiva de otras narrativas del territorio putumayense que subviertan el imaginario extractivista que ha contribuido a la destrucción de la selva, los ríos y sus comunidades. Quieren resignificar el habitar andinoamazónico en la memoria de sus pobladores y de todos aquellos que se aproximen a este territorio. Como dice Olga: “queremos contarle al mundo y no que el mundo cuente de nosotras”.

De regreso a Bogotá muchas imágenes y reflexiones me acompañan. Pienso en la naturaleza exuberante y la contradicción que subsisten en

esta parte de la amazonía. Pero también, en la fortaleza y convicción de estas tres mujeres que, siendo una organización joven y de pocos recursos, han decidido cuestionar a gigantes empresariales y despertar conciencia frente a la manera como los centros urbanos de poder se relacionan con la naturaleza y este territorio. Me contagian de esperanza y me recuerdan que, como Uma Kiwe, son muchas las semillas que a lo largo del país están brotando entre el cemento y abriéndose paso para construir nuevas formas de vivir.

PAULA ANDREA VALENCIA CORTÉS

La lucha de ACIMVIP: Sacha Muiiu y la protección del Territorio



EN VILLAGARZÓN, CONOCIDO COMO EL CORAZÓN DE PUTUMAYO POR SU RICA BIODIVERSIDAD, PERMANECEN LA ESPERANZA Y METAS DEL PUEBLO INGA. SUS SABERES SE VEN REFLEJADOS EN LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS INGAS DE VILLAGARZÓN ACIMVIP, QUIENES HAN LOGRADO LA PROTECCIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL Y LA CREACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SUS CONDICIONES DE VIDA.

Dentro de la majestuosa selva amazónica se encuentra Villagarzón, un municipio del piedemonte, ubicado en Putumayo. A primera vista, me llaman la atención las gigantescas montañas y el clima húmedo, donde confluyen indígenas, campesinos, algunos funcionarios públicos de las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, y personas con uniformes de grandes empresas extractivas. Todos con la misma cordialidad, pero con cosmovisiones muy diferentes.

A unas cuantas cuadras del centro urbano se encuentra la Asociación de Cabildos Indígenas Ingas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), que tiene como objetivo proteger y mejorar las condiciones del pueblo inga de este municipio. La ACIMVIP también trabaja por la defensa del territorio y el fortalecimiento cultural y económico de 11 comunidades indígenas que agrupan a 766 familias ingas: más de 2.500 personas.

La Asociación, liderada por Carlos López desde hace más de ocho años, cuenta con once gobernadores que trabajan de la mano con Ginny Alba –la coordinadora de Derechos Humanos–, Luis Jansasoy– el mayor encargado del gobierno propio–, el Taita Vicente Jacanamijoy –el guía espiritual–, y otros que, a pesar de no estar presentes, dieron su vida por este propósito, como Robinson López, quien murió de Covid mientras lideraba diferentes proyectos para fortalecer a la organización.

Con el fin de apoyar algunas tareas de la ACIMVIP para su participación en el caso sobre violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ginny, el mayor Luis e integrantes de la Guardia Indígena me llevaron a ver los resultados de su arduo trabajo. Con ellos salimos del centro de Villagarzón para acercarnos cada vez más a la selva.

Al inicio es fácil dejarse deslumbrar por el contraste de colores: el celeste del cielo despejado y con pocas nubes, y el verde profundo de la selva. Tras un rato de camino, se puede notar que los árboles empiezan a perder fuerza, como si su verde, impactante a la distancia, fuera una víctima más de la guerra. De cerca, las hojas se ven quemadas, de un color blanco y una textura carrasposa. El mayor Luis, quien conoce a la perfección su territorio, me explicó que ese debilitamiento de los enormes árboles se debe a la aspersión con el herbicida glifosato, usado en Colombia para frenar la expansión de cultivos declarados ilícitos.

Entre los árboles debilitados por el glifosato, aparecen cultivos abandonados, llenos de maleza. Son cosechas que se están dañando. Con una risa irónica, el mayor cuenta: “Muchas ONGs, junto al gobierno, vienen a ofrecernos ideas de lo que llaman emprendimientos. Entonces, nos convencen de usar nuestros territorios para sembrar nuevas especies, como cacao. Pero estos supuestos negocios no funcionan, pues nadie compra el producto”.

Después de este recorrido largo y poco alentador, el clima empieza a cambiar: el aire se hace ligero, el paisaje reverdece y las hojas ya no parecen maltratadas. Llegamos a la Vereda Alto Alguacil, donde está el Tambo, un lugar sagrado para el pueblo inga donde realizan las ceremonias de yagé. Con satisfacción y orgullo, el mayor Luis cuenta que este es uno de los territorios que la ACIMVIP ha logrado proteger. A pesar de que parece enorme, Luis hace énfasis en que solo es un pedazo de las 32 mil hectáreas que han logrado salvaguardar.

Poder disfrutar de este territorio es una pequeña muestra del trabajo de la ACIMVIP en esta región. Se sienten orgullosos, pues la lucha no ha sido fácil. Este territorio lo han tenido que proteger de los grupos armados ilegales y de las ONGs que intentan convencerlos de adelantar

otras actividades que no son adecuadas para el suelo amazónico. A pesar de los logros frente a la protección del territorio, aún persisten las preocupaciones más vitales: de qué vivir y con qué comer. Al final, proteger los territorios no da dinero para subsistir.

En todo caso, con sus propias manos han construido soluciones que nunca llegaron ni del Estado, ni de la academia, ni de las ONGs. Este es el caso de Sacha Muiu, una planta de procesamiento de alimentos creada por la ACIMVIP para el aprovechamiento sostenible de especies amazónicas. Allí transforman la materia prima que abunda en la zona en un producto para la comercialización. Parece un sueño, y lo es. Sacha Muiu busca procesar el moriche, también conocido como canangucha, un fruto amazónico derivado de una palma. El aceite se usa para restaurar la piel y para protegerse del sol, así como para hacer mermeladas e incluso jabones y otros productos. Actualmente, la planta tiene la capacidad de producir 500 litros de aceite de moriche al año para fines cosméticos.

Para ello, los ingas empiezan recolectando y seleccionando los frutos maduros de la palma de canangucha y luego la llevan a Sacha Muiu, donde se repite el proceso de selección por peso y calidad. Posteriormente, se procede al despulpado del fruto, es decir, se separan la semilla, la cáscara y la pulpa para así continuar con la deshidratación. Luego se coloca la pulpa al sol, y una vez esté seca, se pasa por una prensa con una tela muy delgada que logra separar las grasas saturadas. Después de este proceso, se separa el aceite extra virgen y las grasas que se usan en la industria cosmética.

Por si fuera poco, Sacha Muiu cuenta con los permisos legales para la operación y comercialización, un plan de manejo forestal y cultural que permite la reforestación de los sitios sagrados de los

morichales, un camión con capacidad de ocho toneladas, dos equipos para la transformación de la pulpa y una página web para promocionar sus productos.

No ha sido un proceso fácil. En tres ocasiones, se han presentado a Visión Amazonía, un programa del Gobierno Nacional que financia propuestas de las comunidades indígenas y campesinas del país. De este programa lograron recibir una primera inversión con lo que han logrado todos estos avances. Sin embargo, aún necesitan recibir capacitaciones para poder acceder al mercado internacional y dinero para seguir fortaleciendo la producción. No es una tarea sencilla, pero poco a poco van logrando sus metas.

La ACIMVIP es una organización sólida, que deriva su fuerza del propósito que la orienta: mejorar las condiciones de vida del pueblo Inga de Villagarzón. Han logrado consolidarse organizacionalmente y han puesto en marcha ideas con un gran potencial de éxito que combinan el respeto y la protección del territorio amazónico. Además, la Asociación ha logrado revivir la esperanza, los sueños y metas del pueblo inga en Villagarzón. Sacha Muiu, más que una planta de procesamiento, es el sueño de un pueblo de no depender nunca más de un Estado que poco los ha tenido en cuenta y alcanzar así el buen vivir. Los niños ven con emoción las nuevas máquinas de procesamiento, las madres y abuelas cuentan cómo van a recoger el moriche para llevarlos a la Sacha Muiu, los padres y taitas no dejan de hablar de cómo llegar a las grandes ciudades para la comercialización. Los once resguardos que representa la Asociación no paran de celebrar el proyecto productivo que sin duda será un éxito. La ACIMVIP ha logrado proteger el territorio y darle forma a los sueños de una comunidad entera.

PAULO ILICH BACCA
DAYANNA PALMAR URIANA

El pueblo kankuamo como muralla de la Sierra Nevada



EL PUEBLO KANKUAMO DE LA SIERRA NEVADA DE GONAWINDÚA ES UNO DE LOS GUARDIANES DEL CONOCIMIENTO ANTIGUO QUE PRESERVA EL EQUILIBRIO Y EL SISTEMA DE VIDA QUE SE GUARDA EN LO ALTO DE LA MONTAÑA. PARA CUMPLIR CON SU MISIÓN DE VIDA, LOS KANKUAMOS HAN RESISTIDO A LA COLONIZACIÓN Y AL CONFLICTO, RENACIENDO EN SU GOBIERNO PROPIO COMO LO PENSARON LOS MAMOS Y LAS SAGAS. “LOS ANCESTROS NOS ENSEÑARON A CUIDAR Y VIVIR EN HERMANDAD Y COLECTIVIDAD”, ES LA ENSEÑANZA QUE DEJA EL GOBERNADOR JAIME LUIS ARIAS.

En lo profundo de la imponente Sierra Nevada de Gonawindúa se resguarda un saber ancestral que ha perdurado a través de los milenios. Los custodios de este conocimiento son los koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos, cuatro pueblos que velan por preservar un sistema de vida único que se encuentra en las alturas de estas montañas. En reconocimiento a su invaluable legado, en 2022, la Unesco reconoció a su Sistema de Conocimiento Ancestral como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El pueblo kankuamo, que es el primer guardián de esta geografía ritual, habita al pie de la montaña y es conocido como kakatukua que en lengua propia significa “El hombre fuerte de la Sierra Nevada”. A lo largo de la historia han demostrado merecer este título con creces.

Jaime Enrique Arias, gobernador del pueblo kankuamo por más de 25 años, explica: “Nuestros padres creadores nos dejaron una misión, que fue cuidar los elementos que fundamentan la vida y le dan permanencia. Esos son los elementos del territorio que se encuentran en la tierra: las plantas, los animales, el agua, el aire, el fuego, nosotros”.

Sin lugar a dudas, esta misión no ha sido sencilla, considerando los desafíos que han enfrentado a lo largo del tiempo. Han sobrevivido tanto a la guerra física, que los arrebató de su tierra ancestral y los obligó a desplazarse forzosamente, como a la guerra identitaria, en la que perdieron su lengua y vieron diezmados sus conocimientos propios. Ambos hechos fueron reconocidos oficialmente por la Corte Constitucional, que en su Auto 004 de 2009, los incluyó dentro de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural.

Justicia propia y derechos bioculturales

De acuerdo con la cosmología de los cuatro pueblos, la Línea Negra o Seshizha es el lugar asignado para la protección, cuidado y conservación del mundo. Es la representación terrenal del cosmos que está delimitada por un perímetro circunferencial y se encuentra atada por hilos invisibles que se interconectan entre sí y se dirigen hacia el centro de la Sierra de Gonawindúa.

Seshizha es la jurisdicción de los cuatro pueblos y se compone por puntos geográficos que contribuyen a la armonía del orden territorial interconectando lo físico con lo espiritual. Internamente es el territorio de los ancestros o de los llamados hermanos mayores y externamente es el espacio que acoge a todos los aprendices o hermanos menores.

En la Ley de Origen Kankuama, el conjunto de principios que ordenan el mundo de la naturaleza y la cultura, debe existir una gestión adecuada del territorio. Para esta labor, y por mandato ancestral, sus autoridades tienen la responsabilidad de asegurar que las acciones humanas que desestabilizan el equilibrio social sean contrarrestadas mediante pagamentos en los sitios sagrados de Seshizha. Se trata de una economía ritual de ofrendas a las madres y padres del mundo para potenciar la justicia entre los humanos, los no-humanos y los espíritus.

Así, cuando no se mantiene activa la interconexión entre los puntos sagrados de este espacio, el corazón del mundo queda desprotegido. Esta situación no solo representa una grave afrenta a las prácticas culturales de los kankuamos sino también una violación a sus derechos fundamentales. La noción ancestral del territorio kankuamo

es social y ecológicamente compleja, pues en la conexión cotidiana que sus comunidades establecen con las dimensiones humanas y no-humanas de su hábitat, están en juego realidades que producen visiones particulares del mundo. De este modo, Seshizha es más que el espacio territorial compartido por los cuatro pueblos: es el ámbito ecológico, espiritual y social que engloba su cosmología. Allí se define la relación con el mundo material e inmaterial y con quienes habitan más allá de sus coordenadas.

“En esta pluriculturalidad que hay, el gobierno debe entender que tenemos que participar bajo nuestros usos y direccionamiento tradicional, que es diferente pero no choca con lo que está afuera”, dice el Mayor Isaac Gutiérrez, Coordinador de Justicia del pueblo kankuamo, y quien ha liderado la formulación del protocolo de coordinación interjurisdiccional con el apoyo de Dejusticia. En la búsqueda del pueblo kankuamo por fortalecer su identidad y gobierno propio se está tejiendo tanto la justicia propia como el relacionamiento con entidades del Estado, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y Bienestar Familiar. Es una apuesta que se presenta como un referente para otros pueblos indígenas que buscan fortalecer su derecho y el diálogo intercultural.

Un gobierno intercultural pensado en unidad kankuama

Los mamos (abuelo/sol) y las sagas (abuela/luna) de la Sierra Nevada pensaron en el renacer del pueblo kankuamo y lo procuraron, porque para ellos “la Sierra Nevada es como una mesa con cuatro patas, y le faltaba una”. De estos pensamientos y esfuerzos nació el primer Congreso Kankuamo en 1993 que tuvo como objetivos el fortalecimiento de la cultura y la consolidación territorial para la preservación de la montaña sagrada. Este objetivo se vio cumplido

en 2003 con la constitución del Resguardo Kankuamo con un área aproximada de 25 mil hectáreas. En 2018, después de haber mantenido un diálogo fluido con el gobierno de Juan Manuel Santos, los cuatro pueblos lograron la expedición del Decreto 1500 que redefinió el territorio ancestral de la Sierra Nevada, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme a los principios de la Ley de Origen.

“Hay un ejercicio muy importante que hemos planteado y es poder gobernar en unidad, como un principio que fundamenta el deber ser de los pueblos indígenas”, cuenta como clave de su gobierno Jaime Luis Arias, actual gobernador del pueblo kankuamo.

Este ejercicio no es individual, insiste, sino que involucra a las familias, comunidades y estructuras de gobierno de los pueblos que habitan la Sierra Nevada. “De alguna forma la imposición cultural y el colonialismo, nos ha llevado al individualismo y ver las cosas diferentes a lo que nos han enseñado los ancestros, que es cuidar y vivir en hermandad y colectividad”.

Hoy el gobierno kankuamo es intercultural y tiene como fundamento tanto su ley de origen como las normas de derechos humanos que reconocen la autodeterminación de los pueblos indígenas. En este contexto, los mamos, las sagas y el consejo de mayores enseñan que el orden espiritual fundamenta su derecho propio, que, a su vez, fortalece a sus instancias políticas representadas por el gobernador y los cabildos de las quince comunidades que conforman el resguardo.

Las mujeres también son parte del gobierno a través de la Comisión de Mujeres y Familias Kankuamas. Entre sus labores se encuentra el

fortalecimiento de los componentes político, económico y jurídico; y al mismo tiempo, de asistencia psicosocial y de fortalecimiento del componente artístico, como el tejido, que les genera ingresos a las mujeres.

Luego de estar al borde del exterminio físico y cultural, el pueblo kankuamo ahora cuenta con una población de treinta y cinco mil personas autoreconocidas como kankuamas y con la pervivencia de su misión de vida más fuerte que nunca: ser la muralla que debe preservar el territorio de la Sierra Nevada de Gonawindúa.

“Hay que ser como el sol”, solía decir, Luis Fernando Arias, líder kankuamo y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, “hay que brillar para todos”.

Y es para todos, hermanos mayores y menores, que brillan los esfuerzos del gobierno kankuamo en favor de la vida del planeta y el corazón del mundo.

SANTIAGO ARDILA

Providencia: isla chica, Caribe grande



POR DÉCADAS, LA VEEDURÍA CÍVICA DE OLD PROVIDENCE HA TRABAJADO PARA PROTEGER DEL DESPOJO AL PUEBLO RAIZAL DE LAS ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. A TRAVÉS DE SU LABOR BUSCAN RESGUARDAR EL IDIOMA CREOLE Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES TRADICIONALES, LA MÉDULA DEL VÍNCULO ISLEÑO CON SU TERRITORIO.

Desde 2019 Providencia no celebraba un carnaval. Por eso, la penúltima semana de junio de 2023 la isla se entregó a una suerte de expectativa colectiva que por fin estalló el 22 de ese mes. “Carnaval” es solo una forma de referirse al Festival Folclórico Cultural y Deportivo Old Providence y Santa Catalina, la conmemoración oficial de la anexión de la isla a Colombia. Debido a la pandemia y al huracán Iota, los raizales llevaban años sin poder organizar esta fiesta.

Aunque no hay registros de ningún tipo, la historia oficial cuenta que el 23 de junio de 1822 la isla se adhirió a la Constitución de Cúcuta. Es por esa falta de documentación que Josefina Huffington, presidenta del Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence, insiste en que no hay nada que celebrar en dicho carnaval, pues la anexión de la isla a Colombia solo ha traído incontables problemas.

El 22 de junio de 2023 una caravana de carrozas le dio la vuelta a la isla. Las representantes de cada sector iban acompañadas por jóvenes en motos que se pavoneaban por tener los vehículos más veloces y ruidosos.

Josefina es enfermera de profesión, pero una incisiva abogada de vocación: se sabe de memoria los artículos de la Constitución que protegen al pueblo raizal y siempre lleva a la conversación los procedimientos judiciales que por más de cuarenta años ha adelantado la Veeduría. Desde 1980, el movimiento que ella representa se ha enfrentado a innumerables intentos de despojo que diversas élites económicas y políticas han intentado ejercer sobre la isla, un paraíso terrenal ideal para los grandes proyectos turísticos.

Sobre esto han consistido la mayoría de luchas de la Veeduría, de evitar que a través de maromas burocráticas se apropien de la isla

para hacer proyectos turísticos. Entre tantos litigios y pugnas, que evidencian la insistencia de las personas que quieren aprovecharse de la isla, Josefina recuerda que durante los años de la Constitución de 1991, la Veeduría impidió la construcción de diecisiete megaproyectos hoteleros, algo que parece un chiste de pésimo gusto cuando se habla de una isla de 17 kilómetros cuadrados. Desde que el padre Martín Taylor la fundó en 1980, la Veeduría ha tenido que enfrentar a los grandes poderes políticos y económicos, muchas veces representados en grandes cadenas hoteleras, políticos de alto nivel y, hasta no hace mucho, a la Armada Nacional. A pesar de que los logros han sido inmensos, las derrotas también han sido dolorosas.

Providencia está lejos, muy lejos, de Colombia continental. Es el territorio habitado más septentrional del país, lo cual permite que sus aguas territoriales compartan fronteras con el resto del Caribe: Jamaica, Haití, República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Con este último el conflicto ha sido grande, pues el país centroamericano consideró hasta hace poco a las islas como parte de su territorio; de ahí el fallo del Tribunal Internacional de La Haya de 2011 que obligó a Colombia a entregarle 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial.

El fallo significó una ruptura aún mayor de la identidad raizal, resquebrajada por la pugna entre dos países que se disputan el territorio. Josefina recuerda que el pueblo isleño no solo se asienta en San Andrés y Providencia, también hay raizales en Bluefields y en las Corn Islands, que están en suelo nicaragüense, pero cuya población habla el mismo tipo de creole: una mezcla de lenguas de África occidental, inglés y español. La decisión del Tribunal de La Haya no significó una mayor pérdida para Colombia, considera Josefina, si se le compara con el daño que se le hizo a la población raizal, que depende de la pesca

en esas aguas. Incluso sabe que este escenario favorece al despojo que ciertas élites colombianas llevan intentando ejercer desde mediados del siglo XX, pues alimenta el discurso colonial, de propiedad colombiana sobre las islas. Josefina repite como un mantra, «a [las élites de] Colombia no les interesa la gente raizal, solo el territorio».

Después del huracán... ¿viene la calma?

Ya han pasado casi tres años desde que el huracán Iota arrasó con las islas de Providencia y Santa Catalina. Aunque no se había visto algo de tal magnitud en tiempos recientes, el pueblo raizal siempre ha lidiado con estas tormentas. A pesar de que el inmenso arrecife de coral que compone la reserva de la biósfera del Seaflower hace que las olas del mar lleguen con una calma perezosa a sus costas, lo cierto es que Providencia está en una ruta usual de huracanes: antes de Iota pasaron Beta, en 2005; Joan, en 1988, y Hattie, en 1961. Así, una incontable suma de ciclones anotados desde hace tiempo. Por saber convivir con la fuerza del mar por siglos, los habitantes de la isla se salvaron el 19 de noviembre de 2020.

Providencia es una isla en donde hay pocas precipitaciones, así que antes del huracán cada casa contaba con una enorme cisterna para guardar agua lluvia que usaban mientras pasaba el verano. Al momento de un huracán, esas cisternas se podían desaguar y las personas podían usarlas como *bunkers*. Eso, sumado a que muchas casas contaban con zonas seguras, usualmente los baños, hizo que solo tres personas fallecieran en la noche de Iota. No obstante, cuando la reconstrucción inició en cabeza del Gobierno colombiano, las cisternas remanentes fueron destruidas y reemplazadas por tanques plásticos de 2.000 litros, insuficientes para guardar agua durante todo un verano e inservibles a la hora de resguardarse de futuras tormentas.

Lo irónico de esta situación es que el Gobierno no consultó a la comunidad a la hora de construir las casas, un derecho constitucional que tienen por ser minoría étnica, y apenas les preguntó a algunas personas en mesas informales para desconocer de todos modos las peticiones de la población. Ahora varias casas prefabricadas se están pudriendo y muchas otras no cuentan con la estructura necesaria para soportar siquiera tormentas leves. Por ello, con la asesoría del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y Dejusticia, la Veeduría interpuso una tutela que llegó a la Corte Constitucional. A través de la sentencia T-333, la Corte ordenó al Estado reparar los daños en los que había incurrido y, de manera novedosa, que la isla fuera reconstruida de tal forma que sus habitantes puedan adaptarse gradualmente al cambio climático.

Para Jade Lunazzi, quien hace parte del equipo jurídico de la Veeduría, esta sentencia marcó un hito en la jurisprudencia nacional y su implementación podría sentar un precedente en cómo el Estado puede proteger a las minorías étnicas del cambio climático. Resalta que «en Colombia nunca había existido una sentencia sobre huracanes» y que las directrices que da la Corte tienen en cuenta los cambios crecientes en el clima y la necesidad de que las poblaciones se adapten.

Desde la isla de Santa Catalina se puede observar todo el centro de Providencia ya reconstruido. En la foto se vislumbra el Puente de los enamorados, que conecta ambas islas.

Caribe insular, Caribe grande

A pesar de las prevenciones que el carnaval pudiese generar en algunas personas, es verdad que su objetivo consiste en resaltar la cultura raizal. Las carrozas, la comida, la música, la danza, todo es

una oportunidad para revivir la identidad étnica raizal. Por ello, Zully y Jennifer Archbold, quienes hacen parte de la Junta Directiva de la Veeduría, sugirieron visitar a algunas personas para entender el alcance del compromiso de esta organización.

En Santa Catalina vive Elvina Webster y está reconstruyendo su restaurante “Big Mamma”, en honor a una salsa secreta que prepara desde hace años. Para ella, el carnaval significa trabajar más de quince horas al día: en su puesto vende albóndigas de caracol y pescado, piezas de pollo y cerdo fritos, papas rellenas y un sinnúmero de delicias locales. Cangrejo no había, porque es tiempo de veda y los isleños saben que deben proteger el equilibrio con la naturaleza. Hace poco estuvo en Trinidad y Tobago aprendiendo de resiliencia climática y se sorprendió al ver la increíble semejanza que tenían con un pueblo a miles de kilómetros de distancia, de otra isla del Caribe.

Muy cerca de ahí, en el sector de Santa Isabel, vive un carpintero retirado. Adolf Henry se jubiló hace años, pero al ver que los ingenieros y arquitectos de la reconstrucción no tenían en cuenta la arquitectura y necesidades raizales, decidió retomar su oficio. Él mismo escogió la madera que llegaba al puerto y recicló muchas tablas buenas para rehacer su hogar. Ahora, satisfecho, siente que la casa podrá durar treinta años sin necesidad de reparaciones. El tiempo libre lo dedica a preparar sus *cotton boats* y su *cat boat* —embarcaciones artesanales para realizar competencias deportivas— para las siguientes carreras. Son divertimentos raizales que invitan a la juventud a gozar en el mar. Frente a su casa, de madera pintada con colores pastel, está la tarima del carnaval.

La música resuena sobre el terreno que alguna vez ocupó el Hotel Aury, una joya arquitectónica destruida por el huracán y desechada como

basura por los agentes de la reconstrucción. Al final, eso era lo que Zully y Jennifer querían mostrar, que la Veeduría busca proteger la cultura ancestral y las prácticas tradicionales, una identidad en riesgo gracias al ejercicio colonial del Estado colombiano. Pero, también, que el pueblo raizal tiene un punto a favor, solo ellos saben cómo habitar la isla y protegerla de la depredación, mantener la armonía con todo el archipiélago y con el resto del Caribe insular. El trabajo de la Veeduría solo tiene sentido si la cultura raizal pervive; su lucha consiste en que las futuras generaciones conserven y repliquen los conocimientos autóctonos de personas como Miss Elvina y Mister Adolf.

DANIEL OSPINA CELIS

Buenaventura: soñar es resistir



BUENAVENTURA PARECE UN LUGAR VIOLENTO, UNA CIUDAD ENTRE LA GUERRA Y LA DESESPERANZA, UN PUERTO SIN COMUNIDAD. ES, SIN EMBARGO, EL EPICENTRO DE MÚLTIPLES LUCHAS Y RESISTENCIAS, DONDE VIVEN COMUNIDADES QUE A DIARIO LE HACEN FRENTE A LA POBREZA Y A SU PASADO. LA PASTORAL SOCIAL, UNA RAMA DE LA IGLESIA CATÓLICA, LE APUESTA A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD QUE SE ATREVA A SOÑAR CON UNA BUENAVENTURA DISTINTA.

La noche anterior había llovido. Esa tarde, el calor y la humedad invitaban a dormir. Había muy poca brisa y el abrasante bochorno sumía a todos en su apacible somnolencia. Lentamente, la tranquilidad se apoderó del grupo. En Buenaventura también hay momentos y lugares de paz. Este es uno de ellos: la sede del Secretariado Diocesano de Pastoral Social. Con un poco de retraso, empezó la ceremonia que esperábamos hace rato.

En una de las paredes del salón cuelga una imagen del obispo Gerardo Valencia Cano, precursor de la teología de la liberación. En la otra, el aire acondicionado emite un ruido monótono que promete refrescar el ambiente. Nos reunimos para celebrar la graduación de la primera cohorte del Diplomado en Atención Psicosocial organizado por la Corporación Vínculos y la Universidad del Pacífico, con el apoyo de Dejusticia. Durante algunos meses, los miembros de la Pastoral Social aprendieron herramientas para acompañar a víctimas en sus procesos de comprensión, aceptación y resignificación. Entre muchos otros temas, pudieron discutir sobre cómo navegar el afrontamiento, qué es importante a la hora de escuchar, por qué es importante comprender las violencias y cómo fortalecer los procesos de reconstrucción de memoria.

Un espacio de formación como este solo podría darse en la Pastoral Social de Buenaventura, una organización que lleva más de veinte años sembrando esperanza en las comunidades de una de las ciudades más violentas del país. El acompañamiento a las víctimas del conflicto y a la población desplazada ha sido solo una de sus banderas. Su agenda más amplia es la de construir una sociedad en la que a ninguna persona se le vulneren sus derechos humanos. Es una apuesta que nace precisamente en una de las ciudades más desiguales del país.

En 1999, la Pastoral Social surgió como un brazo de la Iglesia católica dedicado a ayudar a quien más lo necesite. Luego de un hecho violento o traumático, los primeros en hacer presencia en la comunidad eran los miembros de la Pastoral. Hablaban con los sobrevivientes, acompañaban a las víctimas, apoyaban a las familias y buscaban fórmulas para sanar. En ocasiones, la Pastoral se ha vestido de Estado para darle a las personas afectadas aquello que necesitan: un techo, un colchón, un mercado. En otras, la Pastoral ha mantenido su ropaje eclesial y ha brindado una mano amiga dispuesta a escuchar, a asesorar y a mediar entre quienes lo piden. Su naturaleza dual, que es solo aparente pues no es un organismo estatal, le ha granjeado el reconocimiento de los habitantes de Buenaventura. Todos saben que a quien primero se debe acudir es a la Pastoral.

Luego de años de trasegar la senda de la paz y del acompañamiento a quienes sufren la guerra, la Pastoral le apostó también a la transformación social. Inició proyectos destinados a promover la vida digna y en armonía. En últimas, se propuso devolverles a las comunidades de Buenaventura la oportunidad de soñar.

En un contexto aplastante, en el que la pobreza y la violencia abundan, es fácil caer en la desesperanza. Muy rápidamente, la Pastoral Social identificó que debía luchar contra el abatimiento. Si no, las personas corrían el riesgo de acostumbrarse al dolor, al sufrimiento, al hambre y a la guerra. Soñar es resistir. La posibilidad de construir o acceder a un mejor futuro es muchas veces lo que alienta las luchas y los sacrificios del presente.

No existen fórmulas mágicas o recetas definidas para sembrar esperanza. Al embarcarse en el difícil camino de ofrecer un mejor futuro, la Pastoral terminó haciendo de todo un poco. No ha

perdido el rumbo, en todo caso. Su foco siguen siendo las víctimas. Actualmente, coordina 22 comedores comunitarios y entrega más de 4.000 almuerzos diarios, capacita a 250 jóvenes para que mejoren sus herramientas de resiliencia y acompaña a 100 mujeres víctimas de desaparición forzada en sus procesos de resignificación. También coordina un grupo de teatro por la paz y recientemente inauguró un centro de escucha para que mujeres víctimas reciban atención psicosocial.

Aunque su equipo no es numeroso, la Pastoral Social está en todo. Mientras unos atienden víctimas, otros consiguen colchones para los desplazados, otros participan en las discusiones de política pública y otros fortalecen la identidad afropacífica en el territorio. Por eso, la graduación fue especial. El grupo de personas que se graduó era especial. En vez de solo recibir los diplomas, compartieron una mandala de frutas, cantaron e intercambiaron mensajes de agradecimiento. Al inicio, para disipar la modorra, bailaron al ritmo de una canción infantil. Al final, se despidieron con la certeza de que todos los asistentes al diplomado seguirán trabajando por una Buenaventura libre de violencia, pobreza y desesperanza.

MARCELA MADRID VERGARA

Montes de María, una despensa de historias



EN ESTA SUBREGIÓN DEL CARIBE, UN GRUPO DE COMUNICACIÓN RURAL ACOMPAÑA CON CÁMARAS Y MICRÓFONOS LAS MARCHAS, LOS PLANTONES Y LAS DENUNCIAS DE SUS COMUNIDADES. TAMBIÉN SE DEDICAN A CONTAR LAS HISTORIAS COTIDIANAS DE LA RESISTENCIA CAMPESINA, INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE, ESAS QUE SE VIVEN EN LA PARCELA Y EN EL HOGAR.

Están ahí, con cámaras al hombro y micrófonos en mano, para contarle al mundo cada vez que sus comunidades marchan exigiendo salud, educación o vías. Con la misma energía aparecen cuando se pila el arroz, se prepara el mote de queso y las mujeres se trenzan el pelo. Todas son escenas de la resistencia campesina, indígena y afro que el Equipo de Comunicación Rural de los Montes de María se ha dedicado a contar desde que se cansaron de ser contados por otros.

Fue hace más o menos diez años. Las organizaciones campesinas y étnicas de esta zona, agrupadas en una plataforma llamada OPDS, se dieron cuenta de que necesitaban posicionar su agenda de desarrollo rural entre las comunidades y mostrarle al país sus esfuerzos para lograr “una permanencia digna en el territorio”, como reza su lema. Así, estaban convencidos, estas luchas tendrían más fuerza colectiva y más eco para llamar la atención del Estado. Aunque algunas de sus denuncias eran escuchadas por los medios de comunicación, la sensación que quedaba era casi siempre de decepción: los cubrimientos terminaban tergiversando sus reclamos.

La única alternativa era contarse a sí mismos. Una decena de líderes y lideresas rurales de todas las edades se apuntaron al reto. Seguirían defendiendo causas como la protección de las semillas, la reparación a las víctimas o el acceso al agua, pero además se dedicarían a contar las historias de esas luchas. Se descubrieron comunicadores en el camino, a punta de ensayo y error. Combinaron su formación política con los talleres de comunicación que les ofreció la Corporación Desarrollo Solidario, una ONG que acompaña los procesos rurales en esta región desde los años noventa.

Su primera campaña fue una serie de cortos documentales llamada Cultivar alimentos es cosechar paz. En ella cuentan las historias

de varias comunidades campesinas, indígenas y afro que siguen produciendo comida en sus parcelas a pesar de verse asfixiados por los proyectos agroindustriales (de palma, piña y teca) que acaparan la tierra y el agua.

Desde entonces han producido documentales y *podcasts* sobre medio ambiente, mujeres, economías campesinas y niñez que han competido en festivales nacionales y que suelen divulgarse en universidades. En 2019 grabaron con el grupo Systema Solar el video musical Pa' sembrar, un himno a las semillas criollas que tuvo como protagonista a una comunidad de la alta montaña de El Carmen de Bolívar.

Seis minutos de impacto

Con un documental de seis minutos lograron lo impensable: que un representante del Estado llegara a sus comunidades. Era marzo de 2017, la sequía arreciaba y los líderes rurales de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Marialabaja se estaban preparando para emprender una caminata pacífica hasta Cartagena. El plan era llegar al despacho del Gobernador de Bolívar y exigirle respuestas por las promesas sobre educación, salud y vías que habían incumplido las alcaldías de estos municipios.

El Equipo de Comunicación grabó toda esa preparación y además organizó una especie de simulacro de la marcha. El video muestra a los campesinos y campesinas saliendo de sus veredas en burros y explicando las razones de la caminata. Una campesina denuncia que la vía está muy deteriorada y los productos se están perdiendo; otro hombre explica la travesía que deben hacer cuando los muerde una culebra o se cortan con un machetazo. “¡Vamos pa' Cartagena, que no se nos quede nadie!”, se escucha de fondo.

El video le dio la vuelta al departamento y llegó hasta el gobernador, que el día antes de la marcha viajó en helicóptero a la zona rural de El Carmen para escuchar a las comunidades y firmar nuevos acuerdos. “No lo hizo porque quería, sino porque el video tuvo tanto impacto que el gobernador dijo: ¡uy!, no pueden salir a marchar porque me dejan mal”, recuerda con orgullo Pedro Carballo, un joven afro de Marialabaja que hace parte del Equipo.

Muchos de los nuevos compromisos volvieron a quedar en el olvido, pero ese fue el inicio de una larga lucha que incluyó varias caminatas y que hoy tiene a algunos corregimientos de la zona con electricidad, nueve kilómetros de vía pavimentados y salones de clase construidos.

En cada paso de ese camino estuvo presente el Equipo de Comunicación Rural, con pancartas y cámaras; con micrófonos y arengas. Aunque algunos crean que son solo “los de las cámaras” o los confundan con una productora, los 16 miembros del Equipo tienen claro que su trabajo es parte de una misma causa: “la defensa de los territorios rurales como tierra intercultural, agroalimentaria y biodiversa”. Por eso, sus contenidos no son producto de la última tendencia en redes, sino que responden a la agenda de las organizaciones que confían en ellos para hacerlos visibles.

¿Dónde están las historias?

Frente a un puñado de jóvenes afro, Yefri Paola Cervantes muestra la enorme posibilidad narrativa que existe en su territorio: “¿Quién de ustedes ha usado ‘manteca negrita’ en el pelo? Mi mamá me peinaba con eso. De esas cosas pequeñas pueden nacer grandes historias, lo importante es saber contar esas historias”. Uno de los ejemplos que usa para demostrarlo es un corto sobre la ‘manteca negrita’, ese aceite

que las mujeres afro sacan de la palma de corozo y usan para hacer peinados. El video –que sacó sonrisas y uno que otro “vayaaa” en el público– fue producido por niños y niñas del Equipo como parte de la serie Sabores y saberes de mi tierra.

Están en una especie de salón sin paredes en el corregimiento Márquez, Marialabaja, a pocos metros de la carretera hacia Cartagena. Hasta ahí llegó Yefri, una comunicadora de 34 años criada en una comunidad pesquera cercana, junto a Daniel Arroyo, un periodista popular de 25 años de El Carmen de Bolívar. Ambos hacen parte del Equipo de Comunicación y fueron invitados a dar un taller sobre producción de historias con celular. Su público son los hijos e hijas de líderes comunitarios, adolescentes que apenas empiezan a involucrarse en los procesos sociales.

Antes de explicar los tipos de planos y encuadres, Yefri y Daniel los invitan a pensar en historias de sus comunidades que merezcan ser contadas. El resultado de esta lluvia de ideas incluye la denuncia sobre un caño que se desborda, la promoción de las represas como lugares turísticos y contenidos pedagógicos sobre el significado ancestral de las trenzas. Luego Daniel explica los mínimos técnicos para una buena producción audiovisual, por ejemplo, que “el primerísimo primer plano sirve cuando quieres mostrar que están cortando una yuca”.

El taller avanza con la pesadez que trae el calor de la tarde. Al fondo, tres mujeres echan cuentos bajo un palo de mango, mientras Yefri invita a los jóvenes a unirse al semillero de comunicación del Equipo. Para motivarlos, les cuenta emocionada que uno de los niños de los videos se llama Pedro Carballo, hoy tiene 23 años y es el representante legal del Equipo. Gracias a su trabajo, que empezó con producciones como la de la ‘manteca negrita’, está estudiando con una beca completa

la carrera de Comunicación Audiovisual en Barranquilla, “en una universidad bastante caribeña”. También señala a Daniel, a su lado, para contarles que estudia Comunicación Audiovisual en Cartagena y que su beca fue producto de los ochenta y tantos acuerdos que firmó el Gobernador de Bolívar después de una de las caminatas pacíficas hasta sus instalaciones.

Estas oportunidades podrían llevar a Pedro y a Daniel a grandes medios o productoras, pero su proyecto de vida está en los Montes de María. Yefri, que también estudió Comunicación en Cartagena, recalca ese mensaje en los potenciales comunicadores de Marialabaja: “todos tenemos proyectos personales, como formar una familia o ser profesionales, pero nunca olvidamos de dónde venimos”.

Vivir del oficio

La decisión de Yefri, Daniel y Pedro de devolverle a los Montes de María lo que les ha dado no ha sido fácil. Aunque el Equipo ha logrado que su trabajo sea reconocido económicamente (gracias a las alianzas con organizaciones locales y nacionales) todavía siguen trabajando para ser sostenibles. A pesar de la pasión por el oficio y del amor por estas tierras fértiles, algunos de sus compañeros han tenido que irse a las ciudades en busca de un empleo “en lo que salga”. Para evitar ese destino, la apuesta del Equipo de Comunicación Rural –que hace poco se constituyó como corporación con la asesoría de Dejusticia– es postular a convocatorias y seguir creando redes con otros procesos sociales para lograr que su talento les permita vivir dignamente en el territorio.

De cualquier forma, Yefri seguirá grabando –junto a la Coalición de Mujeres del Caribe– una *podcast* sobre mujeres rurales y nuevas

masculinidades, en el que interpela a los campesinos con preguntas como “¿te sientes cómodo si una mujer trabaja al lado tuyo tirando machete?”. Por su parte, Daniel continuará produciendo historias sobre la disputa tipo David y Goliat entre el campesinado y los empresarios de la palma por el uso de las represas. Mientras tanto, ‘Pedrito’ planea su trabajo soñado: una serie sobre un niño que pierde el agua en su comunidad y recorre el Caribe colombiano para aprender cómo otras comunidades han logrado conservar sus fuentes hídricas.

Son sueños personales que se encuentran en una ambición común: posicionar a los Montes de María como una despensa de historias.

OMAIRA MARCELA CÁRDENAS MENDOZA
MARIANA CAMACHO MUÑOZ
DIANA QUIGUA

Las mujeres kankuamas, el tejido vivo y la justicia ancestral



EN EL CORAZÓN DEL MUNDO, LA SIERRA NEVADA DE GONAWINDÚA (SANTA MARTA), LAS MUJERES KANKUAMAS FORTALECEN EL SISTEMA DE JUSTICIA PROPIA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS PARA LOGRAR LA ARMONÍA Y EL EQUILIBRIO DE LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS.

La justicia propia sin las mujeres kankuamas es incompleta. La forma de explicar la justicia desde ellas es a través del chipire, el tejido con el que empiezan la mochila y cuyo fin es guardar el pensamiento femenino. Para las mujeres kankuamas estos procesos tienen sentido porque están pensados desde el origen, hacen parte de ese tejido de vida. En ese recorrido, hay numerosas mujeres que han contribuido a enhebrar, a dar puntadas y a tejer sus procesos de fortalecimiento. Mildred Montero y Ana Manuela Ochoa, actual magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, iniciaron el encuentro de las mujeres alrededor del tejido, del fogón, de compartir el café y otras actividades cotidianas que les permitieron ir fortaleciendo su voz.

Por eso, en el chipire se encuentran principios como la complementariedad y la dualidad; los mandatos de las madres y padres espirituales que gobiernan los sitios sagrados; y la misma ley de origen. Estos principios orientan el gobierno propio del pueblo kankuamo, el territorio, fundamenta las leyes de convivencia entre las comunidades, las relaciones entre los seres humanos y así mismo su relación con los seres espirituales. Es decir, es todo el ordenamiento ancestral que debe respetarse para poder mantener el equilibrio. Las mujeres kankuamas son las protagonistas de la pervivencia física y cultural de su nación originaria, a pesar de haber sufrido el embate del conflicto armado que afectó estructuralmente a sus familias, territorios, generaciones y semillas de vida.

Pensando la justicia desde el territorio

“Nosotras las mujeres somos territorio, nuestro cuerpo es territorio”. Así es como define la mayoría Elcida Bolaños Cáceres la relación de las mujeres kankuamas con el corazón del mundo: la Sierra Nevada de Gonawindúa (Santa Marta). El cuidado del cuerpo de las mujeres,

y de ese cuerpo gigante que es el territorio de la Sierra, ha sido la lucha de ellas desde la palabra dulce: es decir, la que busca mantener la armonía y evitar el conflicto, sin dejar de ser la palabra decidida de las mujeres y de sus determinaciones. Es la palabra que tiene el poder de la armonía.

Es así como nacen los Comités Comunitarios, una iniciativa que busca fortalecer el gobierno propio y el sistema de justicia kankuama desde el sentipensar de las mujeres. Su papel principal es garantizar el acceso a la justicia integral de las mujeres, la niñez y las familias. Dice Omaira Cárdenas, lideresa kankuama, abogada y asesora: “Para nosotras hablar de eso, es hablar de todas esas desarmonías que las mujeres, pero no solo las mujeres, sino de las mujeres en las familias con las familias, de las mujeres en la comunidad afrontando todos los obstáculos y barreras, tanto internas como externas, donde estar unidas nos ha permitido construir juntas esos elementos y herramientas de participación pero también de sanación y de poder formarnos para formar a otras compañeras y acompañarlas en este camino”. Para llegar a esto, las mujeres se organizaron, participaron e incidieron activamente en los congresos del pueblo kankuamo, la máxima instancia de gobierno que se reúne cada cuatro años para legislar, concertar, controlar, evaluar y orientar sus mandatos.

Esta labor no fue fácil, les tomó varios años (a la fecha se han realizado cinco congresos) y es en el marco del cuarto congreso, en el año 2016, donde finalmente el pueblo kankuamo reconoce la labor que hacen los Comités Comunitarios, los formaliza e instituye como parte del sistema de justicia kankuama.

Los Comités Comunitarios y la coordinación interjurisdiccional

Los Comités Comunitarios son una apuesta colectiva, pensada y soportada por las mujeres kankuamas para la construcción de paz teniendo en cuenta las múltiples violencias que ellas enfrentan. Bajo ese mandato, los Comités realizan acciones de promoción, identificación y atención integral e intercultural. También procesos de documentación, registro, remisión y seguimiento de casos de todo tipo de vulneración contra ellas y su entorno.

Para la mayoría Elcida, la espiritualidad es un asunto fundamental en la lucha de las mujeres kankuamas. Los pagamentos o tributos a la tierra son utilizados para pedir permiso a la madre y entablar los diálogos relacionados con sus necesidades e intereses. Asimismo, el concepto de justicia impacta en dos dimensiones de la vida kankuama: la espiritual y la física. De esta manera, al cumplir con las leyes de origen y los mandatos espirituales se mantiene el orden físico y el plano de las relaciones humanas.

Entendiendo estas dimensiones de la justicia, las mujeres kankuamas atienden casos de violencias intrafamiliares, violencias basadas en género e inasistencia alimentaria. Para esto último crearon la ruta “Tejidos para el restablecimiento de la armonía de las mujeres y familias kankuamas víctimas de la violencia”, una estrategia de acompañamiento psicosocial, psico-espiritual cultural (de los mamos) y atención jurídica para las partes involucradas en el caso. Esto es liderado por los Comités Comunitarios en articulación con el Consejo General de Mayores; máxima autoridad de justicia en el pueblo kankuamo. La iniciativa se desarrolla de manera autónoma y autogestionada, pues son las propias autoridades, junto a las mujeres kankuamas quienes asumen todo el costo de traslados, alimentación

y hospedaje. También señalan, como lo hace Sibelis Villazón, mayora y coordinadora de la Comisión de Mujeres Indígenas y Familias Kankuamas-CMIFAK, que es necesario contar con sus voces en el gobierno propio para equilibrar esa búsqueda de justicia, y así incidir en las apuestas de coordinación intercultural con el Estado. Es por esto que hoy, ante la discusión que lleva el pueblo kankuamo sobre el protocolo de coordinación interjurisdiccional, la Ley de coordinación interjurisdiccional y el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, las mujeres participan activamente en las discusiones con las autoridades y ponen su palabra.

En este contexto, una de sus propuestas es que se construya una casa de sanación y armonización, es decir, un espacio de acompañamiento psicojurídico-espiritual y de sanación para las mujeres y familias kankuamas. Con esto las mujeres kankuamas quieren seguir articulando sus esfuerzos, para el cuidado de ese gran territorio que es la Sierra, donde la semilla de la vida insiste en prosperar.

Por eso, cuando se habla de la “Fuerza de la Vida”, se habla del pueblo kankuamo y especialmente de sus mujeres, quienes con el poder del tejido, la palabra dulce y el buen pensamiento, han sido horcones robustos que han sostenido y sostendrán un todo, un colectivo. Donde ni las penurias de “la mala muerte” por la violencia de larga duración y especialmente por el conflicto armado, han sido causal para callar o morir. Por el contrario, motivo para vivir, luchar y resistir.

JOSÉ DARÍO PUENTES RAMOS

Corporación Vínculos, dos décadas apostándole a aliviar el sufrimiento emocional de la guerra



EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO HA DEJADO ENTRE LAS VÍCTIMAS UN SUFRIMIENTO EMOCIONAL QUE NO RECIBE LA SUFICIENTE ATENCIÓN, PESE A LOS AVANCES EN PROGRAMAS PSICOSOCIALES QUE OFRECE EL ESTADO. ES POR ELLO QUE DESDE 2003 LA CORPORACIÓN VÍNCULOS HA CREADO ESTRATEGIAS DE CUIDADO, ESCUCHA Y FORMACIÓN EN DERECHOS PARA ACOMPAÑARLAS Y ASÍ APORTAR EN EL ALIVIO DEL DOLOR QUE LES PROVOCÓ LA GUERRA.

La lista de las vulneraciones a los derechos humanos que han vivido las más de nueve millones y medio de víctimas del conflicto armado colombiano, según la Unidad para las Víctimas, es larga y dolorosa. Derechos como el acceso a servicios de salud, una vida libre de violencias basadas en género, la tierra, la vivienda digna, la educación, la verdad, la justicia y la reparación —por nombrar apenas unos cuantos— fueron y continúan siendo violados, engrosando así ese lamentable inventario.

Es claro que la guerra deja una enorme huella en la calidad de vida y la salud de las víctimas directas o indirectas, pero también genera un sufrimiento emocional que en Colombia “no ha sido suficientemente atendido y que se reproduce intergeneracionalmente porque no se ha logrado tramitar, pues permanece vivo en las vidas de las personas, las familias y en la sociedad”, asegura la psicóloga Mariana Sáenz Uribe, directora de la Corporación Vínculos.

Desde 2003 esta Corporación adelanta procesos de atención psicosocial, emocional y de cuidado con comunidades, organizaciones y víctimas de violencia sociopolítica en un país que si bien en las últimas dos décadas ha creado programas y mecanismos para aliviar el sufrimiento que deja el conflicto armado —como la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI) del Ministerio de Salud—, todavía son insuficientes. “La dimensión de las víctimas de la guerra y la violencia sociopolítica es tan grande que las necesidades de atención psicosocial son altas y en Colombia tenemos dificultades de cobertura”, añade Sáenz.

Pero esa atención, en consideración de la directora de Vínculos, debe contar con un enfoque de derechos. Es decir, que las víctimas reciban

una reparación o rehabilitación integral: a la par de la atención psicosocial y cuidado emocional, se les garanticen el acceso a derechos básicos, como la vivienda, la salud o la justicia, para rehacer sus vidas.

Las barreras para una plena atención psicosocial

Cuando empezó sus labores hace veinte años, la Corporación Vínculos se encontró con un escenario complejo. “Se conformó por un equipo de profesionales, en su mayoría psicólogos, que tenían un interés muy grande en atender a víctimas, pues en ese momento ni siquiera se hablaba de conflicto armado ni las víctimas eran reconocidas”, comenta Sáenz.

Desde entonces, la Corporación comenzó un acompañamiento permanente con enfoque psicosocial para diferentes poblaciones afectadas por el conflicto armado y otras violencias sociopolíticas: mujeres, líderes y lideresas de derechos humanos, jóvenes, personas mayores, desmovilizados de grupos armados, entre otras. En 2022, por ejemplo, Vínculos adelantó procesos psicosociales con más de 1400 víctimas. En medio de ese trabajo, como lo explica Karen Urueña, psicóloga y coordinadora de Gestión del Conocimiento, se han detectado una serie de barreras para este tipo de atención en el país.

La primera de las barreras es la cobertura. “Lo que vemos en las medidas de rehabilitación y reparación es que no llegan a las comunidades, a los municipios más alejados. La atención psicosocial se ha centrado en lo urbano. Además, por los procesos de contratación de los programas, la atención se brinda por unos meses en los territorios y no logra una cobertura a largo plazo”, asegura Urueña.

Precisamente, la falta de continuidad en la atención psicosocial es la segunda barrera. Para esta psicóloga es clave que las familias de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo las desapariciones forzadas o las masacres, tengan un acompañamiento constante para aliviar el sufrimiento, puesto que las afectaciones emocionales en estos casos pueden durar años, décadas o toda la vida. Si los programas de atención apenas duran unos meses o años como lo dice la directora de Vínculos, el dolor seguirá allí, incrustado en lo individual y lo colectivo.

Otras barreras están relacionadas con la falta de presupuesto y la atención con enfoque psicosocial por parte del Sistema General de Salud en Colombia. “Los hechos traumáticos se somatizan en el cuerpo, muchas veces a través de enfermedades. Entonces, es necesario abordarlos desde lo emocional. Por eso es importante un programa como el PAPSIVI. Pero la realidad nos ha mostrado que todavía estamos lejos de lograr que el enfoque psicosocial se incorpore en el sistema de salud”, afirma Urueña, y agrega que sobre el papel los programas están bien diseñados y estructurados, pero en la práctica se encuentran las dificultades.

Justamente en el balance al componente de rehabilitación —donde se contempla la atención psicosocial— de la Ley de Víctimas, hecho por la Procuraduría General de la Nación en 2020 y en el que participó Sáenz, se enuncian estas barreras y dentro de las recomendaciones que se hacen están la ampliación de la cobertura, la reparación integral, la articulación entre los programas psicosociales con el sistema de salud y la formación del talento humano especializado en este tipo de atención para las víctimas.

Prevención y construcción de culturas de paz

Uno de los derechos que tienen las víctimas de conflicto armado es la garantía de la no repetición de los hechos que les causaron sufrimiento. Es por eso que Vínculos también le apuesta a la construcción de culturas de paz como mecanismo de prevención de violencias en territorios complejos. “Hay valores, prácticas o imaginarios que legitiman la violencia. Por ejemplo, buscamos con esta estrategia que niños, niñas y jóvenes en contextos afectados por el conflicto armado no construyan la identidad del ‘guerrero’. La idea es que tengan una visión crítica sobre la violencia”, dice la directora de la Corporación.

Esas culturas de paz se construyen entre toda la sociedad: padres, maestros, funcionarios, organizaciones sociales, entre otros actores de los territorios. En 2022 participaron 107 menores en esta estrategia y 858 profesionales que acompañan a víctimas se vincularon a procesos de sensibilización y cuidado emocional, al igual que en formación para la exigencia de derechos como la reparación integral.

También, como parte de la prevención, Corporación Vínculos forma en atención psicosocial a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a líderes y lideresas sociales para que sean ellas y ellos los primeros en escuchar las necesidades emocionales de las víctimas del conflicto armado y la violencia política. Que alguien esté presente y disponible para escucharlas es vital porque las ayuda a aliviar el dolor que dejan más de sesenta años de guerra.

IVONNE ARROYO MERCADO

El sonido de las “otras” voces del Caribe



CÓMO SUENA EL CARIBE, CÓMO SUENA EL SUR DE UNA CIUDAD CARIBEÑA, CÓMO SE CUENTA. EL EQUIPO DE VOKARIBE, UNA EMISORA COMUNITARIA NACIDA EN EL CORAZÓN DE LA LOCALIDAD SUROCCIDENTE DE BARRANQUILLA, SABE QUE SI LAS EXPRESIONES SON TAN DIVERSAS, TAMBIÉN DEBEN SERLO LAS VOCES. POR ESO SUS PRODUCCIONES RADIALES SON LIDERADAS POR VECINOS Y VECINAS, MUJERES, MIGRANTES, PERSONAS LGTBIQ+, INDÍGENAS, COLECTIVOS DE JÓVENES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y ARTISTAS. VERBENEROS, ROCKEROS, SALSEROS. LAS VOCES QUE SUELEN ESTAR SUBREPRESENTADAS Y FOLCLORIZADAS. TODOS, TODAS, TODES.

Ese viaje sonoro libre, alternativo y ciudadano, como le llaman ellos, comenzó en 1991 en el barrio Las Malvinas, bautizado así por la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido en 1982, algo que inspiró a los habitantes del sector a luchar por las tierras del barrio, que en ese entonces era una invasión. Pero regresemos a los años noventa y a los comienzos de Vokaribe. Eran tiempos de apertura democrática. Colombia atravesaba la reforma constitucional y los acuerdos de paz con el antiguo Ejército Popular de Liberación, EPL. En ese entonces, Walter Hernández empezaba a hacer radio en la universidad, tenía un cuaderno donde anotaba los listados musicales de las emisoras que escuchaba y hacía parte de un grupo de rap; Patricia Rendón era presidenta del consejo estudiantil del colegio Pestalozzi, miembro del movimiento estudiantil Séptima Papeleta y se alistaba para estudiar periodismo; Milton Patiño visitaba emisoras ciudadanas durante su exilio en España para conocer sus experiencias y poner en práctica sus enseñanzas, junto con Ewar Torres y Ramón Turizo, luego de cerrar el capítulo como miembros del EPL. Todos estaban unidos por un mismo deseo. Querían explorar la comunicación alternativa y popular a través de una emisora comunitaria, algo de lo cual no se hablaba en la academia ni en la ciudad. Tenían la certeza de que debían visibilizar los procesos de construcción y transformación de las comunidades, amplificar sus discursos y simbologías e impulsar su participación y toma de decisiones. Estaban inspirados por el trabajo de varias emisoras comunitarias que fueron sus referentes: Onda Verde, en España; La Tribu, en Argentina y La Cometa y Suba al Aire, en Colombia. Sabían, además, que tenían derecho a sonar. Entonces crearon la Asociación de Radiodifusión Comunitaria Vokaribe en 1995.

Hoy tienen 28 años. Vokaribe transmite su señal a través de los 89.6 FM y de su página web vokaribe.net, así como de otras plataformas digitales.

Su sonido llega a más de 90 barrios de las localidades suroccidente y metropolitana, que superan los 700.000 habitantes. Son seis personas que integran el equipo de coordinación, catorce representantes de las organizaciones que hacen parte de la junta de programación y quince coproductores y coproductoras de los programas. Toda una red enfocada en hacer sonar a “ese universo plural y diverso”.

Escuchar la emisora es transportarse a sus estudios ubicados en el segundo piso de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, uno de los últimos barrios en esa zona suroccidental. No es coincidencia que desde ahí suenen, porque La Paz, que debe su nombre al padre holandés Cyrillus Swinne, es uno de los modelos comunitarios de autogestión más representativos de Barranquilla por toda la historia de transformación social que se ha escrito allí. Ese tipo de historias —las que se construyen colectivamente— son las que se cuentan en Vokaribe. Se cuentan, por ejemplo, en el programa Tu Caribe Joven, con Isaac Martínez y Alejandra Ortega, quienes promueven las iniciativas y discusiones juveniles presentes en el sur de la ciudad. También en Vivir en Paz, que conduce Alex Vásquez, donde estudiantes y profesores de la Universidad de la Costa, CUC, comparten sus saberes y dialogan sobre temas clave para la ciudadanía. Y en otros como Habla la diversidad, producido por la corporación Caribe Afirmativo para visibilizar las realidades de la población LGTBQ+ y conversar sobre las diversidades.

“Aquí no somos la voz de nadie ni hablamos por nadie, nuestro deber es amplificar las voces para que la diversidad siga expresándose. Pero la gente tiene su propia voz, solo que es el primer principio negado”, dice Milton Patiño, uno de los cofundadores.

Ni se alquila ni se vende

En Vokaribe puede llegar alguien de, por ejemplo, el barrio El Bosque y decir yo quiero que se hable de los sobrecostos en las tarifas de energía en mi barrio. O quiero tener un espacio para hablar de música afrocaribe. O, incluso, quiero tener mi propio programa. ¿Y? “Hagámoslo, se puede”, dice Walter Hernández, quien también es cofundador del colectivo músico-visual Systema Solar.

Lo dice porque la emisora comunitaria, además de ser emisora, ofrece programas de formación sin costo para que los habitantes del sector adquieran herramientas para coproducir con ellos. “Este no es un espacio que se alquila ni se vende, sino que es gratuito y está abierto a las iniciativas de la gente”, explica Belén Pardo, antropóloga de la radio.

Es una apuesta por democratizar la participación de la ciudadanía en los medios de comunicación. Si las personas no se sienten representadas, si nadie más cuenta sus historias, ¿quién mejor que ellas mismas para contarlas? Para eso Vokaribe ha desarrollado talleres enfocados en producción radial, redacción, reportería comunitaria, investigación y administración de recursos para radios en los que participan las personas durante uno y hasta seis meses. También ha asesorado en el diseño de parrillas de programación para radios, la gestión de la radio y ha acompañado a colegios de la ciudad en sus procesos de radio-escuela.

La pregunta cómo suena el Caribe, cómo suena el sur de una ciudad caribeña y cómo se cuenta tiene un mar de posibles respuestas. Una parte de esa agua salada corre por las calles del suroccidente de Barranquilla, por Vokaribe y por las voces diversas que trae su oleaje.

NINA CHAPARRO GONZÁLEZ

Mercados campesinos: del campo a la ciudad sin intermediarios



HICIMOS UN RECORRIDO POR EL MERCADO CAMPESINO DE FONTIBÓN Y CONOCIMOS A AGROCOMUNAL. ENTRE LOS PUESTOS DE FRUTAS, VERDURAS, AMASIJOS Y COMIDAS TÍPICAS, CONVIVEN LAS HISTORIAS DE AL MENOS 350 PRODUCTORES QUE, GRACIAS A ESTA ORGANIZACIÓN, PUEDEN VENDER SU COSECHA DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR CAPITALINO.

Son las 5 a.m. y estamos en el parque de Fontibón con un cielo bajito de nubes grises característico de Bogotá. Hay aproximadamente quince puestos de mercados campesinos. Apenas llegamos, doña Lucelly me regaña, me dice que debí madrugar más, que me perdí la llegada y la descargada de los camiones a las 3 a.m. Yo pienso que sin esas dos horas de sueño no sería capaz de decir algo cuerdo.

Lucelly Torres es la coordinadora de Agrocomunal, una organización que desde 2004 organiza mercados campesinos en Bogotá para que al menos 350 productores de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta puedan vender su cosecha directamente, y así generar bienestar al campesino y al consumidor capitalino. Ella nació en Herveo, Tolima y en sus anteriores trabajos la llamaban “el volcán” por la vitalidad y el empuje con que trabaja. Ha sido profesora, periodista, comunera, líder social y también una poeta que cuenta en coplas las benevolencias y las durezas de la vida. Arrancamos el recorrido por el mercado. En los primeros puestos están las frutas y las verduras que, en palabras de doña Lucelly, son la esencia del mercado campesino. Saludamos a don Eduardo, un productor de Nuevo Colón, Boyacá, que lleva más de quince años trabajando en el mercado de Fontibón vendiendo peras, manzanas, arándanos, fresas y hortalizas, entre muchos otros verdes, de veinticinco vecinos del municipio. Nos cuenta que este mercado le ha traído bienestar a muchas familias. Al no haber intermediarios, pueden traer productos más frescos y sin conservantes, se protege el medio ambiente al reducir el transporte y el uso de plástico e icopor, se vende a precios justos y el consumidor paga menos. Lo que en términos técnicos se llamaría soberanía alimentaria.

Este problema de los intermediarios ha sido documentado por distintas fuentes. La Liga Contra el Silencio hizo un estudio en donde

reveló que los intermediarios se quedan con las mayores ganancias y empobrecen al campesino al punto que algunos “prefieren dejar sus productos a la entrada de sus fincas para que pase un transportista y las recoja a cualquier precio”. Por eso Agrocomunal le apuesta a este tipo de mercados de circuito corto, es decir, sin intermediarios, donde existe una relación directa entre el campesino y el consumidor.

Seguimos nuestro recorrido por los amasijos, uno de los puestos más apetecidos. A vuelo de pájaro se ven almojábanas, arepas, pandeyucas, resobados, yogures, huevos criollos, mantecadas, masato, chicha, entre otras delicias. Pregunto por qué los huevos de gallina son verdes, y Victoria, la vendedora, me dice que son verdes porque son puestos por gallinas negras de raza nicaragua, pero que el sabor no cambia.

Victoria Moyano es una de las productoras que llega cada ocho días a vender sus productos a Fontibón. No sobra decir que el 75% de este mercado es liderado por mujeres y que este espacio ha servido para fortalecer la autonomía de las campesinas. Ella viene de Arcabuco, un pueblo boyacense a cuatro horas de Bogotá. “Todo empezó porque mi abuela le enseñó a mi mamá a moler el maíz y a hacer amasijos y masato. Todo sin químicos ni nada. Vendían en una tiendita en el pueblo. Luego llegaron mis tíos y ahora estamos nosotras. Después de eso llegó Agrocomunal al pueblo y dio una charla y nos invitaron a traer nuestros productos a Bogotá. Y acá estamos”.

Nos cuenta que esta carpa de amasijos reúne siete productores que benefician a más de veinte familias campesinas, entre las que se encuentran madres cabeza de familia, adultos mayores y una persona con discapacidad que hace el yogurt. El proceso de producción requiere disciplina y orden. Los martes, cada productor se suplende las provisiones que necesita para hacer los amasijos. Los martes,

miércoles y jueves se ordeñan las vacas y se trabaja en la producción. Los viernes se reúnen todos los productores y empacan entre 7.000 y 8.000 productos en un camión para traer a Bogotá.

Victoria, mientras atiende a otro cliente antojado, nos cuenta que gracias a este mercado todos ellos tienen una mejor calidad de vida. Ella, por ejemplo, pasó de vivir en una casa de barro a una casa de ladrillos. Su hija menor estudia en el colegio y su otra hija está estudiando arquitectura en una universidad de Bogotá.

Finalmente, llegamos a la parte de las comidas típicas. Hay lechona, rellena, chorizos, tamales, caldo de papa, entre otras. Doña Lucelly dice que mercado campesino que se respeta tiene que tener comidas típicas. “El mercado es un punto de encuentro de las familias donde, con los productos y la comida, se cuecen remembranzas, añoranzas y territorio. Las personas se van llenas de vitalidad porque encontraron algo que forma parte de su vida”.

Carmen Cogua y su esposo Juanito vienen del municipio de Tena y son famosos por su emblemática rellena. Carmen nos cuenta que la rellena es receta de su esposo, que él aprendió a hacerla de su mamá y su mamá de su abuela. Traen cerca de 300 porciones y a veces a mediodía ya no tienen nada. Llevan más de diecisiete años en este mercado y Juanito dice que levantó su casa a punta de rellena.

Antes de finalizar el recorrido nos encontramos con don Efraín Villamil, uno de los fundadores de Agrocomunal. Es un hombre de 71 años con un discurso sólido y profundo. En cada una de sus palabras se siente el peso de una formación política impecable. Sus respuestas nunca son cortas, ni de un sí o un no, sino que es de esas personas que

arrancan a hablar y cuando uno cree que ya se fue por las ramas, vuelve y une todos los puntos con una coherencia inesperada.

Su vida política inició a los quince años. “El 19 marzo de 1969 salí de mi casa y me encontré a la comunidad de Fontibón reunida. Estaban en la elección de la junta de acción comunal... ‘¡venga para acá jovencito, usted es el secretario de la junta!’ Y de una vez me metieron en este cuento”. Desde ahí empezó a entregar su vida al trabajo comunitario. Estuvo vinculado a la Unión Patriótica y a la ANAPO. Hace parte de la Federación de las Juntas de Acción Comunal y trabaja en la construcción de una red entre estas juntas y los campesinos. También es un sobreviviente de la violencia de este país.

Nos cuenta que Agrocomunal nació en 2004 de una alianza entre comuneros y campesinos sin tintes de partidos políticos. Su objetivo era defender los derechos de los campesinos y consumidores a cultivar, producir y alimentarse en condiciones dignas. Para ello, querían traer el mercado a la ciudad sin intermediarios, a diferencia de lo que ocurre en centrales como Corabastos. Aunque trabajan con las uñas y sin financiación, actualmente realizan cerca de doce mercados campesinos en Bogotá. Los principales son los de Fontibón y Floralia.

El sueño inmediato de Agrocomunal es tener un centro de acopio en Bogotá. Es decir, una bodega a donde puedan llegar los alimentos del campo para madurar naturalmente sin químicos, y, desde ahí, ser distribuidos a los mercados campesinos, los tenderos, los restaurantes, los mercados comunitarios, los consumidores, etc. Un lugar donde nada se pierda.

Estudió Sociología a los 50 años y dice que su conocimiento viene del maestro Fals Borda y el diálogo de saberes con las personas. “Este trabajo le da a uno la satisfacción de que no hemos venido a vegetar a este mundo sino a ser trascendentes y a construir los sueños de tener un país con justicia social, igualdad de oportunidades y libertad”

Son las 4:30 p. m. y ya no queda casi nada en los puestos. Tampoco quedan palabras para contar la historia de Camilo Quiroga y sus hortalizas. La de Marlene y sus cocadas de San Basilio de Palenque. La de doña Ana y sus panes saludables para diabéticos. La de la chucula de Ciudad Bolívar. La del viche y el pipilongo del Pacífico. El mercado se vendió todo y los campesinos se alistan para volver a sus pueblos. Se verán de nuevo en ocho días, a las 3 a. m., cuando bajo las coordenadas de doña Lucelly lleguen los camiones cargados de cientos de productos frescos al parque de Fontibón, listos para traer el campo a la ciudad.

ADRIANA ABRAMOVITS

Baudó AP: un río de historias



ANTE LA DESINFORMACIÓN Y EL PODER HEGEMÓNICO DE LOS MEDIOS, SURGE UNA AGENCIA PÚBLICA QUE PONE AL PERIODISMO COMUNITARIO EN EL CENTRO DE LAS HISTORIAS. ESTA APUESTA DE PERIODISMO INDEPENDIENTE ESTÁ TRANSFORMANDO LA MANERA EN LA QUE LAS COMUNIDADES SE NARRAN A SÍ MISMAS DESDE LOS TERRITORIOS.

¿Qué es un río? Un río puede ser una historia, una foto, un cómic, un diálogo comunitario. Baudó significa río de ir y venir. Está situado en el pacífico colombiano y también es el nombre que lleva una agencia periodística que se asume a sí misma como un actor para la transformación social.

Hace seis años y medio, en un viaje de doce horas por el río Caquetá, en la Amazonía colombiana, Laura Sofía Mejía y Víctor Galeano se empezaron a cuestionar sobre el futuro del oficio periodístico. Ambos hacían coberturas de fotografía y video, y tenían inconformidades sobre la forma y el modelo de negocio de los medios de comunicación, donde usualmente el periodista, por el afán del tiempo, hace un “proceso extractivista” de la información, obteniendo los datos que necesita sin detenerse en la repercusión que pueda causar a la comunidad. Se preguntaban cómo podían hacerlo distinto, cómo podían establecer un proceso respetuoso, donde las personas del territorio no se vieran como una fuente lejana, sino como la voz principal del relato. Fue en ese río que prometieron conjurar una metodología propia y arrancaron este proyecto juntos.

Todo lo pensaron con nombres alrededor de los ríos: los afluentes (arroyos que desembocan en un río) serían las crónicas cortas, las ilustraciones y los contenidos de redes sociales; los efluentes (corrientes que emergen del río) serían los proyectos innovadores de cobertura periodística; y las confluencias (donde distintas corrientes de agua se unen) serían los laboratorios comunitarios con pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Al año, la Agencia Pública Baudó, se constituyó como una organización sin ánimo de lucro, que le apuesta de manera crítica, colaborativa y transparente a hacerle frente a las problemáticas que atentan contra los derechos humanos en Colombia.

Periodismo para el cambio social

El primer proyecto grande en el que se embarcaron se tituló Una parte por millón, un mapa interactivo donde se evidencian las consecuencias sociales del uso indiscriminado del mercurio en la minería del oro. Este reportaje reunió un equipo interdisciplinario de 16 profesionales, en 6 departamentos, que dejaron registro de la destrucción de fuentes hídricas y las afectaciones a la salud en los pueblos afro e indígenas.

“Fue una lanzada al agua muy ambiciosa, este especial tuvo producción audiovisual, crónicas, fotografías y video 360”, cuenta Laura Sofía.

Conocer a Baudó es dejarse guiar por la inmersión de sus reportajes. Es sentirse parte de un territorio y valorar el liderazgo en una comunidad. Su plataforma web es el repositorio donde se originan nuevas preguntas, que dan pistas sobre afectaciones sociales y posibles responsables. Así lo expone el reportaje “Glifosato, ¿quién responde después de la aspersión?” que resultó de una colaboración entre Mutante y Cuestión Pública, otros dos medios independientes, donde se revela la irracionalidad de la fallida guerra contra las drogas, en un momento en el que el gobierno pretendía reactivar las aspersiones aéreas.

Baudó AP trabaja principalmente con tres ejes temáticos: género e inclusión; memoria, paz y conflicto; y medio ambiente. Sobre este último publicaron un gran proyecto fotográfico titulado “Todas las hojas son del viento”, que visibiliza los esfuerzos de restauración de bosques por parte de las familias de la vereda Brasilar, en el municipio San Jacinto (Bolívar). Este diálogo con la magia del bosque refleja el

sentido de pertenencia de las familias en uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia.

Otro reportaje ambiental, que resultó en una nominación al Premio Gabo 2023 en la categoría Imagen, se llamó “Los rastros del cambio climático” que reúne historias en Chile, Perú, Brasil y Colombia, donde se responde con imágenes a aquellas personas que todavía piensan que el cambio climático no existe y que es un invento.

Escucha comunitaria

El éxito de Baudó AP no se mide por clicks, ni por likes en redes sociales, sino cuando vuelven a las comunidades y muestran la investigación. Organizan grupos focales y escuchan si las personas se sintieron identificadas. Esa es su promesa principal: impactar de manera positiva, amplificando voces y manteniendo una relación a largo plazo con las personas y los territorios.

Esa escucha comunitaria se amplía a los espacios de formación, donde han encontrado que en cada lugar que visitan hay un comunicador nato, alguien que ha querido dedicarse a la comunicación. De ese entendimiento surgió Chagra, una red de narradores independientes que crean contenidos acerca de los temas que afectan a sus comunidades de origen.

El primer ciclo de narradores visuales juntó a periodistas empíricos de catorce departamentos. Abrieron una beca donde eligieron siete proyectos conformados por diez narradores e hicieron un encuentro presencial en Pereira. En ese espacio, nombraron a un mentor para cada proyecto e identificaron el tipo de apoyo que necesitarían

para producir y difundir el relato. Pusieron a disposición sus conocimientos en diseño y programación para potenciar cada historia.

Hoy en día, Chagra es una apuesta permanente de Baudó AP, con más de 66 narradores conformados por población rural, afrocolombiana e indígena.

Una agencia pública

Para Baudó AP, la difusión libre de la información es un valor clave dentro del ejercicio periodístico. Por eso se consideran una agencia pública, ya que no cobran a medios nacionales o internacionales por utilizar fragmentos de sus contenidos en sus propias investigaciones. De esta manera, amplifican las voces y permiten mayor democracia y pluralidad en el acceso a la información.

“No creemos en el periodismo objetivo, estamos parados en una postura de derechos humanos a la que no le tenemos miedo”, enfatiza Laura Sofía. Y ese periodismo crítico a su vez es riguroso, equilibra fuentes y no le falta a la verdad para beneficiar intereses particulares. De ahí también sus formas de financiamiento. Baudó propone proyectos de cobertura periodística y buscan su viabilidad económica, sin que esto intervenga en la línea editorial. Esto para ellos es fundamental, ya que esa independencia temática les permite una apuesta descentralizada de la información. “Los latinoamericanos hemos sido narrados por estadounidenses o personas europeas. Nosotros creemos que la visión propia es muy valiosa en la comunicación, y de eso tenemos consenso en los territorios”.

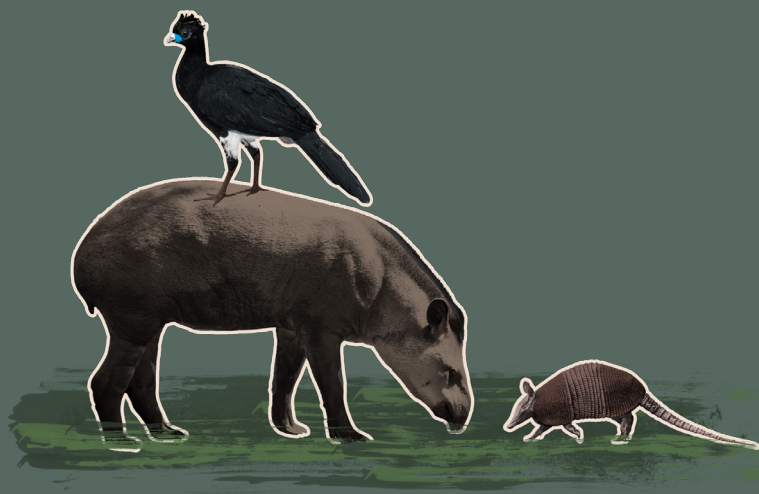
Con ánimo de ampliar sus fuentes de ingreso, le apuntan a la autofinanciación con un proyecto de recaudación de fondos llamado

Navegantes, que permite apoyar económicamente el cubrimiento de reportajes y contribuir activamente al periodismo comunitario y a la diversidad informativa, que a fin de cuentas fortalece la democracia.

Baudó finalmente es una apuesta de comunicación que le permite a las comunidades narrarse a sí mismas, utilizando la diversidad de formatos y voces a favor del cambio social. El narrador se manifiesta como un aliado contra la desinformación, a su vez que empodera a las comunidades y les permite participar activamente en el resultado de la historia. Poniendo a las comunidades en el centro, se envía un mensaje contundente, el de una sociedad que se niega a seguir escribiendo una historia única.

ANA MARÍA MALAGÓN PÉREZ

Defender el ambiente y avanzar por los derechos campesinos



CON UNA AGENDA AMBIENTAL Y COMUNITARIA, LA ASOCIACIÓN CAMPESINA Y AMBIENTAL DE LOSADA GUAYABERO LE HA APOSTADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CAMPESINOS EN META. HOY, CON EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA POR LAS ENTIDADES AGRARIAS, BUSCA INCORPORAR NUEVAS INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.

La primera línea (transporte colectivo en la región) y la única en la mañana salió a las cuatro y media desde San Vicente del Caguán. El cálido amanecer nos permitió ver el paisaje del Norte del Caquetá, una mezcla de llanuras y montañas atravesadas por fincas campesinas. La vía, como la mayoría de aquellas que conectan las cabeceras urbanas con las zonas rurales, tenía incontables tramos en mal estado, excepto por aquellos aledaños a pozos petroleros.

Después de más de tres horas de camino llegamos a San Juan de Losada, una inspección que divide el departamento de Meta del Caquetá, rodeado por el río Losada desde su llegada. Esta es la puerta de la Asociación Campesina y Ambiental del Losada-Guayabero (ASCAL-G). Su patio, que sirve de locación para los talleres de formación y de espacio para los bazares de recolección de fondos, era a su vez el lugar de construcción de unos grandes andamios para arreglar un puente derrumbado durante la época de lluvias. En el fondo, como un recordatorio, se leía en un mural desgastado “Zona de Reserva Campesina Losada Guayabero”.

Como lo afirma el presidente de la organización, Elver Medina, ASCAL-G es una organización campesina del Meta, que tiene como objetivo la defensa del territorio, del ambiente y la participación comunitaria. Su forma de organización está basada en las Juntas de Acción Comunal veredales, las cuales conforman núcleos municipales. A su vez, realizan frecuentemente asambleas que determinan normas colectivas para la defensa del ambiente y la construcción de proyectos para quienes habitan la región. “Podemos decir que todos los servicios que se han adquirido para la comunidad han sido de forma colectiva y se han construido entre todos. Por ejemplo, si hablamos de las vías de acceso, todas nuestras carreteras las hemos hecho entre todos, hombres y mujeres de las distintas veredas, lo mismo que los puentes, alcantarillas y escuelas”.

Transformar el territorio para la vida

Fueron los primeros comités ambientales en el Losada, en 1995, los que dieron origen a la Asociación. Inicialmente, estos comités buscaron enfrentar la caza y frenar la deforestación que se venía dando por parte de algunas familias en la región. Como resultado, el 7 de agosto de 1996 la población campesina firmó unos acuerdos ambientales que incluyeron la prohibición de la cacería de especies como la danta, el armadillo trueno, el venado y el ave paujil. También se pactó la protección de los nacimientos de agua: no talar, ni quemar el bosque. Veintisiete años después, el camino de la ZRC es un avance más para la protección ambiental y social del territorio.

“La idea es que las generaciones que vengan encuentren algo que nosotros hemos podido conservar, que hemos podido dejar el legado de que podemos trabajar, pero también respetar normas para garantizar la vida en el territorio”, dice el Presidente de ASCAL-G.

El camino para que la ZRC sea una realidad

Una Zona de Reserva Campesina (ZRC) es un territorio delimitado, solicitado por familias campesinas a través de sus organizaciones para estimular la economía campesina, controlar la mega expansión de la propiedad en manos de pocas personas (latifundio) y proteger el ambiente. Aunque algunos sectores de la opinión pública intentan deslegitimar esta iniciativa legislada en 1994, esta apuesta busca acercar a las entidades del Estado con las necesidades del campesinado.

Para que una ZRC sea una realidad, se requiere que una organización campesina sea promotora de esta iniciativa, que vincule a quienes

habitan en el territorio, presente un plan de desarrollo sostenible y un plan de manejo ambiental; y le entregue todo esto a la autoridad agraria encargada para sus respectivos ajustes y posterior aprobación. Aunque ASCAL-G cumplió con todos los requisitos, se financió con bazares y rifas para seguir los pasos, y en 2012 le entregó la solicitud al INCODER, entidad encargada en el momento de la aprobación de la ZRC, el proceso de constitución se congeló por más de una década.

Esta situación, común para otras dos organizaciones campesinas, llevó a que en diciembre de 2020 tres iniciativas de ZRC, con el apoyo de Dejusticia, presentaran una acción de tutela. Esta acción constitucional buscó que se reconociera que, aunque las organizaciones cumplieron con los requisitos en el tiempo adecuado y el Estado tiene obligaciones especiales con el campesinado, después de diez años seguían sin una decisión sobre estos territorios.

ASCAL-G, la organización campesina de Sumapaz y de Guejar Cafre ganaron la tutela. Este año la Corte Constitucional no sólo reconoció las fallas en el proceso de constitución de la ZRC, también destacó que las propuestas campesinas se deben cumplir. Adicionalmente, con la última decisión, la Corte recordó la importancia de avanzar en una ruta que reconozca territorios étnicos y campesinos, sin generar nuevos conflictos. De la mano del triunfo de la tutela, este año también se logró la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Losada-Perdido.

Tras años de espera, ASCAL-G logró la constitución formal de parte de la zona pretendida. Hoy, los letreros puestos en 2014 en San Juan de Losada, doblados y algo oxidados por el tiempo, tienen por fin un respaldo oficial. En la propuesta inicial, ASCAL-G solicitó un área que iba del río Losada al Guayabero, pero por ahora su delimitación

va hasta el río Perdido. Estos ajustes ocurrieron por la coexistencia de población campesina con el Parque Nacional Natural Tinigua con el pueblo tinigua. Sin embargo, con la constitución, en los últimos meses han llegado a la región funcionarios y funcionarias de la Agencia Nacional de Tierras para avanzar con lo prometido.

“Lo que nosotros esperamos es poder avanzar con garantías, que haya toda la inversión que necesitamos para poder consolidar nuestro plan de desarrollo sostenible” dice el presidente de ASCAL-G.

En la actualidad, la Asociación enfrenta los problemas propios de la desconexión, el conflicto armado, la desatención del Estado y los efectos de las políticas pensadas desde las capitales. En respuesta, ASCAL-G se ha encargado de cuidar a la juventud del territorio, proveer servicios, arreglar los puentes e impulsar estrategias de conservación ambiental. Su nueva meta: promover sus propuestas a través de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

El futuro de la Zona de Reserva Campesina Losada-Guayabero

El Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC Losada Guayabero sigue en construcción y las mujeres y jóvenes tienen nuevas apuestas para él. Este documento, que es la hoja de ruta para cumplir con las expectativas de la población campesina, se está ampliando para responder a las necesidades de estas poblaciones. Las más mencionadas por las mujeres son la importancia del fortalecimiento de sus organizaciones y contar con programas propios para ellas.

Por su parte, los jóvenes han planteado los retos que deben superar las ZRC en la actualidad. Aunque en la ruralidad no se han resuelto problemas del siglo pasado, sin duda alguna no se puede seguir apostando

al desarrollo agrario con un enfoque clásico. Es por esto que los jóvenes han incluido entre sus iniciativas la tecnificación, la mejora de las redes de internet, las formaciones en redes sociales, la promoción de alternativas de acceso para la educación superior, la importancia de programas de educación sexual y otras iniciativas. En el corto plazo, ASCAL-G continuará trabajando con la Agencia Nacional de Tierras para que la ZRC no quede en el papel.

Para que el Plan de Desarrollo Sostenible sea una realidad, no basta con el impulso del campesinado de la región. Esta iniciativa requiere del compromiso de las Alcaldías Municipales, de la Gobernación y de las entidades ambientales y agrarias. Además, como las propuestas de los jóvenes y las mujeres lo sugieren, se requiere que otras entidades cumplan sus obligaciones: Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer, Ministerio de las TIC, Ministerio de la Igualdad. Que las entidades trabajen conjuntamente para apoyar los reclamos campesinos no contribuye exclusivamente a la ZRC Losada Guayabero, también fortalece a las diez ZRC constituidas actualmente y las más de veinte que se ha propuesto constituir este gobierno en los años próximos.

MARCELA MADRID VERGARA

Sentido: el buen periodismo al servicio de la diversidad



SENTIIDO EMPEZÓ A CONTAR HISTORIAS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO CUANDO ERA UN TEMA IGNORADO EN COLOMBIA. ESTA ORGANIZACIÓN, QUE INICIÓ COMO UN PROYECTO DE GRADO Y HOY ES UN REFERENTE, LLEVA DOCE AÑOS VOLCANDO LA CREATIVIDAD Y LAS HERRAMIENTAS DEL BUEN PERIODISMO AL ESFUERZO POR REDUCIR LOS PREJUICIOS HACIA LAS PERSONAS LGBTIQ.

“Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, en el sentido contrario”. Esa frase, que pasaría a la historia después de causar risas en medio del Reinado Nacional de 2008, fue la inspiración con la que María Mercedes Acosta y Li Cuéllar nombraron su proyecto periodístico destinado a llenar el vacío mediático frente a los temas de diversidad sexual. Sentido Contrario nació como un blog en 2011, cuando a Colombia no había llegado Instagram ni los teléfonos inteligentes, cuando apenas estaban surgiendo los primeros medios digitales y LGBT era una sigla mayoritariamente desconocida o vista desde el prejuicio.

La idea de crear “algo digital” para hablar sobre género y diversidad surgió como un proyecto de grado de la maestría en periodismo digital que cursaba María Mercedes. Empezaron publicando columnas de opinión, reseñas de películas y artículos cortos desmintiendo los mitos más comunes sobre el tema. Así fueron llegando los primeros comentarios al blog y al perfil de Facebook. Las personas ajenas al tema agradecían la información clara, mientras que la población sexualmente diversa les manifestaba alivio de que por fin alguien los representara de forma respetuosa.

Era una apuesta tan novedosa como arriesgada, pues en ese momento el movimiento de la diversidad sexual en Colombia apenas estaba empezando a ganar visibilidad y derechos. Después de varios meses con ese experimento, María Mercedes, la periodista rigurosa, y Li, la académica “ñoña”, decidieron juntar sus “estilos, formas de escribir y de ver el mundo”, como dice Li, para dedicarse de lleno a esta apuesta. Dejaron de ser un blog para convertirse en un medio llamado Sentiido, crearon su página web, diseñaron una nueva imagen y empezaron a producir contenidos más profundos, con todos los elementos del buen periodismo.

Por ejemplo, hicieron un análisis sobre la manera como las emisoras juveniles estaban promoviendo la discriminación luego de que una de ellas, Los 40 Principales, causara indignación con una dinámica claramente homofóbica que invitaba a “reportar” al aire a las personas que consideraran “mariquitas”. También publicaron un artículo explicando los efectos del *bullying* escolar por homofobia, en el que destacaron iniciativas exitosas y consejos de psicólogas para abordar el problema desde las familias. Ambos casos eran una muestra de lo que sería Sentiido: periodismo con enfoque de género pero con las herramientas de la “vieja escuela”, como la documentación previa, la contrastación de fuentes, el contexto y la claridad. Sus historias aparecieron como un oasis en medio del desierto de los medios tradicionales, que escasamente abordaban el tema para anunciar cuando algún famoso salía del clóset.

Ni María Mercedes ni Li eran expertas en temas de género, sólo tenían claro que hacían parte de la sigla y que no se veían reflejadas en ese cubrimiento tradicional. Tampoco tenían idea de cómo crear un medio sostenible. Aprendieron haciendo reportajes y perfiles, conociendo historias y tocando puertas. Así llegaron a Juan David Aristizábal, un reconocido emprendedor social que les ofreció su tiempo y conocimiento para poder responder con contundencia cuando les preguntaran cuál era el modelo de negocio de Sentiido. Hoy son una organización sin ánimo de lucro con tres grandes líneas de acción alrededor de la diversidad sexual y el feminismo: la periodística, que es la más conocida y está en cabeza de María Mercedes; la de talleres y consultorías, a cargo de Li; y las investigaciones académicas, que dirige la literata y feminista Juliana Martínez.

Ser testigos y mensajeras de la historia

Sentiido fue creciendo a medida que Colombia avanzaba en derechos gracias a la insistencia del movimiento LGBTIQ. Cubrieron los planes a favor del matrimonio igualitario desde una Plaza de Bolívar dividida en dos: activistas de un lado y grupos conservadores del otro. Informaron por Twitter el minuto a minuto de aquellos debates en el Congreso donde un senador llegó a hablar de “sexo inane”. Hicieron charlas en vivo sobre la ley de identidad de género y el decreto trans. Celebraron las sentencias favorables en temas de adopción, educación, matrimonio y tantas otras durante los años de triunfos para el movimiento.

También estuvieron presentes en los momentos más amargos. Explicaron, desmintieron e informaron con argumentos cuando Viviane Morales intentó hacer un referendo contra la adopción igualitaria. También cuando llegó el golpe más duro: la ola de desinformación que se desató durante el plebiscito de 2016 por la supuesta “ideología de género”.

En ese camino se dieron cuenta de que los medios tradicionales cada vez le apostaban más a los temas de género y los cubrían con mayor respeto. Entonces aparecieron miles de dudas que las llevaron a dar un giro necesario: “Nos preguntamos si seguíamos siendo relevantes y eso fue un golpe muy duro. Entonces nos preguntamos qué es lo que hacemos diferente y empezamos a hacer un periodismo más lento, a dejar que la ‘chiva’ la pusieran ellos, nosotras vamos a hacer el análisis y vamos a buscar fuentes distintas a las que consultan siempre”, recuerda Li. Esto no solo les ha permitido seguir siendo relevantes sino que sus análisis e investigaciones son con frecuencia una fuente para los medios masivos.

Las fundadoras de Sentiido también se han transformado en el camino. Li aprendió a escribir sin pies de página y se volvió una autodidacta de la tecnología para aprender administrar la página web y adaptar sus contenidos a las exigencias del mundo digital. Por su parte, María Mercedes amplió su visión sobre el periodismo y aprendió a cuestionar esa línea roja de “no tomar partido” que le enseñaron en la facultad y en las grandes redacciones: “La diversidad sexual es parte del espectro de la realidad y si uno quiere hacer un cubrimiento periodístico completo tiene que tener en cuenta esa parte de la realidad. Si eso es tomar partido, entonces tomamos partido por un periodismo que incluya todo el espectro de personas”.

Creatividad para salir del nicho

El equipo de Sentiido —que suma diez personas del mundo periodístico, académico, pedagógico y otros colaboradores— sabe que se debe en gran medida al público LGBTIQ, pero tiene claro que esa no puede ser su única audiencia si realmente quieren contrarrestar la discriminación. Por eso también les hablan a papás y mamás, a docentes, a otros periodistas y hasta a líderes religiosos. Además de publicar contenidos en formatos que van desde el texto y el video hasta el cómic, el *podcast* o la animación, han creado personajes que se han ganado el cariño de sus audiencias. Los más recientes son la ‘Tía Nohora’ y el ‘Tío Jairo’, una personificación de quienes ven la diversidad sexual con distancia y dicen con tranquilidad frases como “yo hasta tengo amigos gays”, pero que están abiertas a resolver sus dudas.

En ese camino de conocer a sus audiencias llegaron a un descubrimiento: la religión es un aspecto crucial en la vida de muchas personas LGBTIQ. Y aunque religión y diversidad sexual parecen temas opuestos, Sentiido ha logrado abordarlos de forma permanente

y demostrarle a su audiencia que sí es posible combinarlos sin sentir culpa. Los artículos sobre religión son algunos de los más leídos de su página y la sección de comentarios se ha convertido en un espacio de desahogo y apoyo. Aunque hay quienes las tildan de “falsos profetas”, son miles los comentarios como el de Antonelia: “qué difícil es ser homosexual siendo cristiana”; el de Eduardo: “Dios es vida, para todos, para todo”; o el de Jairo: “Ojalá más iglesias acepten que sus feligreses son diversos”. Ese es el mejor ejemplo de la fórmula que, sin planearlo, ha aplicado Sentiido durante estos doce años: tomar riesgos, hablar de temas difíciles, construir comunidad y replantearse en el camino. Así pasaron de ser un proyecto de grado a un proyecto de vida, como dice Li, y se convirtieron en una organización que representa un espacio seguro para muchas personas y una biblioteca de aprendizajes para tantas otras.

Este libro se terminó de imprimir en marzo de 2024, en el Taller Artes y Letras S.A.S. Para la formación de textos se utilizaron fuentes de la familia tipográfica Filosofía, diseñada por Zuzana Licko, en 1996.

